

Diciembre 4 de 1946 (Tarde)

## 62ª REUNION — Continuación de la 15ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señor Silverio Pontieri

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

## DIPUTADOS PRESENTES:

Albriou, Oscar E.  
 Alvarez, Juan Daniel  
 Alvarez, Néstor  
 Alvarez Pereyra, Manuel  
 Alvarez Pérez, Vicente  
 Alvarez Vocos, Enrique  
 Allub, Rosendo  
 Araoz, Ricardo E.  
 Arévalo Cabeza, Jabel  
 Argaña, José M.  
 Arias, José  
 Ayala López Torres, Francisco  
 Bagnasco, Vicente  
 Balbín, Ricardo  
 Barreiro, Carmelo  
 Benítez, Antonio J.  
 Bertini, Amadeo  
 Bonazzola, Romeo E.  
 Boullosa, Emilio M.  
 Braga, Juan Carlos  
 Busaniche, Julio J.  
 Bustos Fierro, Raúl  
 Calcagno, Alfredo D.  
 Cámara, Guillermo F.  
 Cámpora, Héctor J.  
 Camus, Eloy P.  
 Candiotti, Alberto M.  
 Casal, Raúl M.  
 Casas Noblega, Armando  
 Cleve, Ernesto  
 Cooke, John William  
 Córdova, J. Salvador  
 Corvalán, Luciano R.  
 Cufre, Orlando H.  
 Churchod, Amado J.  
 Decker, Rodolfo A.  
 Degreef, Juan Ramón  
 De la Torre, Juan  
 Del Carril, Emilio Donato  
 Del Mazo, Gabriel

Dellepiane, Luis  
 Díaz Colodrero, Justo  
 Díaz de Vivar, Joaquín  
 Díaz, Manuel M.  
 Dri, Roberto  
 Dufau, Juan Adolfo  
 Errecart, Juan A.  
 Fajre, José Benito  
 Fernández, Baltasar S.  
 Fernández, Hernán S.  
 Ferrando, Manuel P.  
 Ferrer, Modesto  
 Fregossi, Luis J.  
 Frondizi, Arturo  
 Galvagni, Saverio M.  
 Garaguso, Bernardino Hipólito  
 Garay, Marcelino S.  
 García, Manuel  
 García Quiroga, Alejandro  
 Giménez Vargas, Francisco  
 Guardo, Ricardo C.  
 Guillot, César Joaquín  
 Klix López, Guillermo  
 Lareo, Ricardo  
 Lasciar, Guillermo F.  
 Lencinas, José R.  
 Letamendi, Balbino (h.)  
 Liceaga, Félix J.  
 López Serrot, Oscar  
 Mac Kay, Luis R.  
 Malecek, José Enrique  
 Mantaras, Manuel J.  
 Mariategui, Angel S.  
 Martínez Guerrero, Guillermo  
 Martínez Luque, Enrique  
 Mendiondo, F. Daniel  
 Messina, Humberto  
 Montes de Oca, Carlos  
 Montiel, Alcides E.  
 Moreno, José Luis  
 Mosset Iturraspe, Mario  
 Mujica, Rodolfo

Noriega, Juan J.  
 Obeid, Leonardo  
 Orozco, Modesto V.  
 Osinalde, Rafael  
 Ottonello, Benito J.  
 Pasquini, José P. D.  
 Pastor, Reynaldo A.  
 Peña Guzmán, Solano  
 Perea, Pedro J.  
 Pérez de la Torre, Horacio  
 Petruzzi, Miguel  
 Pirani, Antonio S.  
 Pomar, Gregorio  
 Ponce, Angel L.  
 Pontieri, Silverio  
 Pueyrredón, Horacio Honorio  
 Raña, Eduardo Antonio  
 Ravnigani, Emilio  
 Reyes, Cipriano  
 Reynés, Leandro R.  
 Rodríguez de la Torre, Raúl  
 Rodríguez, Nerio M.  
 Rojas, Absalón  
 Rojas, Nerio  
 Rossi, José  
 Rouggier, Valerio S.  
 Rubino, Sidney Nicolás  
 Rumbó, Eduardo I.  
 Sammartino, Ernesto E.  
 Santander, Silvano  
 Saravia, Teodoro S.  
 Sarmiento, Manuel  
 Sarraute, José Roberto  
 Sobral, Antonio  
 Solanet, Emilio  
 Sargentini, Mario Alberto  
 Sustaita Seeber, Héctor  
 Tesorieri, José V.  
 Tommasi, Victorio M.  
 Toro, Ricardo  
 Urdapilleta, Oscar C.  
 Valdez, Celestino

Vanasco, Julio A.  
 Velloso Colombres, Manuel F.  
 Vergara, Amando  
 Villafañe, José María  
 Visca, José Emilio  
 Vischi, Albino  
 Zanoni, Pedro P.  
 Zara, Edmundo Leopoldo  
 Zinny, Mario

## AUSENTES, CON LICENCIA:

Andreotti, Antonio  
 Antille, Diógenes C.  
 Ayerbe, Lázaro Balbino  
 Baulina, Angel V.  
 Beretta, Eduardo  
 Colem, Eduardo  
 Cumineti Correa, Alcides D.  
 Gericke, Carlos Gustavo  
 Graña Etcheverry, Manuel  
 Ianspolsky, Angel  
 Jofré, Hernán R.  
 Kees, Gaspar  
 Marotta, José  
 Palacio, Ernesto  
 Polizzi, Juan  
 Repetto, Agustín  
 Rodríguez, Manuel  
 San Millán, Ricardo Antonio

## AUSENTES, CON AVISO:

Brugnerotto, Juan N. D.  
 González Funes, Tomás  
 Maineri, D. Jacinto  
 Ricagno, Roberto  
 Uranga, Raúl L.

## AUSENTE, SIN AVISO:

Tejada, Ramón Washington

## SUMARIO

1.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes sobre ratificación legislativa de decretos relacionados con la creación y funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social. Se sanciona.

2.—Consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ley sobre ratificación legislativa de decretos referentes a régimen bancario y organización económica.

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 1946, siendo las 16:

rios, por lo que creo que la discusión amplia servirá para corregir sus errores.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Se va a votar la reconsideración de la votación con respecto al decreto 6.216.

— Resulta negativa de 62 votos; votan 101 señores diputados.

— El artículo 2º es de forma.

**Sr. Presidente (Guardo).** — Queda sancionado el proyecto de ley.

## 2

### REGIMEN BANCARIO Y ORGANIZACION ECONOMICA

(Orden del día número 173) (1)

*Honorable Cámara:*

Vuestra Comisión Especial Encargada del Estudio en Revisión de la sanción del Honorable Senado sobre ratificación de los decretos leyes dictados en el período comprendido entre el 4 de junio de 1943 e igual fecha en 1946 —expediente 36-S-1946— aconseja, por las razones que dará el miembro informante, la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Continuarán en vigor con fuerza de ley, a partir de la fecha de su publicación, los decretos leyes que a continuación se transcriben:

I— (97-S)

#### DECRETO 8.503/46

#### Nacionalización del Banco Central de la República Argentina

Buenos Aires, 25 de marzo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

#### DECRETA:

Artículo 1º — Desde la fecha del presente decreto ley queda nacionalizado el Banco Central de la República Argentina, como entidad autárquica, que cumplirá los objetivos previstos en su ley de creación 12.155 y leyes concordantes, conforme a las siguientes disposiciones.

Art. 2º — Declárase de patrimonio nacional el capital del Banco Central de la República Argentina. El aporte privado de los actuales bancos accionistas será reintegrado en bonos especiales del Tesoro del 2 ½ %, emitidos a tal efecto, o bien por su equiva-

lente en dinero efectivo. Estos bonos especiales podrán ser rescatados por el Banco Central de la República o convertidos por sus tenedores, a la par, en cualquier momento.

Art. 3º — A partir de la fecha del presente decreto ley cesará en sus funciones el actual directorio del Banco Central de la República y en lo sucesivo este establecimiento bancario oficial será gobernado por un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y trece directores, todos ellos argentinos nativos.

Art. 4º — El presidente del Banco Central de la República deberá ser persona de reconocida experiencia industrial, comercial y bancaria, de amplia solvencia moral y material y será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Durará siete años en su cargo, del cual sólo podrá ser separado por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político. Podrá ser reelecto indefinidamente.

Art. 5º — El vicepresidente deberá tener las mismas condiciones personales exigidas para el presidente y su designación se efectuará en la forma prevista para el nombramiento de este último.

Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto indefinidamente.

Art. 6º — El presidente y vicepresidente percibirán los sueldos o asignaciones que actualmente corresponden, respectivamente, a los titulares de iguales cargos en el directorio del Banco Central de la República.

Art. 7º — El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencias o impedimentos transitorios, debiendo designarse un nuevo presidente cuando la vacancia se produzca por fallecimiento, remoción o por renuncia.

Art. 8º — De los trece directores, tres serán los presidentes, respectivos, de los bancos de la Nación Argentina, Crédito Industrial Argentino e Hipotecario Nacional; cinco, representarán a los siguientes departamentos y secretarías de Estado: Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión, y los cinco restantes deberán ser, respectivamente, representantes auténticos de la industria, de la agricultura, de la ganadería, del comercio y de las fuerzas del trabajo.

Art. 9º — Los directores que representen los departamentos y secretarías de Estado y los sectores de la economía nacional mencionados en el artículo precedente serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los respectivos departamentos o secretarías de Estado y de las entidades representativas de dichos sectores.

Los cinco directores representantes de los sectores económicos serán nombrados por la primera vez directamente por el Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Los directores a que se refiere el artículo 9º durarán cuatro años en su mandato; podrán ser reelegidos indefinidamente y se renovarán cada bienio. El primer directorio determinará la forma y proporción en que se realizará el sorteo correspondiente para la primera renovación parcial de sus integrantes.

Art. 11. — No podrán ser miembros del directorio con las representaciones especificadas en el artículo 9º, las personas que sean funcionarios o empleados de la administración nacional o provincial o de reparticiones autárquicas.

(1) Véase el índice de los decretos leyes en la página 838.

Art. 12. — Los directores citados en el artículo 9º gozarán de una remuneración mensual de dos mil pesos moneda nacional, cuyo monto total se repartirá de acuerdo a su asistencia a las reuniones del directorio.

Art. 13. — El presidente, el vicepresidente y el directorio ejercerán las funciones y tendrán las atribuciones conferidas a cada uno de ellos por los artículos 17, 19 y 20 de la ley 12.155 y así como toda otra facultad prevista en dicha ley, en su reglamentación o en las leyes o decretos complementarios que fueran necesarios para el mejor gobierno de la institución y que sean compatibles con la nueva estructuración de la misma.

Art. 14. — El gerente general y el subgerente general deberán ser argentinos nativos y serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del directorio.

Art. 15. — El directorio deberá elevar al Poder Ejecutivo, dentro del término de sesenta (60) días, a contar de la fecha del presente, los proyectos complementarios y reglamentaciones de este decreto ley.

Art. 16. — Entre tanto se reestructure el régimen general de bancos y se coordine la relación de las instituciones que a continuación se detallan, quedarán desde la fecha sometidas a la superintendencia del directorio del Banco Central de la República las siguientes instituciones: Banco de la Nación Argentina, Banco de Crédito Industrial Argentino, Banco Hipotecario Nacional, Caja Nacional de Ahorro Postal, Comisión Nacional de la Vivienda, Consejo Agrario Nacional, Corporación para la Promoción del Intercambio S. A., Comisión Nacional de Granos y Elevadores, Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, Comisión Nacional de la Industria Lechera, Comisión Nacional de Fomento Industrial, Junta Reguladora de la Producción Agrícola, Junta Nacional de Carnes, Junta Reguladora de Vinos, Junta Nacional del Algodón y Junta Nacional del Azúcar.

Las entidades nombradas deberán prestar a dicho directorio toda la colaboración que le requiera y le elevarán dentro del término de cuarenta (40) días de la fecha sus respectivas cartas orgánicas con las modificaciones que el directorio del Banco Central de la República disponga en cada caso. Este último, a su vez, elevará dichos proyectos al Poder Ejecutivo dentro del plazo establecido en el artículo 15.

Art. 17. — En lo que sean compatibles con las presentes disposiciones y mientras no se haya dictado dicho régimen general de bancos, quedan vigentes las disposiciones de la ley 12.155 y sus complementarias, la ley de bancos 12.156, y las cartas orgánicas de las instituciones mencionadas en el artículo 16.

Art. 18. — Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto ley.

Art. 19. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 20. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

— FARRELL.

Juan Pistarini. — Amaro Avalos. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — Abelardo Pantin. — José M. Astiguzeta. — Felipe Urdapilleta. — Joaquín I. Sauri. — Bartolomé de la Colina. — Héctor F. Russo.

II—(103-S)

DECRETO 11.554/46

### Garantía de depósitos bancarios

Buenos Aires, 24 de abril de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — A partir de la fecha del presente decreto ley, la Nación garantiza todos los depósitos de terceros hechos en los bancos oficiales, particulares y mixtos establecidos en el país, en cuenta corriente, caja de ahorros, plazo fijo, o bajo otras denominaciones que constituyan contrato de depósito a juicio del Banco Central de la República, con o sin premio. En consecuencia de esta garantía, los establecimientos bancarios procederán a registrar a nombre del Banco Central de la República Argentina, desde esa misma fecha, los referidos depósitos, mediante los pertinentes asientos de contabilidad, así como los movimientos que por cancelaciones, retiros, transferencias o nuevos ingresos se produzcan en las respectivas cuentas. A tal efecto, se confiere a los bancos mandato legal para actuar como agentes directos del Banco Central de la República Argentina, con las responsabilidades y deberes propios de ese carácter.

Art. 2º — El Banco Central de la República Argentina tomará a su cargo los gastos financieros o intereses a pagarse a los titulares de los depósitos y compensará a los bancos, según convenga con los mismos, los gastos administrativos que les irroque el servicio.

Art. 3º — Los bancos no podrán girar sobre ni usar los depósitos a que se refiere este decreto, salvo autorización documentada del Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de atender los retiros y movimientos que sobre los mismos dispongan sus titulares. Como mandatarios legales del Banco Central, los bancos mantendrán la atención y el trato de la clientela de depósitos bajo las mismas formas y reglas vigentes en la actualidad.

Art. 4º — Los bancos, para la continuidad de sus operaciones de descuento e inversión, se atenderán al uso de sus propios capitales y reservas disponibles y podrán redescantar sus propias carteras en el Banco Central de la República Argentina hasta el límite y bajo las condiciones que éste establezca, según el estado del mercado monetario y la liquidez de cada establecimiento.

A este efecto, el Banco Central de la República Argentina establecerá márgenes o calificaciones especiales, adecuados a cada banco, para redescuento de cartera, créditos en cuentas corrientes, inversiones en valores mobiliarios y demás operaciones propias del giro bancario. Podrá establecer, también, según lo requieran los diversos sectores de la producción y lo permita el carácter de los depósitos recogidos por cada banco, además de la calificación para el redescuento de operaciones de corto plazo, márgenes adicionales para operaciones de mediano y largo plazo respaldadas con garantías reales u otras suficientes, a juicio del Banco Central.

Art. 5º — Cuando medien causas justificadas para mejorar la liquidez de los bancos, apreciadas por el Banco Central, éste podrá tomarles en caución títulos nacionales, municipales o provinciales que se coticen en las bolsas de comercio del país, bajo condiciones y términos que el Banco Central establecerá.

Art. 6º — El Banco Central fijará los tipos de interés a que se ajustarán los redescuentos a que se refiere el artículo 4º y las cauciones aludidas en el artículo 5º. La fijación tendrá en cuenta el estado del mercado monetario y la política de promoción económica que se desenvuelva por medio del crédito y podrá consistir en tasas diferenciales según sea el destino de los préstamos que efectúen los bancos. Fijará también las tasas aplicables al uso de capitales para créditos en cuenta corriente y para inversiones.

Art. 7º — La reglamentación del presente decreto ley será elevada al Poder Ejecutivo para su aprobación, conjuntamente con los proyectos y reglamentaciones a que se ha referido el artículo 15 del decreto ley 8.503/46.

Art. 8º — Hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe la reglamentación a que se refiere el artículo precedente, el Banco Central de la República Argentina aplicará de inmediato el presente decreto ley conforme a los requisitos, sistemas, procedimientos y convenciones que para tal objeto considere necesarios y útiles.

Art. 9º — Quedan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto ley.

Art. 10. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Abelardo Pantin. — Felipe Urdapilleta. — Juan I. Cooke. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — José M. Astigueta. — F. Pedro Marotta.*

III—(98-S)

DECRETO 14.957/46

### **Banco Central de la República Argentina**

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

#### **CAPÍTULO I**

##### *Naturaleza y objeto*

Artículo 1º — El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica nacional con la más completa independencia para el ejercicio de sus funciones, y se regirá por las disposiciones del decreto ley 8.503/46, las del presente y las demás normas legales concordantes en vigor.

La Nación garantiza todas las obligaciones que contraiga el banco.

Art. 2º — El banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Por resolución de su directorio po-

drá establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales tanto en el país cuanto en el extranjero.

Art. 3º — El banco tendrá por objeto:

- Promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación;
- Moderar, con las reservas y demás medios a su alcance, los efectos que sobre el valor de la moneda y la actividad económica puedan tener las fluctuaciones del comercio exterior y los movimientos internacionales de capitales y su inversión;
- Regular la cantidad de crédito y los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios a fin de mantener el poder adquisitivo de la moneda;
- Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito y aplicar las disposiciones del decreto ley 11.554/46, de la ley de bancos y las demás normas legales que en su consecuencia se dicten;
- Encargarse de las operaciones de crédito interno y externo y de la emisión de los empréstitos públicos por cuenta del gobierno nacional;
- Actuar como consejero económico y financiero de las autoridades del Estado.

#### **CAPÍTULO II**

##### *Capital*

Art. 4º — El capital del banco es de \$ 20.000.000 moneda nacional y sus reservas.

#### **CAPÍTULO III**

##### *Directorio*

Art. 5º — El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y trece directores, todos los cuales deberán ser argentinos nativos.

Art. 6º — El presidente y el vicepresidente serán personas de reconocida experiencia industrial y comercial o bancaria y financiera y de solvencia moral y material. Los designará el Poder Ejecutivo nacional.

El presidente sólo podrá ser removido de su cargo por mal desempeño o delito en la ejecución de sus funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político.

Durarán siete y cuatro años respectivamente en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelectos indefinidamente.

Art. 7º — El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste; y, en caso de vacancia del cargo, hasta tanto sea designado el titular.

Art. 8º — Son directores natos del Banco Central de la República Argentina los presidentes o los vicepresidentes de los bancos de la Nación Argentina, de Crédito Industrial Argentino e Hipotecario Nacional. Los diez directores restantes serán designados por

el Poder Ejecutivo nacional a propuesta, cada uno de ellos, de los departamentos o secretarías de Estado de Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión y, conforme a la reglamentación que se dicte, por los sectores de la agricultura, de la ganadería, de la industria, del comercio y de las fuerzas del trabajo.

Art. 9º — Los diez directores designados por el Poder Ejecutivo nacional durarán cuatro años en sus mandatos, podrán ser reelectos indefinidamente y se renovarán cada bienio. Si alguno de estos directores falleciese o renunciase o en alguna otra forma dejase vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fué designado, se procederá a elegir otro director, para completar el período, en la forma establecida en el artículo 8º.

No podrán ocupar los cargos mencionados:

- a) Los miembros de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, o de municipalidades;
- b) Los fallidos o concursados civilmente;
- c) Los condenados por delitos comunes;
- d) Los que forman parte de la dirección o administración o que dependan de las entidades comprendidas en el decreto ley 14.962/46.

Art. 10. — Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y de los diez directores designados por el Poder Ejecutivo nacional serán las que fije el presupuesto del banco, no pudiendo ser disminuidas mientras dure el período en curso de su mandato.

Art. 11. — El presidente ejercerá, en representación del directorio, el gobierno del banco, y estará autorizado para actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión del directorio, y aun en este caso, cuando lo exijan razones de urgencia, debiendo entonces dar cuenta al directorio en la primera oportunidad. Será al mismo tiempo el representante legal del banco en todas sus relaciones con terceros. Le corresponde nombrar, promover, suspender y separar de sus puestos a los empleados, dando cuenta al directorio.

Art. 12. — El presidente convocará a las reuniones del directorio, por lo menos una vez cada quince días. Ocho miembros formarán quórum y, salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente o quien ocupe la presidencia tendrá doble voto.

Art. 13. — Al directorio le corresponde:

- a) Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco; decidir sobre las operaciones, dictar las disposiciones internas y resolver los casos no previstos, y someter a consideración del Poder Ejecutivo nacional el presupuesto anual de sueldos y gastos;
- b) Aprobar anualmente el balance general del banco, la cuenta de «Ganancias y Pérdidas», y la memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo y publicado;
- c) Nombrar anualmente un vicepresidente segundo de entre los directores;
- d) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
- e) Nombrar corresponsales, reglamentando sus relaciones con el banco;

- f) Fijar tasas de redescuento e interés sobre los créditos que acuerde y las obligaciones que decida emitir;
- g) Adquirir y enajenar los inmuebles necesarios para las operaciones del banco y vender los que haya adquirido de acuerdo con el artículo 21, inciso e);
- h) Considerar las operaciones de redescuento y demás préstamos en vigor;
- i) Proponer al Poder Ejecutivo nacional el nombramiento del gerente general y del subgerente general;
- j) Determinar las sumas que corresponda destinar a provisiones y reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50;
- k) Elevar al Poder Ejecutivo nacional, formulando las consideraciones que le merezcan, los balances, memorias y presupuestos de las instituciones que se mencionan en el artículo 56;
- l) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto al personal del banco.

#### CAPÍTULO IV

##### Gerencia

Art. 14. — La administración del banco será ejercida por intermedio del gerente general y en lo que se le asigne por el subgerente general.

Art. 15. — El gerente general y el subgerente general serán argentinos nativos designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del directorio. El gerente general sólo podrá ser removido de su cargo por mal desempeño o delito en la ejecución de sus funciones o por crímenes comunes conforme al procedimiento establecido para el juicio político. La retribución no podrá ser disminuida.

Art. 16. — El gerente general y el subgerente general son los principales funcionarios del banco, y los asesores del presidente y directores. En ese carácter el primero, y en su ausencia el segundo, asistirá a las reuniones del directorio.

Son responsables del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones especiales del directorio.

El gerente general, y el subgerente general en su caso, informará diariamente al presidente sobre la marcha del banco.

#### CAPÍTULO V

##### Operaciones del banco

Art. 17. — El Banco Central de la República Argentina realizará las siguientes operaciones, en las condiciones que fije el directorio:

- a) Emisión de billetes y monedas de acuerdo con las disposiciones de este decreto ley;
- b) Recepción de depósitos por intermedio de los bancos oficiales, mixtos y particulares autorizados;
- c) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos, en cuya concertación deberá intervenir.

Art. 18. — El banco podrá, en las condiciones que determine el directorio:

- a) Comprar y vender oro y divisas o cambio extranjero y fijar los tipos de cambio cuando técnicamente corresponda;
- b) Emitir títulos, bonos y cédulas con garantías hipotecarias, así como certificados de participación en los valores públicos que posea, y otras obligaciones con o sin garantías especiales;
- c) Redescuentar a los bancos documentos —letras, pagarés, títulos y otros valores de inversión— provenientes de las operaciones que se hallen autorizados a realizar;
- d) Hacer adelantos en cuenta y otros préstamos a los bancos, con caución de títulos públicos u otros valores o con garantía especial o general sobre activos determinados, ya sea autorizándolos a utilizar fondos provenientes de depósitos que hayan recibido por cuenta del Banco Central de la República Argentina o proporcionándoles otros recursos;
- e) Acordar adelantos con garantía de oro amonedado o en barras;
- f) Recibir oro en custodia;
- g) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales, o representar o formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se cree con propósitos de cooperación bancaria, monetaria, económica o financiera;
- h) Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno nacional. Estas operaciones las hará por cuenta exclusiva del gobierno y sin que el banco pueda subscribir tales valores ni garantizar su colocación;
- i) Adquirir valores nacionales como inversión propia hasta un monto que en ningún caso podrá exceder el del capital del banco, sus reservas y el importe amortizado de los bonos consolidados del Tesoro nacional que posee.

En los casos de los incisos c), d) y e) deberán disponerse los necesarios márgenes de garantía con carácter de reserva técnica.

Art. 19. — El banco fijará las tasas de interés para redescuentos y préstamos a los bancos, así como para los depósitos que éstos reciban, con la obligación de que ellas sean uniformes dentro de la misma zona o plaza bancaria para cada clase de operación.

Art. 20. — El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender en plaza, por su cuenta, con fines exclusivos de regulación bursátil o monetaria, valores nacionales hasta un importe no superior al 10 % del promedio de los saldos de depósitos registrados por el conjunto de bancos autorizados en los tres años que precedan a cada ejercicio corriente. Todo ello sin perjuicio de los que pueda adquirir como inversión de su capital y reservas, de acuerdo con el artículo 18, inciso i).

Art. 21. — Queda prohibido al banco:

- a) Conceder préstamos al gobierno nacional, sin perjuicio de:

- 1º Las operaciones autorizadas por el artículo 36; y
- 2º El redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales o de servicios públicos que pertenezcan total o parcialmente al Estado, siempre que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de la Nación.

- b) Conceder préstamos a las provincias, municipalidades o reparticiones autónomas dependientes de ellas, sin perjuicio del redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales o de servicios públicos que pertenezcan total o parcialmente a las provincias o municipalidades, siempre que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de aquéllas;
- c) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o instituciones similares;
- d) Conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en descubierto, salvo la autorización a los bancos para utilizar fondos provenientes de depósitos y en el caso de convenios de créditos recíprocos concertados con otros bancos centrales;
- e) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen necesarios para que el banco pueda desenvolver sus actividades. Si en la opinión del directorio corriera peligro algún crédito concedido por el banco, éste podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor y podrá adquirir estos bienes raíces o mercaderías, pero estará obligado a venderlos tan pronto como le sea posible.

## CAPÍTULO VI

### *Emisión de moneda y garantías metálicas*

Art. 22. — El Banco Central de la República Argentina es el encargado exclusivo de la emisión de billetes de la Nación Argentina y ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera podrán emitir billetes ni moneda metálica ni otros documentos que fuesen susceptibles de circular como papel moneda.

Art. 23. — El banco tomará también a su cargo los billetes y monedas metálicas de denominaciones de cinco pesos y menores y procederá a reemplazar aquéllos a medida que por su desgaste sean retirados de la circulación.

Art. 24. — Por el importe de la moneda subsidiaria emitida hasta la fecha de este decreto ley a cargo del gobierno nacional, el Banco Central incrementará el bono sin interés a que se refiere el artículo 4º de la ley 12.160.

Art. 25. — Los billetes y monedas metálicas del Banco Central de la República Argentina tendrán curso legal en todo el territorio de la República Argentina, por el importe expresado en ellos. Los billetes y monedas metálicas serán de las denominaciones que fije el directorio.

Art. 26. — Los billetes deberán expresar en su texto la obligación del Banco Central de pagar al portador y a la vista la cantidad de moneda nacional expresada en su denominación. Llevarán además el facsímil de la firma del presidente y del gerente general o de quienes los reemplacen en las funciones al momento de la emisión.

Art. 27. — El banco mantendrá en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso,

ya sea en oro, divisas o cambio extranjero equivalente al 25 %, como mínimo, de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista.

El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al banco sin restricción alguna; y de las divisas o cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones en oro y divisas o cambio extranjero.

Si en un ejercicio determinado la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al 33 %, durante sesenta días seguidos o noventa días en todo el ejercicio, el total de los beneficios del gobierno será destinado al fondo de reserva general.

Las obligaciones por depósitos recibidos por intermedio de los bancos deberán estar respaldadas por documentos comerciales, valores públicos y privados, depósitos disponibles a la orden del Banco Central de la República Argentina en los bancos, u otros bienes de éstos que garanticen el cobro de los créditos que el Banco Central de la República Argentina les haya acordado.

Art. 28. — En ningún caso el banco podrá tener divisas o cambio extranjero, cuyo valor en relación al oro no se halle asegurado por una garantía seria que exceda al 20 % de las reservas que respalden la emisión de moneda, ni computarlas dentro de las mismas por más del 10 por ciento.

Art. 29. — El banco estará obligado a cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 (400 onzas troy), por oro o, a opción del banco, por divisas o cambio extranjero. La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero o viceversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o abajo de la par.

Art. 30. — Toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda, comunicará el hecho con todos sus antecedentes al Poder Ejecutivo nacional para que éste tome la medida del caso.

## CAPÍTULO VII

### *Relaciones con los bancos*

Art. 31. — En su calidad de mandante de los bancos para la recepción de depósitos, el Banco Central de la República Argentina podrá exigirles, como condición del mantenimiento o concesión de la autorización para funcionar, el compromiso —y su cumplimiento— de prestar los servicios bancarios que él requiera, sin traba ni omisión alguna, en especial en cuanto se refieran a la recepción de depósitos por su cuenta. El banco satisfará los gastos que esos servicios les irroguen.

Art. 32. — Las distintas entidades oficiales, nacionales, provinciales o municipales, que por razón de sus funciones se hallan comprendidas en el decreto ley 11.554/46, en la ley de bancos, en el presente o sus complementarios, tratarán de coordinar el desenvolvimiento de sus actividades de manera que no superpongan en forma inconveniente su acción dentro de una misma zona bancaria o plaza. A ese fin celebrarán entre sí convenios, con intervención del Banco Central de la República Argentina, el cual tendrá a su cargo la vigilancia del cumplimiento y la interpretación de sus cláusulas.

Los bancos mixtos y particulares podrán adherir a esos convenios, previa conformidad de los contratantes y del Banco Central de la República Argentina.

Art. 33. — Los bancos de las provincias y municipios, oficiales o mixtos, así como los bancos particulares, podrán participar en los planes de fomento que desarrollen los bancos oficiales de la Nación, caso en el cual gozarán, a ese efecto, de los beneficios y privilegios reconocidos a estos últimos.

El Banco Central de la República Argentina, al cual los bancos deberán solicitar la participación en esos planes, la aceptará en la medida que lo permitan las reservas que tenga acumuladas para cubrir por su cuenta los quebrantos totales o parciales que pudieran ocasionar dichas operaciones. A tal objeto se celebrarán convenios especiales.

Art. 34. — El Banco Central de la República Argentina administrará las cámaras compensadoras existentes o que se instalen en el futuro en cualquier punto del país.

## CAPÍTULO VIII

### *Relaciones con el gobierno nacional*

Art. 35. — Las relaciones del Banco Central de la República Argentina con el Poder Ejecutivo nacional se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda de la Nación.

Art. 36. — El banco podrá hacer adelantos por tiempo limitado al gobierno nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación, hasta una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los tres últimos años; todos los adelantos, hechos por este concepto deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados, y si cualquier adelanto de esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo, no podrá volver a usarse la facultad del banco para hacer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsiguientes hasta que las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sobre esos adelantos el gobierno pagará un interés no mayor que el tipo mínimo de redescuento en vigor.

Art. 37. — El Banco Central de la República Argentina directamente, o por medio de los bancos autorizados cuando él lo requiera, se encargará de realizar las remesas y transacciones bancarias del gobierno nacional, tanto en el interior del país como en el extranjero; recibirá los fondos del gobierno nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo. El banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en las cuentas del gobierno ni percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta, pero podrá cargarle los gastos que a su vez haya pagado a los bancos.

Art. 38. — El banco abrirá una cuenta general para la Tesorería General de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones, de cualquier clase que sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orden de la tesorería y con intervención de la Contaduría General de la Nación.

Art. 39. — El Banco Central de la República Argentina, en su carácter de agente financiero del gobierno nacional, podrá ampliar con sus propios recursos el fondo de divisas, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, si así lo exigiere la situación del mercado. El oro y las divisas compradas en vir-

tud de dicha ampliación, deberán anotarse en las cuentas del Banco Central sin perjuicio de los asientos que sea necesario efectuar en las cuentas de orden del gobierno nacional y de las operaciones que el Banco Central realice por su propia cuenta.

Cualquier diferencia que resultare en el valor del oro y las divisas compradas por el Banco Central, conforme con este artículo, será por cuenta exclusiva del gobierno nacional.

Art. 40. — El Ministerio de Hacienda de la Nación deberá suministrar al banco las siguientes informaciones correspondientes a cada trimestre:

- a) Movimiento de entradas y salidas de la Tesorería General de la Nación por sus distintos conceptos;
- b) Detalle de la recaudación de las rentas en efectivo y del producto de los recursos del crédito;
- c) Gastos comprometidos, conforme lo permita la implantación de la contabilidad respectiva; y
- d) Estado de la deuda consolidada y flotante. —

Aparte de esas informaciones el banco podrá requerir al Ministerio de Hacienda y a las demás secretarías de Estado y reparticiones públicas, aquellas otras que le fuesen necesarias o útiles a los fines del mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 41. — El banco, en su carácter de consejero financiero del gobierno nacional, y sin perjuicio de los asuntos especiales que éste le someta en consulta, deberá informarle periódicamente acerca del estado económico y monetario del país y, en especial, su relación con el desenvolvimiento de las finanzas del Estado y el crédito público interno y externo, así como acerca de los acontecimientos de índole internacional que influyan particularmente sobre la situación económica y financiera argentina.

Anualmente, y sin perjuicio de las demás informaciones que el Banco Central proporcione al Poder Ejecutivo nacional, le suministrará una información especial concerniente al desempeño de sus funciones de agente financiero del gobierno nacional, la que podrá ser incluida como un capítulo de la memoria general del banco.

Art. 42. — La sede del banco y la de sus sucursales y las operaciones que efectúe directamente o por intermedio de los bancos autorizados estarán exentas de todo impuesto o contribución nacional, provincial o municipal, siempre que se trate de pagos que de otra manera debieran estar a su cargo.

## CAPÍTULO IX

### Mercado de valores

Art. 43. — El Banco Central actuará como agente financiero del gobierno nacional, y por cuenta de éste, en la emisión de los empréstitos públicos de cualquier clase y plazo y en la atención de los servicios de la deuda pública interna y externa.

Art. 44. — El banco podrá colocar los valores nacionales en venta directa o en la bolsa, o mediante sindicatos o consorcios bancarios que los adquieran en firme para negociarlos en el público. El Banco Central no podrá ser miembro de las bolsas, sindi-

catos o consorcios, pero podrá intervenir en ellos para fiscalizar su funcionamiento. El banco cobrará comisión por los servicios mencionados y debitará su importe en la cuenta de la Tesorería General de la Nación, comunicándolo de inmediato al Ministerio de Hacienda para que proceda a la imputación correspondiente.

Art. 45. — Toda venta o compra de valores nacionales que tengan que realizar las reparticiones nacionales, sean o no autónomas, y las cajas de jubilaciones nacionales, deberán ser efectuadas por intermedio del Banco Central. Asimismo, le deberán ser previamente consultadas las ofertas que dichas reparticiones y cajas desearan presentar en las licitaciones para la amortización de la deuda pública.

Art. 46. — El Banco Central de la República Argentina queda facultado para convenir ad referendum del Ministerio de Hacienda con los agentes fiscales o pagadores, las medidas que juzgue más convenientes para la debida atención, por cuenta del gobierno nacional, de los servicios de la deuda pública externa.

Art. 47. — El Banco Central de la República Argentina debitará en la cuenta de la Tesorería General de la Nación el importe de los servicios de la deuda pública interna y externa atendidos por el banco por cuenta del gobierno nacional. Informará de inmediato sobre esta operación, para su imputación correspondiente, al Ministerio de Hacienda de la Nación, al cual deberá presentar además las rendiciones de cuentas respectivas.

Los gastos que irroque al banco la atención de los servicios de la deuda pública, serán descontados de la parte de beneficios del mismo que corresponde al gobierno nacional.

Art. 48. — El Banco Central de la República Argentina facilitará en cualquier momento a los funcionarios que designe la Contaduría General de la Nación el control de todos los actos relativos a la emisión y colocación de empréstitos públicos y a la atención de los servicios de la deuda pública, incluso la inutilización e incineración de valores. Asimismo, se someterá a la inspección de los libros, registros y demás documentos relativos a tales operaciones, que el Banco Central deberá llevar independientemente de sus propias cuentas.

Art. 49. — En su carácter de agente financiero del gobierno nacional, el Banco Central deberá informar al Poder Ejecutivo y por intermedio de éste a las Honorables Cámaras Legislativas toda vez que se proyecte la emisión de empréstitos nacionales o la concreción de préstamos especiales que excedan los límites del artículo 36, y la adopción de medidas susceptibles de afectar al mercado de valores. Estos informes serán fundados, y podrán ser dados a publicidad por el directorio del banco cuando a su juicio no revistan carácter confidencial.

## CAPÍTULO X

### Utilidades

Art. 50. — Al cierre de cada ejercicio, y después de deducidas las provisiones y reservas que el directorio juzgue necesarias por deudas incobrables o de cobro dudoso, así como para gastos y otros fines especiales, y efectuada la amortización del activo, se destinará:

30 % de las utilidades líquidas al fondo de reserva general;

10 % a cancelar el bono de garantía (artículo 49, ley 12.160, y artículo 24 del presente decreto ley);

30 % para incremento del capital;

30 % para el gobierno nacional, que le será acreditado en la cuenta a que se refiere el artículo 38.

Una vez cancelado el bono de garantía, el 10 % destinado a amortizarlo se acreditará en la cuenta del gobierno nacional.

## CAPÍTULO XI

### *Cuentas y estados*

Art. 51. — El ejercicio financiero del banco durará un año, cerrándose el 31 de diciembre. Dentro de los veinte días de su cierre el banco preparará, enviará al Poder Ejecutivo y publicará su balance y cuenta de ganancias y pérdidas al día del cierre.

Art. 52. — Inmediatamente después del día 15 y después del último día de cada mes, el banco deberá preparar y publicar un estado de su activo y de su pasivo al cierre de los negocios en los días indicados, que muestre discriminadamente en forma amplia los principales rubros de ese balance.

## CAPÍTULO XII

### *Control de las reservas monetarias*

Art. 53. — El procurador del Tesoro de la Nación, ejercerá ante el banco las funciones de contralor del oro y de las divisas, sin perjuicio de las propias a su cargo.

Art. 54. — A los efectos del artículo anterior, el procurador del Tesoro podrá revisar la contabilidad y documentación del banco y asistir a las reuniones del directorio en que se traten asuntos relacionados con sus funciones, siendo su obligación la de informar en todas aquellas cuestiones en que le sea requerida su opinión, por el Poder Ejecutivo nacional o por el directorio. Podrá recabar, para el mejor cumplimiento de sus funciones, todos los antecedentes e informaciones que considere convenientes y promover y/o intervenir en arquezos, recuentos y controles.

Los balances que publique el Banco Central de la República Argentina serán suscritos por el procurador del Tesoro de la Nación, quien de esa manera certificará la existencia y relación de garantías del oro y las divisas sujetos a su control.

Art. 55. — Por la función que se le asigna en este decreto ley, el procurador del Tesoro de la Nación percibirá la retribución anual especial que determine el presupuesto del Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de la que corresponda a su cargo específico.

## CAPÍTULO XIII

### *Coordinación de organismos nacionales*

Art. 56. — Forman parte del sistema del Banco Central de la República Argentina las siguientes instituciones nacionales: Banco de la Nación Argentina; Banco de Crédito Industrial Argentino; Banco Hipotecario Nacional; Instituto de Créditos, Garantías y Ahorro para los Empleados y Obreros del Estado y Particulares, e Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

Por decisión del Poder Ejecutivo nacional podrán incorporarse al sistema del Banco Central de la República Argentina otras entidades autárquicas nacionales con funciones económicas, existentes o que se creen en el futuro.

A fin de coordinar la acción que en materia económica desarrolla el Estado por intermedio de esos organismos, y asegurar su mayor eficacia, el Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de la autarquía de las instituciones citadas, ejercerá superintendencia sobre ellas.

En adelante las relaciones de esas instituciones con el Poder Ejecutivo nacional serán mantenidas a través del Banco Central de la República Argentina, incluso para la elevación de sus memorias, balances y presupuestos.

Art. 57. — Los planes generales o especiales de fomento que elaboren las instituciones nacionales a que se refiere el artículo anterior o los organismos económicos cuyas funciones tomarán aquéllas a su cargo, así como toda inversión que exceda las comprendidas en esos planes, deberán ser previamente aprobados por el Banco Central de la República Argentina.

Las inversiones de fomento sólo se realizarán para fines susceptibles de producir una rentabilidad cierta y durable que interese a la economía nacional.

## CAPÍTULO XIV

### *Disposiciones varias*

Art. 58. — Las disposiciones del artículo 29 no entrarán en vigor hasta tanto así se establezca por ley especial.

Art. 59. — El presidente del banco absolverá por escrito posiciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente.

Art. 60. — El banco, como entidad del Estado nacional, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio la competencia federal será concurrente con la de la justicia ordinaria de la Capital y de las provincias.

Art. 61. — El Banco Central de la República Argentina establecerá el destino a dar a los bienes, fondos y recursos de las entidades mencionadas en el artículo 16 del decreto ley 8.503/46 a medida que sus funciones sean ejercidas por las instituciones citadas en el artículo 56 del presente. Mientras tanto aquellas entidades conservarán sus actuales órganos directivos y de administración bajo el control del Banco Central de la República Argentina el que, a ese efecto, podrá designar delegados con amplias facultades en ellas.

Art. 62. — Los funcionarios, empleados y obreros del banco, afiliados a la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias, podrán optar, dentro del año de dictado el decreto ley 8.503/46, entre seguir vinculados a dicha caja o acogerse a los beneficios de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Pasado ese término, el personal que no haya optado ingresará directamente a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles.

Art. 63. — Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto ley.

Art. 64. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 65. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

#### IV—(1.141-S)

#### DECRETO 15.561/46

#### Banco Central de la República Argentina. Modificación del directorio

Buenos Aires, 29 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — El presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal, o el organismo que se establezca con arreglo a lo previsto por el artículo 56 del decreto 14.957/46, o quien legalmente lo reemplace, integrará el directorio del Banco Central de la República Argentina, con carácter de director nato, a cuyo efecto modifícanse los artículos 5º y 8º de dicho decreto.

Art. 2º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — F. Pedro Marotta. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — Abelardo Pantin. — Felipe Urdapilleta. — José M. Astigueta. — Juan Pistarini.*

#### V—(99-S)

#### DECRETO 14.959/46

#### Banco de la Nación Argentina

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

#### CAPÍTULO I

##### Régimen. — Domicilio

Artículo 1º — El Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica del Estado nacional, integra el sistema del Banco Central de la República Argentina, a los fines de la coordinación de sus actividades con la política económica, financiera y social del Estado.

Art. 2º — El domicilio legal del banco será el de su casa central en la Capital Federal.

Art. 3º — A los efectos de sus operaciones en la República, mantendrá, creará o suprimirá sucursales, agencias, corresponsalias o cajas regionales.

Las casas del banco representarán a los bancos oficiales y actuarán como gestores o corresponsales de los mismos.

La representación del banco en el extranjero será ejercida por las agencias que estableciere el Banco de Crédito Industrial Argentino, salvo en cuanto a las que el primero tiene instaladas, que asumirán por su parte la representación de los demás bancos oficiales.

Las condiciones de los mandatos de representación entre los bancos oficiales, en el interior y exterior se convendrán por acuerdos, con intervención del Banco Central.

#### CAPÍTULO II

##### Objeto

Art. 4º — El banco tiene por objeto fomentar la producción agraria y el desarrollo y organización del comercio, así como atender los requerimientos ordinarios de esas actividades.

Adecuará su acción, y especialmente la que realice mediante los préstamos y financiaciones de fomento, a las características y necesidades regionales. Sin perjuicio de sus seguridades como acreedor o inversor, y con arreglo a los respectivos planes de promoción, propenderá al mejoramiento de la calidad de los productos; a satisfacer y ampliar equilibradamente la demanda del mercado interno, especialmente la de materias para la industria nacional; a producir excedentes exportables y a diversificar la producción, concurriendo a crear fuentes de trabajo con adecuados niveles de vida y dando preferencia a la pequeña y mediana explotación.

El crédito agrario tenderá, adicionalmente, a mejorar la economía consuntiva de la familia rural, para elevar sus condiciones de existencia.

Art. 5º — Los fines del banco se realizarán mediante:

- a) Créditos a corto, mediano y largo plazo;
- b) Prestamos especiales de fomento;
- c) Financiaciones, y
- d) Los servicios que se establecen en las presentes disposiciones.

#### CAPÍTULO III

##### Gobierno

Art. 6º — El gobierno del banco será ejercido por un presidente y un directorio integrado por aquél, un vicepresidente y ocho vocales, todos los cuales deberán ser argentinos nativos.

Art. 7º — El presidente del Banco deberá ser persona de notoria experiencia y preparación bancaria, comercial o agricolagánadera. Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina. Durará seis años en sus funciones y podrá ser reelegido.

Art. 8º — El vicepresidente deberá tener las mismas condiciones exigidas para el presidente del banco. Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido.

Ejercerá las funciones del presidente del banco en caso de ausencia o impedimento de éste; y, en caso de vacancia del cargo, lo ejercerá hasta tanto sea designado el titular.

Art. 9º — Los ocho vocales del directorio serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, que consultará para ello, conforme a la reglamentación que se dicte, a los sectores de la economía servidos por el Banco de la Nación Argentina.

Durarán cuatro años en sus cargos y serán reelegibles. El directorio, en cuanto a los vocales, se renovará por mitad cada dos años.

Art. 10. — Los miembros del directorio deberán tener solvencia moral y material y no podrán formar parte del directorio o administración de bancos particulares, ni ser miembros de cuerpos legislativos nacionales o provinciales, o de municipalidades. No podrán tampoco desempeñar otras funciones públicas remuneradas, salvo las docentes.

Art. 11. — La remuneración mensual del presidente del banco será de \$ 4.000 m/n. y la del vicepresidente de \$ 3.000 moneda nacional.

Las de los vocales, de \$ 2.000 m/n. El monto total de las remuneraciones correspondientes a los vocales en ejercicio, se repartirá entre ellos en proporción a su asistencia.

Art. 12. — El presidente es el representante del banco y dirige la administración. Le corresponde:

- a) Presidir las reuniones del directorio;
- b) Designar los vocales que compondrán las comisiones;
- c) Nombrar y promover los empleados del banco, dando cuenta al directorio;
- d) Ejercer las funciones del directorio en los casos de urgencia, dando cuenta al cuerpo en la primera sesión que éste celebre.

Art. 13. — Al directorio le corresponde:

- a) Establecer de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina las normas para la gestión económica y financiera del banco;
- b) Decidir sobre las operaciones, dictar las disposiciones internas y resolver los casos no previstos;
- c) Fijar el presupuesto anual de sueldos y gastos, que se remitirá al Banco Central de la República Argentina para su consideración;
- d) Aprobar anualmente el balance general del banco, la cuenta de ganancias y pérdidas, el plan del destino de las utilidades del ejercicio y la memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo y publicado;
- e) Hacer conocer mensualmente al Poder Ejecutivo el estado general de cuentas de las operaciones de fomento;
- f) Nombrar anualmente un vicepresidente 2º de entre los vocales, y
- g) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto al personal.

Art. 14. — El gerente general y el subgerente general del establecimiento, deberán ser argentinos nativos y serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del directorio.

## CAPÍTULO IV

### Capital

Art. 15. — Destinase al banco los siguientes capitales:

- \$  $\frac{m}{n}$ . 50.000.000 para las operaciones de crédito a corto plazo;
- \$  $\frac{m}{n}$ . 80.000.000 para las operaciones de crédito a mediano y largo plazo;
- \$  $\frac{m}{n}$ . 60.000.000 para las operaciones de préstamos especiales y financiaciones de fomento agrícola-ganadero; y
- \$  $\frac{m}{n}$ . 50.000.000 para las operaciones de préstamos especiales y financiaciones de fomento de las actividades comerciales que se fijarán en la reglamentación respectiva.

Art. 16. — El banco mantendrá separados el capital y contabilidad correspondientes a cada uno de los grupos de operaciones previstos en el artículo anterior.

Art. 17. — La Nación resarcirá al banco, al cierre de cada ejercicio, de las pérdidas que arrojen las operaciones de fomento.

Art. 18. — La Nación responde por las operaciones del banco.

## CAPÍTULO V

### Operaciones

Art. 19. — El banco podrá realizar, por sí solo, con participación de los otros bancos oficiales o con la de terceros, las operaciones que se determinan en el presente capítulo, de acuerdo con las reglamentaciones que se dicten y en lo que se refiere a los sectores de la economía enunciados en el artículo 4º.

Art. 20. — Atenderá las necesidades ordinarias de crédito a corto, mediano y largo plazos.

La concesión de préstamos a corto plazo se efectuará con arreglo a las prácticas y garantías usuales en los negocios bancarios.

El régimen de amortización de los préstamos a mediano y largo plazos, se ajustará a las fases de la evolución de cada tipo de negocio. Se otorgarán preferentemente con garantía hipotecaria, pero podrán también aceptarse las seguridades usuales en los negocios bancarios.

Art. 21. — La promoción agrícola, ganadera y comercial, se llevará a cabo, según los planes previos de conjunto trazados por el Banco Central de la República Argentina y dentro de las condiciones y límites que se fijarán reglamentariamente para cada tipo de operación, por medio de:

- a) Préstamos especiales de fomento a largo, mediano y corto plazos. Podrá prescindirse de la exigencia de capital tratándose de peritos agrónomos, y zootécnicos, que inicien pequeñas explotaciones convenientes;
- b) Préstamos especiales de fomento para adquisición de tierra o introducción de mejoras que no sean vivienda o edificio para industria;
- c) La organización y financiamiento de sociedades, entidades o sistemas de producción o comercialización, o coparticipación en sociedades, entidades o sistemas de ese carácter;

- d) La organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país;
- e) La compra de elementos necesarios para las explotaciones y su venta o arrendamiento al productor;
- f) La realización o estímulo de investigaciones tecnológicas, inclusive el otorgamiento de becas y subvenciones.

Los préstamos a que se refieren los incisos a) y b) se otorgarán con las garantías y regímenes de amortización adecuados a sus características y finalidades económicas.

Art. 22. — Además de las operaciones precedentes, el banco podrá:

- a) Recibir depósitos, inclusive los judiciales, con sujeción al régimen del decreto ley 11.554/46 y disposiciones concordantes;
- b) Operar con papeles de comercio, obligaciones y títulos públicos que se coticen en Bolsa;
- c) Operar en cambios;
- d) Recibir valores y documentos en custodia y arrendar cajas de seguridad;
- e) Otorgar fianzas u otras garantías en seguridad de las obligaciones de su clientela;
- f) Otorgar y aceptar mandatos relacionados con sus operaciones;
- g) Realizar toda otra operación del giro de los establecimientos bancarios.

Art. 23. — Las tarifas de intereses, descuentos y comisiones para las operaciones del banco, serán fijadas y ajustadas periódicamente por el directorio, de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina.

Art. 24. — El banco no podrá:

- a) Conceder créditos a la Nación, provincias, ni municipalidades. Exceptúanse de esta prohibición los créditos a las sociedades mixtas y al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, en cuanto concierna a las funciones específicas del banco;
- b) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios para su propio uso; los que comprare, dentro de las limitaciones que se reglamenten, para fines de colonización y los que se adjudicare en defensa de sus créditos. Con excepción del primer caso, las propiedades deberán ser enajenadas tan pronto como sea posible.

## CAPÍTULO VI

### *Funciones de fomento*

Art. 25. — El banco para el cumplimiento de su misión específica se hará cargo, dentro del régimen de su propia autarquía:

- a) De la aplicación de la ley 12.636;
- b) De la explotación de los elevadores y depósito de granos de propiedad de la Nación. El banco emitirá certificados de depósitos por grano entregado, contra los que podrá hacer adelantos en la forma que reglamente;
- c) De las funciones de promoción agrícola, ganadera y comercial previstas en las leyes 12.253, 12.137, 12.355, 11.747, 12.236 y los decretos 38.108/39, 678/45, 59.802/35, 3.190/44 y con-

cordantes, que ejercerá con sujeción a planes en conjunto con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y el Banco de Crédito Industrial Argentino, en cuanto corresponda al carácter de las operaciones de estos establecimientos.

Art. 26. — Las reglas fijadas por las leyes y decretos citados en el artículo anterior, se adaptarán a la estructura del banco, mediante reglamentación especial que dicte el Poder Ejecutivo.

Queda derogado el artículo 77 de la ley 12.636.

Art. 27. — El banco tomará a su cargo, por cuenta del Estado, las tierras fiscales de la Nación que considere aptas para colonización agricolagandera. Las reparticiones oficiales estarán obligadas a transferirselas a su solo requerimiento.

## CAPÍTULO VII

### *Disposiciones generales*

Art. 28. — Los inmuebles del banco, sus operaciones propias y los actos de sus representantes y apoderados están exentos de toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal.

Art. 29. — Estarán exentos del impuesto fiscal de sellos los documentos y contratos referentes a la constitución, otorgamiento, amortización, renovación, inscripción o cancelación de las operaciones de fomento agropecuario celebrados con el banco, cuyo monto no exceda de \$ 20.000 moneda nacional.

Art. 30. — El banco, como entidad del Estado nacional, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia federal será concurrente con la de la justicia ordinaria de la Capital y de las provincias.

Art. 31. — El presidente del banco absolverá por escrito posiciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente.

Art. 32. — Las hipotecas que se constituyan a favor del banco tendrán los mismos privilegios y el mismo régimen de ejecución especial atribuidos por la ley al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 33. — Las actuales deudas del gobierno nacional y entidades autárquicas con el banco, serán canceladas conforme a los convenios que celebren, los que no podrán incluir nuevas ampliaciones de préstamos.

Art. 34. — El banco concertará con los otros bancos oficiales acuerdos para el intercambio de empleados.

Art. 35. — Las relaciones del banco con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Banco Central de la República Argentina, salvo en cuanto a los asuntos de mero trámite, en que se comunicará directamente con las reparticiones públicas que corresponda.

Art. 36. — Las presentes disposiciones se aplicarán con sujeción a las prescripciones de los decretos leyes 14.962/46 sobre bancos, y 8.503/46, 11.554/46 y 14.957/46 sobre Banco Central de la República Argentina.

Art. 37. — El directorio del banco elevará al Poder Ejecutivo, por intermedio del Banco Central de la República Argentina, dentro del término de noventa días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto ley.

Art. 38. — Quedan derogadas las leyes y reglamentos en cuanto se opongan a lo estatuido en las presentes disposiciones.

## CAPÍTULO VIII

*Otras disposiciones*

Art. 39. — Las autoridades del banco continuarán en sus funciones hasta tanto se constituya el nuevo directorio, de conformidad con las presentes disposiciones.

Art. 40. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 41. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pontin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

VI—(102-S)

DECRETO 14.960/46

**Banco de Crédito Industrial Argentino**

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

## CAPÍTULO I

*Régimen. — Domicilio*

Artículo 1º — El Banco de Crédito Industrial Argentino, entidad autárquica del Estado Nacional, integra el sistema del Banco Central de la República Argentina, a los fines de la coordinación de sus actividades con la política económica, financiera y social del Estado.

Art. 2º — El domicilio legal del banco será el de su casa central en la Capital Federal.

Art. 3º — A los efectos de sus operaciones en el extranjero, mantendrá, creará o suprimirá agencias y corresponsalias, las que, asimismo representarán a los otros bancos oficiales, actuando como gestores o corresponsales de los mismos, salvo en cuanto a los países en que el Banco de la Nación Argentina tiene instaladas agencias, en cuyo caso la representación estará a cargo de dicho banco.

Igualmente, para sus operaciones en el interior de la República y zonas de la Capital la representación del establecimiento será ejercida por las sucursales y agencias del Banco de la Nación Argentina.

Las condiciones de los mandatos de representación entre los bancos oficiales, en el interior y exterior, se convendrán por acuerdos especiales con la intervención del Banco Central de la República Argentina.

## CAPÍTULO II

*Objeto*

Art. 4º — El banco tiene por objeto fomentar la industria nacional, inclusive la minería, así como atender las necesidades ordinarias de esas actividades y sus agentes.

Sin perjuicio de sus seguridades como acreedor e inversor, propenderá con su acción y especialmente con préstamos y financiaciones de fomento, al desarrollo, la evolución e implantación de toda clase de

industrias, principalmente las que tiendan a satisfacer las necesidades imprescindibles del mercado, y las que extraigan, utilicen, transformen o manufacturen productos del país, dando preferencia entre ellas a la pequeña y mediana industria, y a las que contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las economías regionales.

El banco procurará favorecer el perfeccionamiento de la calidad de los productos y el acrecentamiento del volumen de la producción, la elaboración de nuevos productos o subproductos, la ampliación de los ramos de que se ocupan los industriales en actividad y la instalación de establecimientos industriales nuevos.

Art. 5º — Los fines del banco se realizarán mediante:

- a) Créditos a corto, mediano y largo plazos;
- b) Préstamos especiales de fomento;
- c) Financiaciones, y
- d) Los servicios que se establecen en las presentes disposiciones.

## CAPÍTULO III

*Gobierno*

Art. 6º — El gobierno del banco será ejercido por un presidente y un directorio integrado por aquél, un vicepresidente y ocho vocales, todos los cuales deberán ser argentinos nativos.

Art. 7º — El presidente del banco deberá ser persona de notoria experiencia y preparación bancaria, o industrial. Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina. Durará seis años en sus funciones y podrá ser reelegido.

Art. 8º — El vicepresidente deberá tener las mismas condiciones exigidas para el presidente del banco. Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, durará cuatro años en su cargo y podrá ser reelegido.

Ejercerá las funciones del presidente del banco, en caso de ausencia o impedimento de éste; y, en caso de vacancia del cargo, lo ejercerá hasta tanto sea designado el titular.

Art. 9º — De los 8 vocales del directorio 5 serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, que consultará para ello, conforme a la reglamentación que se dicte, a los sectores de la economía servidos por el Banco de Crédito Industrial Argentino. Los tres restantes serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta directa de los ministerios de Guerra y Marina y de la Secretaría de Aeronáutica.

Durarán cuatro años en sus cargos y serán reelegibles.

El directorio, en cuanto a los vocales, se renovará por mitad cada dos años.

Art. 10. — Los miembros del directorio deberán tener solvencia moral y material, y no podrán formar parte del directorio o administración de bancos particulares, ni ser miembros de cuerpos legislativos nacionales o provinciales, o de municipalidades. No podrán tampoco desempeñar otros cargos públicos remunerados, salvo los docentes y los que corresponden a los directores propuestos por los ministerios y secretaría a que se refiere el artículo anterior; estos tres últimos deberán optar entre las remuneraciones de ambos cargos.

Art. 11. — La remuneración mensual del presidente del banco será de \$ % 4.000 y la del vicepresidente de \$ 3.000 moneda nacional.

Las de los vocales, de \$ % 2.000. El monto total de las remuneraciones correspondientes a los vocales en ejercicio, se repartirá entre ellos en proporción a su asistencia.

Art. 12. — El presidente es el representante del banco y dirige la administración. Le corresponde:

- a) Presidir las reuniones del directorio;
- b) Designar los vocales que compondrán las comisiones;
- c) Nombrar y promover los empleados del banco dando cuenta al directorio;
- d) Ejercer las funciones del directorio en los casos de urgencia, dando cuenta al cuerpo en la primera sesión que éste celebre.

Art. 13. — Al directorio le corresponde:

- a) Establecer, de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, las normas para la gestión económica y financiera del banco;
- b) Decidir sobre las operaciones, dictar las disposiciones internas y resolver los casos no previstos;
- c) Fijar el presupuesto anual de sueldos y gastos, que se remitirá al Banco Central de la República Argentina para su consideración;
- d) Aprobar anualmente el balance general del banco, la cuenta de Ganancias y Pérdidas, el plan del destino de las utilidades del ejercicio y la Memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo y publicado;
- e) Hacer conocer mensualmente al Poder Ejecutivo el estado general de cuentas de las operaciones de fomento;
- f) Nombrar anualmente un vicepresidente 2º de entre los vocales;
- g) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto del personal.

Art. 14. — El gerente general y el subgerente general del establecimiento deberán ser argentinos nativos y serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del directorio.

#### CAPÍTULO IV

##### Capital

Art. 15. — Destínense al banco los siguientes capitales:

- \$ % 50.000.000 para las operaciones de crédito a largo y mediano plazos;
- \$ % 25.000.000 para las operaciones de crédito a corto plazo;
- \$ % 50.000.000 para las operaciones de préstamos especiales y financiaciones de fomento industrial;
- \$ % 30.000.000 para las operaciones de préstamos especiales y financiaciones de fomento minero.

Art. 16. — El banco mantendrá separados el capital y contabilidad correspondientes a cada uno de los grupos de operaciones previstos en el artículo anterior.

Art. 17. — La Nación resarcirá al banco, al cierre de cada ejercicio, de las pérdidas que arrojen las operaciones de fomento.

Art. 18. — La Nación responde por las operaciones del banco.

#### CAPÍTULO V

##### Operaciones

Art. 19. — El banco podrá realizar, por sí solo, con participación de los otros bancos oficiales o con la de terceros, las operaciones que se determinan en el presente capítulo, de acuerdo con las reglamentaciones que se dicten y en lo que se refiere a los sectores de la economía enunciados en el artículo 4º.

Art. 20. — Atenderá las necesidades ordinarias de crédito a corto, mediano y largo plazos.

La concesión de préstamos a corto plazo se efectuará con arreglo a las prácticas y garantías usuales en los negocios bancarios.

El régimen de amortización de los préstamos a mediano y largo plazos, se ajustará a los fases de la evolución de cada tipo de negocio. Se otorgarán preferentemente con garantía hipotecaria, pero podrán también aceptarse las seguridades usuales en los negocios bancarios.

Art. 21. — La promoción industrial y/o minera se llevará a cabo según los planes previos de conjunto trazados por el Banco Central de la República Argentina y dentro de las condiciones y límites que se fijarán reglamentariamente, para cada tipo de operación, por medio de:

- a) Préstamos especiales de fomento a largo, mediano y corto plazos. Podrá prescindirse de la exigencia de capital, tratándose de universitarios y técnicos industriales y/o mineros que inicien pequeñas industrias convenientes.

Los préstamos se otorgarán con las garantías y regímenes de amortización adecuados a sus características y finalidades económicas;

- b) La organización y financiamiento de sociedades, entidades o sistemas de comercialización o su coparticipación en sociedades, entidades o sistemas de ese carácter;
- c) La organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país;
- d) La compra de elementos necesarios para la industria y su venta o arrendamiento al industrial o minero;
- e) La realización o estímulo de investigaciones tecnológicas, inclusive el otorgamiento de becas y subvenciones.

Art. 22. — Además de las operaciones precedentes, el banco podrá:

- a) Recibir depósitos con sujeción al régimen del decreto ley 11.554/46 y disposiciones concordantes;
- b) Operar con papeles de comercio, obligaciones y títulos públicos que se coticen en Bolsa;
- c) Operar en cambios;
- d) Recibir valores y documentos en custodia y arrendar cajas de seguridad;

- e) Otorgar fianzas u otras garantías en seguridad de las obligaciones de su clientela;
- f) Otorgar y aceptar mandatos relacionados con sus operaciones, y
- g) Realizar toda otra operación del giro de los establecimientos bancarios.

Art. 23. — Las tarifas de intereses, descuentos y comisiones para las operaciones del banco serán fijadas y ajustadas periódicamente por el directorio de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina.

Art. 24. — El banco no podrá:

- a) Conceder créditos a la Nación, provincias ni municipalidades. Exceptuarse de esta prohibición los créditos a las sociedades mixtas y al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, en cuanto concierna a las funciones específicas del banco;
- b) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios para su propio uso y los que se adjudicare en defensa de sus créditos.

Las propiedades de este origen deberán ser enajenadas tan pronto como sea posible.

## CAPÍTULO VI

### *Funciones de fomento*

Art. 25. — El banco, para el cumplimiento de su misión específica, se hará cargo, dentro del régimen de su propia autarquía, de las funciones de promoción industrial previstas en las leyes 12.253, 12.137, 12.355, 11.747, 12.236 y los decretos 38.108/39, 678/45, 59.802/35, 3.190/44 y concordantes, que ejercerá con sujeción a planes en conjunto con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y el Banco de la Nación Argentina, en cuanto corresponda al carácter de las operaciones de estos establecimientos.

Art. 26. — Las reglas fijadas por las leyes y decretos citados en el artículo anterior se adaptarán a la estructura del banco, mediante reglamentación especial que dicte el Poder Ejecutivo.

## CAPÍTULO VII

### *Disposiciones generales*

Art. 27. — Los inmuebles del banco, sus operaciones propias y los actos de sus representantes y apoderados están exentos de toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal.

Art. 28. — Estarán exentos del impuesto fiscal de sellos los documentos y contratos referentes a la constitución, otorgamiento, amortización, renovación, inscripción o cancelación de las operaciones celebradas con el banco, cuyo monto no exceda de \$ 20.000 moneda nacional.

Art. 29. — El banco, como entidad del Estado nacional, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia federal será concurrente con la de la justicia ordinaria de la Capital y de las provincias.

Art. 30. — El presidente del banco absolverá por escrito posiciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente.

Art. 31. — Las hipotecas que se constituyan a favor del banco tendrán los mismos privilegios y el mismo régimen de ejecución especial atribuidos por la ley al Banco Hipotecario Nacional.

Art. 32. — El banco concertará con los otros bancos oficiales acuerdos para el intercambio de empleados.

Art. 33. — Las relaciones del banco con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Banco Central de la República Argentina, salvo en cuanto a los asuntos de mero trámite, en que se comunicará directamente con las reparticiones públicas que correspondan.

Art. 34. — Las presentes disposiciones se aplicarán con sujeción a las prescripciones de los decretos leyes 14.962/46, sobre bancos y 8.503, 11.554 y 14.957/46, sobre el Banco Central de la República Argentina.

Art. 35. — El directorio del banco elevará al Poder Ejecutivo, por intermedio del Banco Central de la República Argentina, dentro del término de 90 días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto ley.

Art. 36. — Quedan derogadas las leyes y reglamentos en cuanto se opongan a lo estatuido en las presentes disposiciones.

## CAPÍTULO VIII

### *Otras disposiciones*

Art. 37. — Las actuales autoridades del banco continuarán en sus funciones hasta tanto se constituya el nuevo directorio, de conformidad con las presentes disposiciones.

Art. 38. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 39. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

VII—(100-S)

DECRETO 14.961/46

### **Banco Hipotecario Nacional**

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

### CAPÍTULO I

#### *Régimen y domicilio*

Artículo 1º — El Banco Hipotecario Nacional es una entidad autárquica del Estado nacional, que integra el sistema del Banco Central de la República Argentina a los fines de la coordinación de sus actividades con la política económica, financiera y social del Estado.

Art. 2º — El domicilio legal del banco será el de su casa central en la Capital Federal.

Art. 3º — Para las operaciones del banco en el interior de la República, la representación del establecimiento será ejercida por las sucursales y agencias del Banco de la Nación Argentina.

Las condiciones de los mandatos de representación entre los bancos oficiales se convendrán por acuerdos con intervención del Banco Central de la República Argentina.

## CAPÍTULO II

### Objeto

Art. 4º — El Banco Hipotecario Nacional tendrá por objeto el otorgamiento del crédito real con garantía hipotecaria. Será la única institución oficial del Estado nacional habilitada para realizar específicamente estas funciones. Los bancos de la Nación Argentina y de Crédito Industrial Argentino, las efectuarán únicamente en casos relacionados con sus objetivos propios y dentro de las limitaciones establecidas en sus respectivas cartas orgánicas.

El banco llenará sus finalidades mediante:

- a) Créditos hipotecarios a corto, mediano y largo plazo;
- b) Préstamos hipotecarios especiales de fomento;
- c) Financiaciones dentro de sus objetivos específicos;
- d) Los servicios complementarios que se establecen en esta carta orgánica.

## CAPÍTULO III

### Gobierno

Art. 5º — El gobierno del banco será ejercido por un presidente y un directorio integrado por aquél, por un vicepresidente y ocho vocales, todos ellos argentinos nativos.

Art. 6º — El presidente del banco deberá ser persona de notoria experiencia y preparación en materia inmobiliaria, bancaria, comercial o agricolagandera. Será designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Banco Central de la República Argentina. Durará seis años en sus funciones y podrá ser reelegido.

Art. 7º — El vicepresidente deberá tener las mismas condiciones exigidas para el presidente del banco. Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelegido.

Ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste y, en caso de vacancia del cargo, lo ejercerá hasta tanto sea designado el titular.

Art. 8º — Los ocho vocales del directorio serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República Argentina, el que consultará para ello, conforme a la reglamentación que se dicte, a los sectores de la economía servidos por el banco.

Durarán cuatro años en sus cargos y serán reelegibles.

El directorio, en cuanto a los vocales se renovará por mitades cada dos años.

Art. 9º — Los miembros del directorio deberán tener solvencia moral y material, y no podrán formar parte del directorio o administración de bancos particulares; ni ser miembros de cuerpos legislativos nacionales o provinciales, ni de municipalidades.

No podrán tampoco desempeñar otras funciones públicas remuneradas, salvo las docentes.

Art. 10. — La remuneración mensual del presidente del banco será de cuatro mil pesos y la del vicepresidente de tres mil pesos.

La de los vocales de dos mil pesos; el monto total de las remuneraciones correspondientes a los vocales en ejercicio, se repartirá entre ellos en proporción a su asistencia.

Art. 11. — El presidente es el representante del banco y dirige la administración.

Le corresponde:

- a) Presidir las reuniones del directorio;
- b) Designar los vocales que compondrán las comisiones;
- c) Nombrar y promover a los empleados del banco, dando cuenta al directorio;
- d) Ejercer las funciones del directorio en los casos de urgencia, dando cuenta al cuerpo en la primera sesión que éste celebre.

Art. 12. — Al directorio le corresponde:

- a) Establecer, de acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, las normas para la gestión económica y financiera del banco;
- b) Decidir sobre las operaciones, dictar las disposiciones internas y resolver los casos no previstos;
- c) Fijar el presupuesto anual de sueldos y gastos, que se remitirá al Banco Central de la República Argentina para su consideración;
- d) Aprobar anualmente el balance general del banco, la cuenta de ganancias y pérdidas, el plan del destino de las utilidades del ejercicio y la memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo y publicado;
- e) Hacer conocer mensualmente al Poder Ejecutivo el estado general de las cuentas de las operaciones de fomento;
- f) La publicación mensual del balance del banco por intermedio del presidente;
- g) El nombramiento anual de un vicepresidente segundo de entre los vocales;
- h) Decidir las quitas y transacciones con los deudores por saldo personal, pudiendo recibir toda clase de bienes;
- i) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto al personal.

Art. 13 — El gerente general y el subgerente general del establecimiento deberán ser argentinos nativos y serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del directorio.

## CAPÍTULO IV

### Capital

Art. 14. — El capital del banco se formará con los fondos de sus reservas actuales.

El Banco Central de la República Argentina suministrará al Banco Hipotecario Nacional, con garantía de las hipotecas que éste efectúe, el dinero efectivo necesario para el cumplimiento de sus fines.

Art. 15. — La Nación responde por las operaciones del banco.

Art. 16. — La Nación resarcirá al banco al cierre de cada ejercicio, de las pérdidas que arrojen las operaciones de fomento.

## CAPÍTULO V

*Operaciones*

Art. 17. — El banco podrá realizar, por sí solo, con participación de los otros bancos oficiales, o con terceros, todas las operaciones necesarias para el cumplimiento de sus fines, y especialmente acordar préstamos hipotecarios en primer grado sobre propiedades ubicadas dentro del territorio de la Nación, con el interés, plazos, amortizaciones, límites máximos de acuerdos, porcentajes sobre la tasación, comisión y demás modalidades de aplicación de este decreto ley.

Art. 18. — En los préstamos especiales para empleados públicos o beneficiarios de leyes especiales, el Poder Ejecutivo, los empleadores o las cajas de jubilaciones según corresponda, descontarán mensualmente de los haberes del empleado, a simple requerimiento del banco, las cuotas necesarias para el pago de los servicios del préstamo, seguros, impuestos, pavimentos y tasas y las transferirán íntegramente al banco hasta la cancelación de la deuda por todo concepto, sin suspenderlas ni disminuirlas por embargos, concursos, quiebras ni ninguna otra causa. En caso de incumplimiento se procederá según las reglas comunes de ejecución de los préstamos. Mientras el préstamo no quede reducido a la categoría de ordinario, los inmuebles gravados serán inembargables y no podrán constituirse sobre ellos otros derechos reales. Los registros de la propiedad tomarán nota de ello al margen de la inscripción de dominio.

Art. 19. — Además de las operaciones precedentes, el banco podrá:

- a) Recibir en custodia títulos nacionales y depósitos en dinero efectivo para su inversión en dichos títulos, conforme a las reglamentaciones que se dicten;
- b) Financiar la construcción y compraventa de propiedades conforme a las reglamentaciones que se fijen;
- c) Asegurar por sí mismo o con terceros, contra incendio las propiedades hipotecadas y la vida de sus deudores por la suma y conforme a las reglamentaciones que dicte de acuerdo al artículo 12, inciso a);
- d) Participar dentro de sus fines específicos en la organización y financiamiento de inmigraciones calificadas para su radicación en el país;
- e) Adquirir inmuebles para uso propio y en defensa de sus créditos, según se reglamente.

## CAPÍTULO VI

*Préstamos*

Art. 20. — Los títulos de dominio de las propiedades que se acepten en garantía deben ser libres de todo vicio o defecto legal.

El banco podrá, si lo juzgare necesario, exigir que se compruebe la posesión continuada durante treinta años.

Art. 21. — El banco podrá exigir en cualquier momento la cancelación del préstamo en el cual se hubiese cometido irregularidad para obtenerlo, provenga ésta del mismo solicitante o de un tercero. Si no se obtuviere la inmediata cancelación del préstamo, podrá ordenar por sí, sin forma alguna de juicio, la

venta en remate público de la propiedad afectada, con las mismas formalidades establecidas para la venta de las propiedades en mora, remitiendo los antecedentes a la justicia federal, todo sin perjuicio de las acciones civiles o criminales que pueda promover con motivo del acto delictuoso, si lo creyera conveniente.

Art. 22. — No podrán hacerse préstamos sobre los siguientes inmuebles:

- a) Las minas y canteras;
- b) Los indivisos, salvo el caso en que la hipoteca sea establecida por la totalidad del inmueble o inmuebles, con consentimiento de todos los condóminos, manifestado por una declaración en escritura pública;
- c) Sobre bienes que no sean susceptibles de producir una renta cierta y durable;
- d) Sobre terrenos baldíos, cualquiera que sea su situación y valor, salvo en lo que se refiere a edificación.

Se reputan baldíos, no sólo los sitios sin construcciones, sino también aquellos que las tengan en un valor ínfimo en proporción al préstamo solicitado.

Art. 23. — Todo nuevo pedido de préstamo sobre propiedades afectadas a gravámenes anteriores seguirá la tramitación ordinaria, y sólo se acordará cuando por la nueva tasación que debe practicarse se encuentre en las condiciones de la presente ley.

Estos acuerdos serán considerados como ampliación del gravamen anterior y los préstamos serán registrados en el mismo grado que la hipoteca primitiva.

A este efecto, los registros de hipotecas inscribirán en primer grado el monto total de los préstamos del banco, siempre que no exista gravamen anterior que lo impida.

## CAPÍTULO VII

*Seguros*

Art. 24. — En los préstamos que efectúe el banco podrá exigir se asegure el bien hipotecado por el importe acordado, pudiendo a solicitud del deudor ampliarse el seguro hasta el valor de la tasación de las construcciones.

## CAPÍTULO VIII

*Privilegios y ejecución especial*

Art. 25. — Los que obtuvieren préstamos en virtud de la presente ley, responderán al pago solamente con los bienes hipotecados.

Art. 26. — El banco podrá proceder por sí, sin forma alguna de juicio, al embargo de la renta de la propiedad hipotecada, o de su producción, para aplicarla al pago de servicios y conservación de la propiedad, si el deudor dejase pasar noventa días desde la fecha en que debió pagar el servicio respectivo.

Esta facultad no impedirá que el banco, si lo estima conveniente, proceda a la venta de la propiedad hipotecada de conformidad con el artículo 27.

Si la propiedad no produjera arrendamiento, el banco lo fijará, procediendo en seguida en la forma anteriormente indicada.

Art. 27. — Si transcurrieran los noventa días que establece el artículo anterior sin que el deudor hubiese abonado los servicios u obtenido espera, el banco procederá a la venta de la propiedad por sí y sin forma alguna de juicio, ordenando el remate público al mejor postor y con base del total de la deuda. La liquidación se hará con los intereses punitivos correspondientes a contar del vencimiento del primer servicio adeudado hasta la liquidación definitiva del préstamo.

Los avisos del remate se publicarán durante quince días en la forma que determine el directorio al reglamentar esta ley.

Art. 28. — Si la venta no se realizare, los remates subsiguientes se efectuarán en la oportunidad y con las bases que fije el directorio.

Dentro del año del fracaso del primer remate deberá verificarse el segundo, salvo que razones económicas circunstanciales aconsejen al directorio diferir la venta.

Art. 29. — Los jueces, a pedido del banco decretarán la adjudicación de la propiedad hipotecada, sin más recaudo que la constancia de haber fracasado dos remates, otorgando la escritura correspondiente a favor del banco, por el importe de la suma que sirvió de base para el último remate, quedando así el banco en condiciones de liquidar la cuenta para el cobro del saldo personal.

Al solo efecto del otorgamiento de la escritura y a petición del banco formulada bajo la responsabilidad que prescribe el artículo 51, se cumplirán por orden judicial directa las medidas aludidas por el mismo.

Art. 30. — Dentro del período de un año a partir de la fecha de la escritura de adjudicación, si el banco no hubiera dispuesto de la propiedad, podrá restituirla al deudor, o venderla particularmente a un tercero, con la hipoteca vigente, siempre que en uno u otro caso, se abonare lo adeudado a la fecha de la adjudicación, más los servicios vencidos con posterioridad y toda otra suma pagada por el banco.

Art. 31. — El banco podrá ordenar la venta de los inmuebles hipotecados en los casos previstos por la presente ley, aunque el inmueble se encuentre embargado o ejecutado por otros créditos y aunque el deudor haya fallecido o por cualquier causa esté inhibido o incapacitado para disponer de sus bienes o éstos estén sometidos a un proceso judicial o extrajudicial de liquidación, adjudicación o división.

En cualquiera de los supuestos precedentes, si se ordenare la venta de la propiedad, el banco gozará de preferente derecho para realizarla, aunque la deuda haya sido servida con regularidad, a cuyo efecto la sentencia de remate en las ejecuciones o la orden de venta en los demás casos se notificará al presidente de la institución para que éste ordene la venta dentro del término de sesenta días hábiles y, oportunamente entregue el sobrante que arroje la liquidación.

Art. 32. — Toda venta está sujeta a la aprobación o desaprobación del directorio del banco. Una vez aprobada, deberá abonarse el saldo de precio dentro de los diez días, hecho lo cual se dará posesión de la propiedad.

Desde la aprobación del remate, el comprador es responsable del pago de los servicios de la hipoteca así como de los impuestos y demás cargas de la propiedad. No abonando el comprador el saldo de precio en el plazo fijado, el directorio podrá decretar que la venta quede sin efecto con pérdida de la señal y comisión.

Art. 33. — Efectuada la venta y escriturada la propiedad por el banco a favor del comprador, se formará la liquidación de la deuda, gastos e intereses, aplicando a su pago el producto de aquélla.

Art. 34. — En caso de que el directorio ordenara el remate de una propiedad, queda facultado para realízarlo en los locales del banco, cualquiera que sea la ubicación del bien hipotecado, o sobre este mismo.

Sólo por motivos especiales de conveniencia podrá realizarse la subasta en otros sitios. En éste como en todos los casos, intervendrá en aquel acto por medio de sus dependencias, o de las del Banco de la Nación Argentina en los lugares donde no las tuviera.

Los remates ordenados por el banco serán efectuados por martillero público de la matrícula, o por un empleado del banco que el presidente designe donde no hubiere martillero aceptado por el directorio.

En el primer caso el martillero percibirá como comisión el 1 % del precio que se obtenga; en el segundo caso, el empleado no cobrará comisión alguna y el banco sólo cobrará los gastos efectuados. Si el remate no se realizare, el martillero no podrá cobrar comisión alguna.

Art. 35. — En caso de venta, el banco no responde por la evicción y saneamiento.

Tampoco responde por la demora en la escrituración. El comprador está obligado a escriturar en la fecha ya señalada por el banco, pudiendo éste si no se verifica la escritura en el término fijado, exigir judicialmente su cumplimiento o declararlo rescindido, dejando sin efecto la venta, bajo la responsabilidad del comprador por la disminución de precio que resulte en el nuevo remate que se realice y por los servicios, impuestos y gastos acrecidos.

El banco se cobrará esa suma de las entregadas con motivo de la venta y, si éstas no alcanzaren, podrá compeler al pago de lo que se le adeude según liquidación que practique, por vía ejecutiva, siendo bastante para que ésta quede expedita, dicha liquidación con copias autenticadas del acta de remate y de la resolución dejándolo sin efecto por incumplimiento del comprador.

Art. 36. — El deudor no podrá introducir modificación en la propiedad hipotecada sin el previo consentimiento del banco, ni realizar acto alguno que perjudique sus derechos o intereses.

Está obligado también a poner en su conocimiento todo perjuicio o hecho que se produzca en la propiedad que tienda a disminuir sus derechos o a perjudicar sus intereses, debiendo darle aviso dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tuvieron lugar los hechos referidos, y colocar la propiedad en las condiciones en que se encontraba antes de producirse el hecho que determinó el perjuicio. Si no lo hiciere, el banco quedará exento de toda responsabilidad para el caso de venta o arrendamiento, pudiendo exigir la inmediata cancelación del préstamo, o liquidarlo en la forma ordinaria de los préstamos en mora, en las condiciones en que se encuentre la propiedad, sin perjuicio de las acciones civiles o criminales que correspondan.

En cualquier momento el banco podrá intervenir como tercerista en todo juicio relativo a la propiedad o posesión del bien hipotecado.

Art. 37. — Mientras dure la mora en el pago de los servicios o de cualquier suma que se adeude al banco, éste tiene derecho a percibir los intereses punitivos correspondientes hasta serle abonada íntegramente la deuda.

Las moras en el cumplimiento de las obligaciones de que se habla en esta ley, se producen por el mero vencimiento de los plazos que en ella se establecen.

Art. 38. — Estando en situación de venta una propiedad hipotecada, el banco queda facultado:

- 1º Para practicar por cuenta del deudor todas las reparaciones que se consideren necesarias en el bien hipotecado, pago de impuestos y cualquier otra medida conducente a la conservación de la propiedad;
- 2º Para administrar la propiedad y percibir y vender sus frutos, con facultades amplias, pudiendo fijar el precio de los arrendamientos, salvo el caso de contrato de locación aceptado expresamente por el banco;
- 3º Para proceder a la venta del bien hipotecado, en conjunto o dividido en lotes, según lo estime más conveniente, pudiendo ceder gratuitamente o por el precio que se convenga, la tierra necesaria para calles, avenidas, caminos, canales y vías férreas. Todos estos actos se harán sujetos a la condición de que la venta se efectúe;
- 4º Para representar al deudor en cualquier juicio que pueda promoverse contra la propiedad; para iniciarlo contra terceros detentadores, y para intervenir directamente en las tercerías de dominio del artículo 36, celebrando transacciones y firmando los documentos respectivos;
- 5º Para tomar posesión de la propiedad hipotecada y una vez realizado el remate y aprobado que sea por el directorio del banco, éste podrá desalojar inmediatamente a los ocupantes, cualquiera que fuere la causa de la ocupación y con la única excepción del caso en que hubiese contrato de locación aceptado expresamente por el banco.

Art. 39. — Una vez vendidas las propiedades hipotecadas, el banco queda facultado:

- a) Para otorgar la respectiva escritura de venta a favor del comprador, quedando éste por ese solo hecho subrogado en todos los derechos y obligaciones del deudor sobre dicho bien, aun en el caso de concurso, y para dar la posesión sin la presencia del deudor ejecutado.

Art. 40. — El banco podrá por sí solo requerir el auxilio de la fuerza pública para tomar posesión del bien hipotecado, colocar banderas o carteles de remate, para hacer que los interesados o los rematadores lo examinen y para dar, en caso de venta, la posesión a los compradores, no obstante la oposición de los dueños o de los ocupantes.

Art. 41. — Estando en situación de venta una propiedad hipotecada, los jueces por ningún motivo podrán suspender o trabar el procedimiento del banco para el ejercicio de sus facultades o para la venta en remate del inmueble, a menos que se trate de tercería de dominio, la que deberá deducirse por vía ordinaria y en juicio que comprenda el derecho al dominio y la consiguiente posesión.

Los jueces substanciarán la tercería por las reglas procesales pertinentes y a pedido del banco decretarán sin más trámite la inhibición del deudor y embargo sobre sus otros bienes.

Art. 42. — Los efectos de registro de hipoteca durarán hasta la completa extinción de la obligación hipotecaria, no obstante lo dispuesto a este respecto en el Código Civil.

## CAPÍTULO IX

### Funciones de fomento

Art. 43. — El banco, para el cumplimiento de su misión específica, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º y dentro del régimen de su propia autarquía, se hará cargo de las funciones de fomento de la vivienda que le competan, entre las encomendadas a la Administración Nacional de la Vivienda por el decreto 11.157/45 y concordantes.

Art. 44. — El banco se hará cargo igualmente de las funciones de crédito hipotecario que cumplen actualmente las otras instituciones oficiales del Estado, sean de previsión social o de otra naturaleza, conforme a las disposiciones que al respecto dicte el Banco Central de la República Argentina.

Art. 45. — Las reglas fijadas por las leyes y decretos vigentes para las entidades a que se refieren los dos artículos precedentes, se adaptarán a la estructura del banco, mediante reglamentación especial que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 46. — Se consideran operaciones de fomento de la vivienda propia, además de las determinadas en los artículos anteriores de este capítulo, las que efectúe el banco con este destino mediante acuerdos superiores al 80 % de la tasación, según lo establezcan las reglamentaciones respectivas.

## CAPÍTULO X

### Disposiciones generales

Art. 47. — Los inmuebles del banco, sus operaciones propias y los actos de sus representantes y apoderados están exentos de toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal.

Art. 48. — Estarán exentos del impuesto fiscal de sellos los documentos y contratos referentes a la constitución, otorgamiento, amortización, renovación, inscripción o cancelación de las operaciones de fomento de la vivienda celebrada con el banco, cuyo monto no exceda de veinte mil pesos.

Art. 49. — El banco, como entidad del Estado nacional, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia federal será concurrente con la de la justicia ordinaria de la Capital y de las provincias.

Art. 50. — El presidente del banco absolverá por escrito posiciones en juicio, no estando obligado a comparecer personalmente.

Art. 51. — Los registros de hipotecas, embargos e inhibiciones, levantarán sin más trámites, a pedido del banco, y bajo su responsabilidad, toda inhibición, embargo, segunda hipoteca, cualquier otro gravamen o anotación que pese sobre el inmueble vendido, al solo efecto de la escrituración, quedando dicho inmueble sin otro gravamen que el que reconozca a favor del banco, el que pondrá el sobrante, si lo hubiere, a disposición de los jueces respectivos.

Art. 52. — El banco no podrá conceder préstamos a la Nación, provincias ni municipalidades. Exceptúase de esta prohibición a los préstamos a las so-

ciudades mixtas y al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, en cuanto concierna a las funciones específicas del banco.

Art. 53. — El banco concertará con los otros bancos oficiales acuerdos para el intercambio de empleados.

Art. 54. — Las relaciones del banco con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Banco Central de la República Argentina, salvo en cuanto a los asuntos de mero trámite, en que se comunicará directamente con las reparticiones públicas que correspondan.

Art. 55. — Las presentes disposiciones se aplicarán con sujeción a las prescripciones de los decretos leyes 14.962/46 sobre bancos y Nº 8.503, 11.554 y 14.957/46 sobre el Banco Central de la República Argentina.

Art. 56. — Quedan derogadas las leyes y reglamentos en cuanto se opongan a lo estatuido en las presentes disposiciones.

#### *Disposiciones transitorias*

Art. 57. — Durante el periodo de transición que medie hasta la aplicación integral de las disposiciones de esta Carta Orgánica, seguirán en pleno vigor todas las disposiciones de las leyes 8.172 y 10.676 vinculadas a los préstamos ya constituidos o que se constituyan durante ese período y al régimen de las cédulas hipotecarias argentinas.

Art. 58. — Transitoriamente seguirán funcionando las sucursales del banco en el interior de la República, mientras no se organice el sistema previsto en el artículo 3º de esta ley.

Art. 59. — Las autoridades del banco continuarán en sus funciones hasta tanto se constituya el nuevo directorio, de conformidad con las presentes disposiciones.

Art. 60. — El directorio del banco elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Banco Central de la República Argentina, dentro del término de noventa días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto ley.

Art. 61. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 62. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

VIII—(104-S)

DECRETO 14.962/46

#### **Bancos particulares**

Buenos Aires, 24 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

#### **CAPÍTULO I**

#### *Personas comprendidas en el régimen bancario*

Artículo 1º — La recepción de depósitos en los términos del decreto ley 11.554/46 que sólo podrá hacerse

por cuenta del Banco Central de la República Argentina en todo el territorio del país, queda reservada a las personas, de existencia visible o jurídica, que en la actualidad se hallan autorizadas según la ley 12.156 para funcionar como bancos y a las que lo sean en el futuro por el Banco Central, el cual, por este hecho, les confiere mandato legal en los términos del decreto ley citado.

La apertura de nuevas sucursales, agencias o corresponsalías por parte de las entidades a que se refiere el párrafo anterior, así como el cierre de las existentes, sólo podrá tener lugar previa conformidad del Banco Central de la República Argentina.

Art. 2º — Las entidades bancarias nacionales, provinciales y municipales —oficiales o mixtas— se consideran por su naturaleza mandatarias en los términos del artículo anterior. Los bancos provinciales o municipales, oficiales o mixtos no requieren conformidad del Banco Central de la República Argentina para la instalación y funcionamiento de sus casas dentro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones políticas.

En lo demás, las entidades a las que se refiere el párrafo anterior, deberán ajustarse a las disposiciones del presente decreto ley.

Art. 3º — El Banco Central de la República Argentina podrá exigir en cualquier momento a los bancos extranjeros que tengan instaladas o deseen abrir casas en el país, como condición del mantenimiento o concesión de la autorización para funcionar como tales, la efectiva y permanente radicación de los capitales asignados a las casas locales, cuyo monto mínimo podrá fijar en cada caso el Banco Central de la República Argentina.

En el caso de bancos oficiales extranjeros existentes, o que desearan instalarse en el futuro, el Banco Central de la República Argentina podrá supeditar el mantenimiento o concesión de la autorización para operar a la concertación de convenios con el país de origen.

#### **CAPÍTULO II**

#### *Operaciones de los bancos*

Art. 4º — Los bancos autorizados deberán, como mandatarios del Banco Central de la República Argentina, recibir depósitos de dinero en cuenta corriente, caja de ahorros o bajo otras denominaciones, de acuerdo con las reglamentaciones existentes o que en adelante dicte el Banco Central de la República Argentina y a los plazos y tasas de interés que él determine.

Art. 5º — Los bancos destinarán su capital y reservas, así como los recursos provenientes del redescuento de sus carteras que les haga el Banco Central de la República Argentina, a las operaciones de descuento e inversión a que se refiere el artículo 4º del decreto ley 11.554/46.

No podrán, sin la previa autorización del Banco Central de la República Argentina.

- a) Emitir obligaciones ni debentures;
- b) Dar otro destino que el expresado en el primer párrafo del presente artículo a sus recursos propios y a los provenientes de redescuento, salvo la adquisición de bienes en defensa de sus créditos que quedarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 17;

- c) Otorgar fianzas o contraer compromisos que eventualmente puedan afectar su patrimonio en medida tal que disminuya en forma apreciable la garantía de los demás acreedores. El Banco Central de la República Argentina establecerá las normas para estas operaciones;
- d) Acordar a algunos de sus acreedores privilegios o preferencias sobre todo o parte de su activo;
- e) Utilizar créditos en otros bancos o en las instituciones a que se refiere el artículo 20 de este decreto ley, salvo lo necesario para la atención de sus operaciones recíprocas.

Art. 6º — El Banco Central de la República Argentina podrá autorizar a los bancos a utilizar todo o parte de los fondos provenientes de depósitos que tengan a la orden del Banco Central de la República Argentina, o de otra manera proporcionarles recursos para la realización de adelantos en cuenta corriente, inversiones en valores públicos y privados y demás operaciones propias del giro bancario, así como para financiaciones o inversiones a plazos largos e intermedios.

El Banco Central de la República Argentina determinará las condiciones generales o especiales a que deberán ajustarse estas operaciones, plazos, tasas de interés, monto, garantías y otras modalidades.

Art. 7º — Los bancos podrán operar con sus directores y administradores, así como con las empresas o personas vinculadas a ellos, solamente en las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina al reglamentar esta disposición.

### CAPÍTULO III

#### *Balances, informes y contabilidad*

Art. 8º — Los bancos deberán presentar al Banco Central de la República Argentina, con la periodicidad, dentro de los plazos y en los formularios que para cada clase o grupo de entidades él establezca, las informaciones que les solicite sobre sus operaciones en general o en particular. Deberán suministrarle además toda otra información complementaria que les requiera, en la forma que él mismo determine.

El Banco Central de la República Argentina publicará periódicamente un resumen del estado de las operaciones generales de los bancos, sin poder divulgar los detalles individuales de las que cada establecimiento haya realizado por cuenta propia.

Art. 9º — Todo banco deberá publicar, dentro de los sesenta días de la fecha de cierre de su ejercicio financiero, en formularios prescritos por el Banco Central de la República Argentina y con no menos de diez días de anticipación a la realización de su asamblea ordinaria anual, su balance general y su cuenta de ganancias y pérdidas, que llevarán el visto bueno de un contador público nacional.

Art. 10. — El Banco Central de la República Argentina podrá dictar las normas generales o especiales que estime convenientes a fin de que los bancos uniformen sus registros contables en los casos de operaciones hechas en su carácter de mandatarios del Banco Central de la República Argentina o que se vinculen al redescuento de cartera o a los recur-

sos que el mismo les autorice a utilizar o les proporcione para la realización de sus operaciones propias.

### CAPÍTULO IV

#### *Inspección y control*

Art. 11. — Las funciones de inspección, control y examen de los bancos, incluso el requerimiento de balances e informes, serán del resorte exclusivo del Banco Central de la República Argentina. La Inspección General de Justicia de la Nación y las reparticiones similares de las provincias, no tendrán otra intervención en materia de bancos, que la de informar en los casos de solicitud de personería jurídica y enviar sus inspectores a las asambleas, al solo fin de vigilar el regular funcionamiento de los actos y la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

Art. 12. — Los bancos tendrán obligación de dar acceso a su contabilidad y a todos sus libros, papeles y documentos a los inspectores que el Banco Central de la República Argentina envíe, los que ejercerán sus funciones con las más amplias facultades.

Art. 13. — Las informaciones recogidas en los bancos por el personal del Banco Central de la República Argentina tendrán carácter estrictamente confidencial, no pudiendo ser admitidas en juicio, por lo que los jueces las rechazarán de oficio, salvo en los procesos penales por delitos comunes y siempre que se hallen directamente vinculadas con los hechos que se investiguen.

En los pedidos de informes que les hagan los jueces, los bancos deberán ajustarse a la legislación común.

Art. 14. — El personal del Banco Central de la República Argentina que por sus funciones tenga acceso a las informaciones de los bancos deberá guardar absoluta reserva acerca de ellas, haciéndose pasible de las sanciones administrativas o penales que correspondiesen.

Art. 15. — El Banco Central de la República Argentina se encargará de la liquidación de los bancos, cualquiera sea la causa determinante de ella.

Las entidades cuya liquidación se halle a cargo del Banco Central de la República Argentina no podrán ser declaradas en quiebra, debiendo éste promover las acciones civiles o penales procedentes contra los responsables. En caso de solicitarse la quiebra o concurso de un banco, antes de proveer los pedidos, los jueces deberán dar intervención al Banco Central de la República Argentina para que si así correspondiera resuelva la liquidación y la tome a su cargo.

El Banco Central de la República Argentina sólo podrá cobrar, por su gestión de liquidador, los gastos de cualquier naturaleza en que haya incurrido como consecuencia de ella.

### CAPÍTULO V

#### *Disposiciones varias*

Art. 16. — Los bancos destinarán anualmente por lo menos el 10 % de sus utilidades líquidas para constituir el fondo de reserva legal.

Art. 17. — Cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina el activo de algún banco incluyera quebrantos o inmovilizaciones que afectasen su estabilidad o liquidez, la entidad deberá someterle

un plan de saneamiento dentro de los treinta días de haberle sido requerido. Mientras no llegara a aprobarse y cumplirse el plan, el Banco Central de la República Argentina podrá limitar o prohibir la distribución de dividendos u otras retribuciones de capital.

Art. 18. — El Banco Central de la República Argentina podrá establecer para las secciones hipotecarias de los bancos — así como para las de las instituciones hipotecarias que de cualquier manera utilicen en sus operaciones recursos de terceros — el régimen de financiación del Banco Hipotecario Nacional.

Art. 19. — El Banco Central de la República Argentina cuidará que las denominaciones que utilicen los bancos autorizados y las entidades no bancarias comprendidas en el artículo 20 no ofrezcan dudas acerca de su naturaleza e individualidad a los que contraten con ellos, a cuyo efecto podrá dictar las disposiciones a que deberán ajustarse las entidades que den lugar a reparos.

No podrán usar las denominaciones de «banco», «banquero», o «bancario» las personas de existencia visible o ideal no autorizadas a operar como bancos según lo establecido en el artículo 1º de este decreto ley. Se excluye de esta disposición a las entidades hipotecarias que han sido autorizadas para usar en su denominación la palabra «banco» o sus derivados, y a las que lo sean en el futuro por el Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de la República Argentina queda facultado para prohibir a las entidades que no sean bancos el uso de términos típicos o característicos de las operaciones bancarias.

Art. 20. — En general quedan excluidas del régimen del presente decreto ley las personas de existencia visible o jurídica que sin ser bancos reciban de cualquier manera fondos de terceros y los destinen a la concesión de créditos en dinero, sean ellos personales, reales — hipotecarios o no — o de otra naturaleza, modalidad o denominación; pero el Banco Central de la República Argentina podrá dictar a su respecto, cuando lo estime conveniente, normas para su constitución y funcionamiento, como también ejercer, en los casos y en la forma que juzgue pertinentes, su fiscalización, control e inspección, todo ello sin perjuicio del cumplimiento, por parte de esas personas, de las disposiciones legales y reglamentarias, generales o particulares, a que se hallen sujetas.

El Banco Central de la República Argentina podrá declarar comprendidas en el régimen de este decreto ley a las entidades cuya inclusión se justifique, a su juicio, por la magnitud o naturaleza de sus operaciones.

Art. 21. — Los bancos o entidades de cualquier naturaleza que infrinjan las disposiciones del presente decreto ley, serán pasibles de multas de \$ 500 m/n., a \$ 500.000 m/n., las que serán aplicadas por decisión del presidente del Banco Central de la República Argentina con apelación ante el juez federal.

Las personas que hubieran cometido la infracción, si sus actos no tuvieran pena mayor en el Código Penal, serán reprimidas con las mismas multas o prisión de seis meses a cinco años, o ambas penas a la vez, según el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia en la infracción, para lo cual el Banco Central de la República Argentina promoverá las acciones correspondientes.

Art. 22. — A los efectos de que la situación actual de los bancos autorizados quede gradualmente encuadrada en el régimen de este decreto ley, el Banco Central de la República Argentina podrá dictar las disposiciones, adoptar las medidas y concertar los convenios que juzgue convenientes.

Art. 23. — La aplicación del presente decreto ley quedará a cargo del Banco Central de la República Argentina, y la interpretación que éste haga de sus disposiciones, será de cumplimiento obligatorio.

Art. 24. — Derógase toda disposición que se oponga al presente decreto ley.

Art. 25. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 26. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.

IX—(107-S)

DECRETO 12.596/46

Control de cambios

Buenos Aires, 3 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — A partir de la fecha el control de cambios quedará a cargo del Banco Central de la República Argentina, quien ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que se dispone en el presente decreto ley.

Art. 2º — A efectos de cumplir las funciones asignadas en el artículo 1º, el Banco Central de la República Argentina deberá:

- Distribuir el cambio disponible entre las importaciones y otras remesas y, dentro de las primeras, fijar el orden de prelación por grandes grupos de artículos para el otorgamiento de las divisas, de acuerdo con el criterio expuesto en los considerandos del presente decreto;
- Establecer y modificar la nómina de los artículos que incluya dentro de dichos grupos o categorías de importaciones;
- Fijar los tipos de cambio para la compra y venta de divisas;
- Determinar las modalidades del régimen de control de cambios;
- Establecer y aplicar las reglamentaciones y medios de fiscalización que requieran las normas de cambio.

Art. 3º — A partir del 1º de septiembre de 1946, las funciones de inspección y sumarios que por el

artículo 2º, inciso b) del decreto 93.058/41, tiene a su cargo la Dirección General del Impuesto a los Réditos serán ejercidas por el Banco Central de la República Argentina.

Las informaciones que se recojan tendrán carácter secreto y regirán a su respecto las disposiciones de la ley 11.683, artículo 69 (T. O.).

Art. 4º — El Banco Central de la República Argentina podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para dar cumplimiento a las funciones que por el artículo 3º de este decreto se le encomiendan.

Podrá también requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamientos necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora bajo la responsabilidad del o los funcionarios que las requieran.

Art. 5º — Queda suprimida la Comisión de Divisas creada con carácter transitorio por el artículo 1º de la ley 12.960.

Art. 6º — Queda a cargo del Banco Central de la República Argentina, a partir de la fecha, el otorgamiento y cancelación de las inscripciones o autorizaciones para operar en cambio.

Art. 7º — Déjase sin efecto a partir de la fecha la autorización acordada por decreto 90.235/41 a la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. para comprar y vender divisas. Las divisas actualmente acumuladas por dicha sociedad, como así las funciones inherentes a su negociación, quedan a cargo exclusivo del Banco Central de la República Argentina.

Art. 8º — El Banco Central de la República Argentina elevará, dentro del término de sesenta días, la reglamentación del presente decreto ley y entre tanto aplicará las disposiciones vigentes en lo que no se opongan al mismo o adoptará las medidas que sean necesarias para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas.

Art. 9º — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto ley.

Art. 10. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Felipe Urdapilleta — Juan Pistarini. — F. Pedro Marotta. — José M. Astigueta. — Juan I. Cooke. — José Humberto Sosa Molina. — Abelardo Pantin.*

X—(106-S)

DECRETO 15.347/46

#### **Preenotación de operaciones con garantía hipotecaria**

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — Los bancos oficiales de la Nación, al efectuar operaciones con garantía hipotecaria, podrán disponer directamente su preanotación por oficio a los registros inmobiliarios, a fin de conceder

anticipos a sus clientes una vez acordado el préstamo y comprobado el dominio y la libertad de disposición de la finca ofrecida.

Art. 2º — La preanotación de la hipoteca originará una carga real sobre el inmueble, con privilegio especial sobre éste por el importe del anticipo, sus intereses y gastos, el que durará cuarenta y cinco días corridos desde la inscripción y será prorrogable a pedido del banco acreedor, por el mismo lapso y en la misma forma, cuantas veces sea necesario.

Art. 3º — La preanotación caducará en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Por el mero vencimiento del término fijado en el artículo anterior;
- b) Por el pago del anticipo y de sus intereses y gastos que comunicará el acreedor por oficio directo;
- c) Por la inscripción de la escritura pública de la hipoteca que garantice el crédito total.

Art. 4º — Si por incumplimiento del contrato, por fallecimiento, o por cualquier otra causa, no se formalizara la escritura pública de hipoteca, el directorio del banco podrá disponer la inmediata ejecución del inmueble como si se tratara de una deuda de plazo vencido garantizada con derecho real de hipoteca en el grado en que se halla preanotado y conforme a sus procedimientos especiales de ejecución, si los hubiere, con la base del anticipo, más los intereses, impuestos, tasas y gastos.

Art. 5º — Las inscripciones en los registros de la propiedad de estas preanotaciones pagarán los derechos correspondientes a la hipoteca sobre la base del anticipo acordado, debiendo deducirse, posteriormente, al realizarse la hipoteca, del monto de impuesto correspondiente a ésta, el importe ya pagado.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo reglamentará este decreto ley, dentro del término de sesenta días.

Art. 7º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

XI—(111-S)

DECRETO 15.348/46

#### **Prenda**

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

#### **CAPÍTULO I**

##### *Régimen general*

Artículo 1º — La prenda con registro puede constituirse para asegurar el pago de una suma cierta

de dinero o el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones, a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prendaria, un valor consistente en una suma de dinero.

Art. 2º — Los bienes sobre los cuales recaiga la prenda con registro quedarán en poder del deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena.

Art. 3º — Los bienes afectados a la prenda garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre ellos, el importe de la obligación asegurada, intereses y gastos en los términos del contrato y de las disposiciones de este decreto ley.

El privilegio de la prenda se extiende, salvo convención en contrario, a todos los frutos, productos, rentas e importe de la indemnización concedida o debida en caso de siniestro, pérdida o deterioro de los bienes prendados.

Art. 4º — El contrato produce efectos entre las partes desde su celebración y con respecto a terceros, desde su inscripción en la forma establecida en este decreto ley.

Art. 5º — La prenda con registro sólo puede constituirse a favor de los acreedores siguientes:

- a) El Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos oficiales, mixtos o particulares autorizados a funcionar por autoridad competente;
- b) Las sociedades cooperativas y las sociedades de agricultores, ganaderos o industriales;
- c) Los acopiadores de productos y frutos agropecuarios, para asegurar créditos en dinero destinados a la explotación rural;
- d) Los comerciantes e industriales inscritos en el Registro Público de Comercio respectivo, cuando se trate de asegurar el pago total o parcial del precio de las mercaderías por ellos vendidas, sobre las cuales recaiga la prenda;
- e) Las personas de existencia visible o jurídica inscritas como prestamistas en la Dirección General del Impuesto a los Réditos, siempre que el interés pactado no sea superior en más de 2 puntos al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus préstamos personales en la fecha del contrato. La prenda con registro será nula cuando se haya constituido en desacuerdo con lo establecido en este artículo.

Art. 6º — Los contratos de prenda que establece el presente decreto ley se formalizarán en documento privado, extendiéndose en los formularios respectivos que gratuitamente facilitarán las Oficinas del Registro de Prenda, cuyo texto será fijado en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 7º — Durante la vigencia de un contrato prendario, el dueño de los bienes no puede constituir, bajo pena de nulidad, otra prenda sobre éstos, salvo que lo autorice por escrito el acreedor.

Art. 8º — El dueño de los bienes prendados puede industrializarlos o continuar con ellos el proceso de su utilización económica; los nuevos productos quedan sujetos a la misma prenda.

En el contrato de prenda puede estipularse que los bienes se conservarán en el estado en que se encuentren, sin industrializarlos, ni transformarlos.

Art. 9º — El dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos, pudiendo hacerlo solamente en el caso que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada, continuando en vigor la prenda bajo las mismas condiciones en que se constituyó, inclusive en cuanto a la responsabilidad del enajenante. La transferencia se anotará en el registro y se notificará al acreedor mediante telegrama colacionado.

## CAPÍTULO II

### Prenda fija

Art. 10. — Pueden prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o productos aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Las cosas inmuebles por su destino, incorporadas a una finca hipotecada, sólo pueden prendarse con la conformidad del acreedor hipotecario.

Art. 11. — En el contrato son esenciales las siguientes especificaciones que deberán constar en la respectiva inscripción:

- a) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del acreedor;
- b) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del deudor;
- c) Cuantía del crédito y tasa del interés, tiempo, lugar y manera de pagarlos;
- d) Particularidades tendientes a individualizar los bienes prendados. Si la prenda recae sobre ganados, éstos serán individualizados mediante indicaciones sobre su clase, número, edad, sexo, grado de mestización, marca, señal, certificado o guía con mención del número de inscripción, fecha de ésta, oficina en que la marca o señal está registrada y la que haya expedido la guía o certificado. Si se trata de otros bienes, la individualización será lo más especificativa posible en cuanto a cantidad, calidad, peso, número, análisis, marca de fábrica, patente, controles a que estén sujetos y cualesquiera otras particularidades que contribuyan a individualizar los bienes. Se considera que la prenda de un fondo de comercio no incluye las mercaderías del negocio; y que comprende las instalaciones, contratos de locación, marcas, patentes y enseñanzas, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y todos los derechos que comporta la propiedad comercial, industrial y artística.

En el caso de que las especificaciones estatuidas en este inciso d), ya figuren en una inscripción anterior, no deben reproducirse, sino que se mencionará indicando donde se encuentra;

- e) Especificación de los privilegios a que estén sujetos los bienes en el momento de celebrarse el contrato de prenda;
- f) Especificación de los seguros si los bienes están asegurados.

Art. 12 — Para que produzca efecto, la inscripción del contrato deberá hacerse en los registros correspondientes a la ubicación de los bienes prendados.

Si los bienes estuvieran situados en distinta jurisdicción o distrito, el registro donde se practique la

inscripción la comunicará dentro de las 24 horas a los registros del lugar donde estén situados los demás bienes, a los efectos de su anotación. La omisión del encargado del registro donde se inscribiera la prenda, de hacerlo saber a los demás encargados a la de éstos de hacer la anotación en sus respectivos registros, no afectará la validez de la prenda y sus efectos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, inciso b).

Art. 13. — El dueño de los bienes prendados no puede sacarlos del lugar en que estaban cuando constituyó la garantía, sin que el encargado del registro respectivo deje constancia del desplazamiento en el libro de registro y certificado de prenda y se lo notifique al acreedor, al endosante y a la oficina que haya expedido certificados o guías en su caso. Esta cláusula será insertada en el contrato y su violación faculta al acreedor para gestionar el secuestro de los bienes y las demás medidas conservatorias de sus derechos.

. Los automotores quedan comprendidos en esta prohibición sólo cuando se trate de su desplazamiento definitivo.

Los frutos y productos agropecuarios pueden ser vendidos en la época adecuada; antes de entregarlos al comprador, el enajenante deberá pagar una parte de la deuda que sea proporcional a la reducción de la garantía, determinada por la venta. Estas operaciones serán anotadas al margen de la inscripción y en el certificado de prenda, independientemente del recibo que otorgue el acreedor prendario por el pago parcial.

El dueño de las cosas prendadas puede usarlas conforme a su destino y está obligado a velar por su conservación.

El acreedor está facultado para inspeccionarlas; en el contrato puede convenirse que el dueño lo informe periódicamente sobre el estado de ellas.

El uso indebido de las cosas o la negativa a que las inspeccione el acreedor, dará derecho a éste a pedir el secuestro de ellas.

Las cosas prendadas pueden depositarse donde acuerden el acreedor y el deudor; el depósito se hará constar en el contrato y en la inscripción.

### CAPÍTULO III

#### *Prenda flotante*

Art. 14. — Sobre mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, puede constituirse prenda flotante, cuando tenga por objeto asegurar el pago de obligaciones cuyo plazo no exceda de 180 días. Este tipo de prenda afecta las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación, tanto como las que se adquirieran para reemplazarlas; y no restringe la disponibilidad de todas ellas, a los efectos de la garantía.

Art. 15. — En el contrato son esenciales las siguientes especificaciones que deberán constar en la respectiva inscripción:

- a) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del acreedor;
- b) Nombre, apellido, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y profesión del deudor;
- c) Cuantía del crédito y tasa de interés, tiempo, lugar y manera de pagarlo;

- d) Particularidades tendientes a individualizar los bienes prendados, especificando si son o no fungibles, determinando en el primer caso su especie, calidad, graduación y variedad;
- e) Especificación de los privilegios a que están sujetos los bienes en el momento de celebrarse el contrato de prenda;
- f) Especificación de los seguros que existan.

Art. 16. — Para que produzca efecto, la inscripción del contrato deberá hacerse en los registros correspondientes al domicilio del deudor.

### CAPÍTULO IV

#### *Disposiciones comunes*

Art. 17. — La inscripción de los contratos prendarios se hará en el Registro de Prenda, el que funcionará en las oficinas nacionales, provinciales o municipales que determine el Poder Ejecutivo y con arreglo a la reglamentación que el mismo fijará. Los trámites ante el Registro de Prenda quedan sujetos al arancel que fije el Poder Ejecutivo.

Art. 18. — El Registro de Prenda expedirá certificados y proporcionará informaciones a requerimiento judicial, de establecimientos bancarios, de escribanos públicos con registro, y de quien compruebe un interés ante el encargado del mismo.

Art. 19. — Para que produzca efecto contra terceros desde el momento de celebrarse el contrato, la inscripción debe solicitarse dentro de las 24 horas. Pasado ese término producirá ese efecto desde que el contrato se presente al Registro.

El certificado que sobre determinados bienes no aparezca inscrito en ningún contrato prendario, tendrá eficacia legal hasta 24 horas de expedido; al solicitarse este certificado se mencionarán las especificaciones establecidas en los artículos 11, inciso d), y 15, inciso d).

Art. 20. — Dentro de las 24 horas de serle presentado el contrato, el encargado del registro hará la inscripción y la comunicará en otro término igual y por carta certificada, a los acreedores privilegiados a que se refieren los artículos 11, inciso e) y 15, inciso c) y a las oficinas públicas indicadas en el artículo 13 y a los demás registros donde debe hacerse la anotación.

Art. 21. — Las oficinas públicas o particulares que expidan certificados de transferencia o guías para el traslado de ganado o frutos, o patentes, o que de cualquier manera les incumba controlar los bienes gravados con prenda, no podrán expedir ni tramitar documentos de transferencia de propiedad ni de sus registros sin que en los documentos se inserte la constancia de que están prendados.

Art. 22. — Una vez que haga la inscripción, el encargado del registro dejará constancia de ella en el contrato original y en el certificado de prenda que expida, con las formalidades que prescribe el decreto reglamentario.

Art. 23. — El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación principal, pero no más allá de cinco años, contados desde que la prenda se ha inscrito, al final de cuyo plazo máximo la prenda caduca. Podrá, sin embargo, reinscribirse por igual término el contrato no cancelado, a solicitud de su legítimo tenedor, dirigida al encargado del registro antes de caducar la inscripción. Si durante la vigencia de ésta se promoviera

ejecución judicial, el actor tiene derecho a que el Juez ordene la reinscripción por el indicado término, todas las veces que fuera necesario.

Art. 24. — El contrato prendario inscrito es transmisible por endoso y el endoso también debe ser inscrito en el registro para producir efectos contra terceros. El régimen sobre endosos del Código de Comercio regirá la forma y efectos del endoso de que trata este artículo; pero la falta de protesto no hará caducar la responsabilidad de los endosantes siempre que, en el término de treinta días, contados desde el vencimiento de la obligación prendaria, el tenedor inicie su acción notificándola a los endosantes.

Art. 25. — La inscripción será cancelada en los casos siguientes:

- a) Cuando así lo disponga una resolución judicial;
- b) Cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite adjuntando certificado de prenda endosado por su legítimo tenedor; el certificado se archivará en el Registro con la nota de que se ha cancelado la inscripción;
- c) El dueño de la cosa prendada puede pedir al registro la cancelación de la garantía inscrita acompañando el comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el banco oficial más próximo al lugar donde está situada la cosa, a la orden del acreedor. El encargado del registro notificará la consignación al acreedor mediante carta certificada dirigida al domicilio constituido en el contrato. Si el notificado manifestara conformidad o no formulara observaciones en el término de diez días a partir de la notificación, el encargado hará la cancelación. En el caso de que objetara el depósito, el encargado lo comunicará al deudor y al banco para que ponga la suma depositada a disposición del depositante, quien puede promover juicio por consignación.

Art. 26. — El certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. La acción ejecutiva y la venta de los bienes se tramitarán por procedimiento sumarísimo, verbal y actuado. No se requiere protesto previo ni reconocimiento de la firma del certificado ni de las convenciones anexas.

Art. 27. — Están obligados solidariamente al pago, el deudor prendario y los endosantes del certificado.

Art. 28. — La acción prendaria compete al juez de Comercio del lugar convenido para pagar el crédito o del lugar que según el contrato se encontraban o se encuentran situados los bienes, o del lugar del domicilio del deudor, a opción del ejecutante.

Art. 29. — Presentada la demanda con el certificado, se despachará mandamiento de embargo y ejecución como en el juicio ejecutivo; el embargo se notificará al encargado del registro y a las oficinas que perciban patentes o ejerciten control sobre los bienes prendados. La intimación de pago no es diligencia esencial. En el mismo decreto en que se dicten las medidas anteriores, se citará de remate al deudor, notificándole que si no opone excepción legítima en el término de tres días perentorios, se llevará adelante la ejecución y se ordenará la venta de la prenda.

Art. 30. — Las únicas excepciones admisibles son las siguientes:

- 1º) Incompetencia de jurisdicción;
- 2º) Falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante;
- 3º) Renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor;
- 4º) Pago;
- 5º) Caducidad de la inscripción;
- 6º) Nulidad del contrato de prenda.

Las excepciones de los incisos 1º), 5º) y 6º) deberán resultar del contrato mismo; la del inciso 2º) de las constancias de autos; las de los incisos 3º) y 4º) de documentos emanados del acreedor y presentados con el escrito oponiendo excepciones.

Las excepciones que no se funden en las causas indicadas, serán desestimadas de inmediato, sin perjuicio de la acción ordinaria que puede ejercer el demandado. El juez resolverá sobre las excepciones dentro del término de tres días haciendo lugar a ellas y rechazando la ejecución o desestimándolas y mandando llevar adelante la ejecución, ordenando la venta de los bienes en la forma establecida en el artículo 29. Esta resolución será apelable dentro del término de dos días en relación y al solo efecto devolutivo.

Art. 31. — La subasta de los bienes se anunciará con diez días de anticipación mediante edicto que se publicará por tres veces. Cuando en el contrato no se haya convenido que el acreedor tiene la facultad de proponer a la persona que realizará la subasta, el juez designará para esto a un rematador. Para la designación se preferirá a los que estén domiciliados en el lugar donde se realizará la subasta o en las cercanías. La base de la venta será el importe del crédito garantizado con la prenda.

Art. 32. — No se suspenderá el juicio por quiebra, muerte o incapacidad del deudor, ni por otra causa que no sea orden escrita de juez competente dictada previa consignación en pago de la deuda, sus intereses y costas, salvo lo dispuesto en el artículo 38.

Art. 33. — En caso de muerte, incapacidad, ausencia o concurso del deudor, la acción se iniciará o continuará ante la jurisdicción establecida en el artículo 28, con los respectivos representantes legales. Si éstos no se presentaren en juicio después de 8 días de citados personalmente o por edictos, si no se conociera su existencia o domicilio, el trámite se seguirá con intervención del defensor de ausentes.

Art. 34. — La iniciación del juicio de ejecución de prenda implica la apertura de un concurso especial con los bienes que comprende.

Art. 35. — En ningún caso los jueces ordenarán la subasta de bienes muebles, sin previo requerimiento del deudor, para que en término perentorio manifieste si los bienes embargados están afectados a la prenda que establece este decreto ley. En caso de silencio se aplicarán las sanciones del artículo 45, inciso g), y en el de falsa declaración las establecidas en el artículo 44. Cuando se tratare de bienes sujetos al pago de una patente especial, sometidos al control de alguna oficina pública, o de fondos de comercio, será necesario antes de la enajenación judicial o privada el informe previo del Registro de Prenda que corresponde. En estos casos el que adquiriera bienes de buena fe acreditada en certificados que los declaren libres de gravamen prendario, está exento de toda responsabilidad emergente de la prenda.

Art. 36. — Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago, salvo lo dispuesto por el artículo 39.

Art. 37. — En la misma ejecución prendaria se harán los trámites tendientes a cobrar el saldo de la obligación no satisfecho con el precio de la cosa prendada.

Art. 38. — No se admitirán tercerías de dominio ni de mejor derecho en el trámite de la ejecución prendaria, salvo la del propietario de los objetos prendados en el momento de su constitución, la del comprador de buena fe del artículo 41 y del acreedor privilegiado del artículo 42, quienes deberán otorgar una caución bastante para que se suspenda el juicio o la entrega de fondos.

Art. 39. — Cuando el acreedor sea una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial, procediendo el acreedor a la venta de los objetos prendados en la forma prescrita por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar en juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar al acreedor. Para facilitar la venta prevista en este artículo, ante la presentación del certificado prendario, el juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo, no se suspenderá por embargo de los bienes, ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor.

Art. 40. — El beneficio de la inembargabilidad establecido en las leyes nacionales o provinciales vigentes o que se dicten en adelante, se considerará subsistente aunque se trate de embargos despachados en los juicios de ejecución reglados por el presente decreto ley, salvo cuando la prenda garantice al acreedor el cobro del precio de venta de las cosas afectadas a dicha prenda.

Art. 41. — En caso de venta de una cosa prendada como libre, aunque fuera a título oneroso, tendrá el acreedor prendario derecho a ejercer la acción persecutoria contra el actual poseedor, sin perjuicio de las acciones penales contra el enajenante, que prescribe el artículo 44.

Art. 42. — La prenda no perjudica al privilegio del acreedor por alquileres de predios urbanos, por el término de dos meses, ni al de predios rurales por un año de arrendamiento.

Es lo mismo que se trate de alquileres a pagar por adelantado o después de vencer los respectivos períodos del arrendamiento.

A este efecto, igual situación que el locador tiene quien ha cedido el uso y goce de un inmueble rural a cambio de una prestación en especie.

El privilegio que se reconoce en este artículo requiere que el contrato de locación o el que a éste se equipara, se haya inscrito antes de la prenda en el Registro de Prenda, o que los créditos consten en el contrato de prenda. La omisión del deudor de dejar esa constancia le hará pasible de las sanciones penales establecidas en el artículo 45, inciso a).

Art. 43. — En el caso de venta de los bienes afectados, sea por mutuo convenio o ejecución judicial, su producto será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes:

- 1º) Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados, incluso sueldos y salarios de acuerdo con el Código Civil. Inclúyese en los gastos de conservación el precio de locación necesario para la producción y mantenimiento del objeto prendado durante la vigencia de la prenda;
- 2º) Pago de los impuestos fiscales que gravan los bienes dados en prenda;
- 3º) Pago del arrendamiento del predio si el deudor no fuera el propietario del mismo, en los términos del artículo 42. Si el arrendamiento se hubiera estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que le sea entregado en esa forma;
- 4º) Pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado;
- 5º) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que el Código Civil le reconozca privilegio.

Los créditos del inciso 1º) gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia del producto de la venta.

Será nula cualquier estipulación incorporada al contrato prendario con la finalidad de establecer que la cosa prendada pueda liquidarse en forma distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que después de vencida la obligación prendaria, las partes acuerden la forma de liquidación que más les convenga, salvo lo dispuesto en el artículo 39.

Art. 44. — Será pasible de las penas establecidas en los artículos 172 y 173 del Código Penal, el deudor que disponga de las cosas empeñadas como si no reconociera gravámenes, o que constituya prenda sobre bienes ajenos como propios, o sobre éstos como libres estando gravados.

Art. 45. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

- a) El deudor que en el contrato de prenda omita denunciar la existencia de privilegios de acuerdo con los artículos 11, inciso e) y 15, inciso e);
- b) Los encargados de la oficina, determinados en el artículo 19, que omitan el cumplimiento de las disposiciones allí establecidas;
- c) El deudor que efectúe el traslado de los bienes prendados, sin dar conocimiento al encargado del registro, de acuerdo con el artículo 9º; con excepción de los comprendidos en el artículo 14;
- d) El deudor que abandonare las cosas afectadas a la prenda con daño del acreedor. Esta sanción es sin perjuicio de las responsabilidades que en tales casos incumben al depositario de acuerdo con las leyes comunes;
- e) El deudor que omita hacer constar en sus balances o en sus manifestaciones de bienes la existencia de créditos prendarios;
- f) El que titulándose propietario o comprador de buena fe promoviera sin derecho una tercería de dominio y obtuviera la paralización del juicio prendario, aunque bajo caución;
- g) El deudor que omitiera denunciar la existencia del gravamen prendario sobre los bienes embargados cuya venta se dispusiera judicialmente, en los juicios incoados por un tercero extraño al acreedor prendario;

- h) El deudor que deteriorare las cosas afectadas a la prenda. Se presume que las cosas prendadas son buenas y se encuentran en buen estado si no resultare lo contrario del certificado de prenda;
- i) El prestamista que percibe un interés superior al estatuido en el artículo 5º, inciso e) de este decreto ley o simulare una operación inexistente, bajo la apariencia de un contrato de prenda con registro.

Art. 46. — El encargado del registro que expida certificados falsos incurrirá en la pena establecida por el artículo 292 del Código Penal.

Art. 47. — El Estado responde por los daños emergentes de irregularidades o errores que se cometan por sus funcionarios en cuanto a inscripciones y certificados o informes expedidos por el Registro de Prenda.

Art. 48. — Las disposiciones civiles de fondo y forma de este decreto ley quedan incorporadas a la legislación respectiva, y se aplicará el Código de Comercio en lo que sea pertinente. Las disposiciones penales quedan incorporadas al Código Penal.

Art. 49. — Los contratos celebrados según la ley 9.644 se regirán por sus disposiciones, salvo que los contratantes convengan en que queden sujetos al presente régimen legal.

Art. 50. — Queda derogada toda prescripción legal que se oponga a la presente.

Art. 51. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 52. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.

XII—(112-S)

DECRETO 15.349/46

### Sociedades de economía mixta

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,

DECRETA:

Artículo 1º — Se denomina sociedad de economía mixta la que forma el Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades o las entidades administrativas autárquicas, dentro de sus facultades legales, por una parte, y los capitales privados, por la otra, para la explotación de empresas que tengan por finalidad la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades económicas.

Art. 2º — La sociedad de economía mixta puede según sea la finalidad que se proponga su constituirse persona de derecho público o de derecho privado, ción.

Art. 3º — Salvo las disposiciones especiales que en el presente título se establecen, regirán, para las sociedades de economía mixta, las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, relativas a las sociedades anónimas.

Art. 4º — El aporte de la administración pública, en la sociedad de economía mixta, podrá consistir en cualquier clase de aportación, y en especial las siguientes:

- a) Concesión de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, protección fiscal, compensación de riesgos, garantías de interés al capital invertido por los particulares;
- b) Primas y subvenciones, aporte tecnológico;
- c) Anticipos financieros;
- d) Aportes de carácter patrimonial, en dinero, en títulos públicos o en especie, concesión de bienes en usufructo.

Art. 5º — Las entidades públicas y los particulares contribuirán a la formación del capital social en la proporción que convengan entre ellos.

Art. 6º — La sociedad de economía mixta podrá ser constituida por cualquier número de socios.

Art. 7º — El presidente de la sociedad, el síndico y, por lo menos, un tercio del número de los directores que se fije por los estatutos, representarán a la administración pública y serán nombrados por ésta, debiendo ser argentinos nativos.

En caso de ausencia o impedimento del presidente, lo reemplazará, con todas sus atribuciones, uno de los directores que represente a la administración pública. Los demás directores serán designados por los accionistas particulares.

Art. 8º — El presidente de la sociedad, o, en su ausencia, cualquiera de los directores nombrados por la administración pública, tendrán la facultad de vetar las resoluciones del directorio o las de las asambleas de accionistas, cuando ellas fueren contrarias a esta ley o la de su creación o a los estatutos de la sociedad, o puedan comprometer las conveniencias del Estado vinculadas a la sociedad.

En ese caso, se elevarán los antecedentes de la resolución objetada a conocimiento de la autoridad administrativa superior de la administración pública asociada, para que se pronuncie en definitiva sobre la confirmación o revocación correspondiente del veto, quedando, entretanto, en suspenso la resolución de que se trata. Si el veto no fuere convalidado por dicha autoridad dentro de los veinte días subsiguientes al recibo de la comunicación que dispone este artículo, se tendrá por firme la resolución adoptada por el directorio o por la asamblea de la sociedad, en su caso.

Cuando el veto se fundamentase en la violación de la ley o de los estatutos sociales, el capital privado podrá recurrir a la justicia de la resolución definitiva dictada.

Art. 9º — Los estatutos deberán determinar la fecha en que ha de empezar y acabar la sociedad.

Art. 10 — Una vez liquidada la sociedad de economía mixta, terminará su existencia en ese carácter. Si el capital privado rescatara las acciones de la entidad oficial, podrá continuar la misma empresa bajo el régimen adoptado.

Art. 11. — Las sociedades de economía mixta regidas por esta ley no podrán ser declaradas en quiebra, pero podrán ser disueltas en las demás circunstan-

cias previstas por los artículos 369, 370 y 371 del Código de Comercio y de acuerdo con el régimen que expresamente se disponga para esa eventualidad.

Art. 12. — Tratándose de sociedades que explotan servicios públicos, vencido el término de duración de la sociedad, la administración pública podrá tomar a su cargo las acciones en poder de los particulares y transformar la sociedad de economía mixta en una entidad autárquica administrativa, continuando el objeto de utilidad pública para el cual la sociedad hubiese sido creada.

Art. 13. — Los estatutos deberán consignar en cada caso el porcentaje mínimo de empleados y obreros argentinos que deberán ocuparse en los trabajos de la empresa.

Los obreros y empleados de la empresa podrán designar un delegado que tome parte en las asambleas, en las cuales tendrá voz pero no voto.

Art. 14. — La responsabilidad de la administración pública, se limitará exclusivamente a su aporte societario.

El presidente, los directores y el síndico, nombrados por la administración pública, tendrán las responsabilidades previstas en el Código de Comercio y la administración pública no responderá por los actos de los mismos.

Art. 15. — Las disposiciones del presente decreto ley se incorporarán como Título especial al Código de Comercio.

Art. 16. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso Nacional.

Art. 17. — Comuníquese, publíquese, pase al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

### XIII—(113-S)

#### DECRETO 15.350/46

#### Instituto Argentino de Promoción del Intercambio

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

#### DECRETA:

Artículo 1º — Créase una entidad autárquica nacional, con funciones técnicas y eminentemente comerciales, que se denominará Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, cuyas actividades se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en este decreto ley y la reglamentación que se dicte.

Art. 2º — El domicilio de la entidad estará en la ciudad de Buenos Aires. Su directorio podrá establecer sucursales o agencias, así como nombrar corresponsales, tanto en el país como en el exterior.

Art. 3º — El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio tiene por objeto promover el desarrollo

del comercio interior y exterior y llevar a cabo los actos que sean necesarios o convenientes a ese fin.

Art. 4º — El capital inicial del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio será de \$ 4.000.000 m/n. que se integrarán con parte de las diferencias de cambio pertenecientes al Estado acumuladas por la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. (en liquidación).

Art. 5º — El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio podrá realizar sin limitaciones todos los actos y operaciones tendientes a la consecución de su objeto y especialmente:

- a) Comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago y dar o tomar en arrendamiento toda clase de bienes; muebles, inmuebles, semovientes, cereales y cualesquiera otros productos en estado natural o elaborados, títulos, créditos, acciones o derechos; constituir o aceptar sobre ellos derechos de hipoteca o prenda o cualquier otro derecho de uso y goce o garantía;
- b) Almacenar en depósitos de su propiedad o de terceros toda clase de mercaderías propias o ajenas y emitir en su caso los certificados o *warrants* correspondientes;
- c) Intervenir en el transporte de toda clase de mercaderías propias o de terceros, mediante la celebración de convenios generales o especiales con organizaciones oficiales, mixtas o particulares de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial existentes o que en adelante se creen;
- d) Emitir obligaciones y debentures;
- e) Promover la constitución de sociedades comerciales, industriales o de transporte y participar en la suscripción de acciones de sociedades de esa naturaleza;
- f) Aceptar mandatos y otorgar los poderes requeridos por la consecución de su objeto;
- g) Efectuar por cuenta de terceros toda clase de operaciones propias de su naturaleza;
- h) Realizar las operaciones financieras, de cualquier clase, que sean útiles o necesarias para los fines de la entidad.

Art. 6º — Todas las negociaciones o compras que disponga el Poder Ejecutivo en defensa de la producción serán efectuadas por intermedio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

Art. 7º — Se realizarán con intervención del Instituto todas las compras en el exterior destinadas a atender necesidades de las reparticiones del Estado, salvo el caso de adquisiciones especiales que el Poder Ejecutivo resuelva excluir de este régimen.

Art. 8º — El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio participará en la tramitación de los convenios internacionales de carácter comercial; tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las convenciones, e informará y asesorará al Poder Ejecutivo cuando a su juicio fuese observable la forma en que se cumplen las cláusulas pactadas.

Art. 9º — La dirección del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio estará a cargo de un presidente, un vicepresidente y siete directores, todos argentinos nativos y designados por el Poder Ejecutivo nacional.

La presidencia será ejercida ad honorem por el presidente del Banco Central de la República Argentina, el que podrá hacerse representar por el gerente general de dicho banco.

Un director será propuesto por el Ministerio de Agricultura de la Nación, otro por la Secretaría de Industria y Comercio y otros dos por los bancos de la Nación Argentina y de Crédito Industrial Argentino. Estos cuatro directores se turnarán anualmente en el ejercicio de la vicepresidencia del instituto.

Los cuatro directores restantes serán propuestos por el Banco Central de la República Argentina quien consultará para ello, conforme a la reglamentación que se dicte, a los sectores de la agricultura, de la ganadería, de la industria y del comercio. Por la primera vez la propuesta será hecha directamente por el Banco Central de la República Argentina.

Art. 10. — El vicepresidente y los directores durarán cuatro años en su cargo y serán reelegibles.

El vicepresidente gozará de una remuneración mensual de dos mil pesos moneda nacional, y los siete directores de la suma total de diez mil quinientos pesos moneda nacional mensuales, que será distribuida entre ellos en proporción a su asistencia a las reuniones.

Los directores que perciban otras remuneraciones del Estado —excepto las provenientes de funciones docentes— deberán optar entre ambas.

Art. 11. — No podrán ser miembros del directorio los fallidos o concursados civilmente ni los condenados por delitos comunes.

Art. 12. — El presidente tiene la representación de la entidad y ejercerá las funciones del directorio, en caso de urgencia, dándole cuenta en la primera oportunidad. Le corresponde nombrar, promover y separar de sus cargos el personal del instituto, a excepción del nombramiento y separación del gerente general y subgerente general que serán resueltos por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del directorio.

Art. 13. — Son deberes y atribuciones del directorio:

- a) Establecer las normas para la gestión económica y financiera del instituto; resolver respecto de sus operaciones en todo cuanto no delegue en el presidente o en funcionarios administrativos, y ejercer el control de los actos que se realicen;
- b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional el nombramiento del gerente general y subgerente general, así como su remoción que sólo podrá fundarse en mal desempeño o en la comisión de delitos comunes;
- c) Designar de entre los directores, en la primera reunión de cada ejercicio, un vicepresidente segundo;
- d) Dictar la reglamentación interna que regirá el funcionamiento de la entidad;
- e) Fijar el presupuesto anual de sueldos y gastos;
- f) Tratar anualmente el balance general de la entidad, la cuenta de ganancias y pérdidas, el proyecto de distribución de las utilidades y la memoria, todo lo cual será sometido a la consideración del Banco Central de la República Argentina, quien lo elevará con su opinión al Poder Ejecutivo nacional;
- g) Asesorar al Banco Central de la República Argentina en materia de fijación de tipos de cambio para exportaciones e importaciones;
- h) Colaborar, con los bancos oficiales y otros organismos, en la preparación y cumplimiento de planes para la inmigración y selección de

técnicos y personal especializado y coordinar su acción en cuanto resulte útil para sus funciones específicas;

- i) Promover investigaciones tecnológicas y efectuar y alentar el estudio de mercados;
- j) Expedir certificados de calidad de los productos destinados a la exportación.

Art. 14. — El presidente o el vicepresidente convocarán a las reuniones del directorio y las presidirán, pudiendo ser reemplazados en esta última función en caso necesario por los directores representantes de organismos del Estado. Cinco miembros formarán quórum y, salvo disposición especial en contrario, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, el presidente o quien ocupare la presidencia, tendrá doble voto.

Art. 15. — Las relaciones del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio con el Poder Ejecutivo nacional se mantendrán a través del Banco Central de la República Argentina, el que a ese efecto podrá en cada caso dirigir los asuntos directamente a la Secretaría de Estado que corresponda.

Art. 16. — El Banco Central de la República Argentina entregará al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, además de los recursos de capital asignados en el artículo 4º de este decreto ley, los bienes de la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. (en liquidación) que puedan serle útiles, y le transferirá los locales de aquella tanto en el país cuanto en el exterior. Asimismo, le encomendará el cumplimiento de las obligaciones que tenga pendientes dicha corporación.

Art. 17. — Por intermedio de las instituciones autorizadas para operar en cambios, y sin que pueda en ningún caso tomar riesgo alguno por su cuenta en las operaciones, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio adquirirá y venderá las divisas o cambio extranjero provenientes de la exportación de productos que hasta el presente no se exportan o se exportan en reducidas cantidades o de las exportaciones a nuevos mercados, todo ello de acuerdo con las listas existentes de artículos comprendidos en esa clasificación o las que en adelante formule el Banco Central de la República Argentina.

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio incorporará a sus recursos las utilidades provenientes de las diferencias entre los tipos de compra y de venta.

Art. 18. — El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, como entidad del Estado nacional, está sometido exclusivamente a la jurisdicción federal. Cuando sea actor en juicio, la competencia federal será concurrente con la de la justicia ordinaria de la Capital y de las provincias.

Art. 19. — Facúltase al Banco Central de la República Argentina para designar un representante que fiscalizará la contabilidad y documentación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio mediante el procedimiento y forma que dicho banco considere más eficiente.

Art. 20. — El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Crédito Industrial Argentino serán los agentes financieros del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, sin perjuicio de su facultad de operar con otros bancos.

Art. 21. — El directorio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio elevará al Poder Ejecu-

tivo por intermedio del Banco Central de la República Argentina, dentro del término de sesenta días de la fecha, el proyecto de reglamentación del presente decreto ley.

Art. 22. — Deróganse las disposiciones que se opongan a las del presente decreto ley.

Art. 23. — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 24. — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

#### XIV—(114-S)

##### DECRETO 15.352

#### Distribución de bienes y documentación de entidades varias

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — Encomiéndase al Banco Central de la República Argentina la distribución bajo inventario entre los bancos de la Nación, de Crédito Industrial Argentino, Hipotecario Nacional e Instituto Argentino de Promoción del Intercambio de los bienes y documentación pertenecientes a las siguientes entidades:

Consejo Agrario Nacional;  
Comisión Nacional de Granos y Elevadores;  
Junta Reguladora de la Producción Agrícola;  
Junta Nacional de Carnes;  
Junta Nacional del Algodón;  
Comisión Nacional del Azúcar;  
Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, y  
Comisión Nacional de la Industria Lechera.

Art. 2º — En cuanto a la Dirección de Vitivinicultura, antes Junta Reguladora de Vinos, la Secretaría de Industria y Comercio y el Banco Central de la República Argentina procederán a un estudio de la ley de vinos, a fin de determinar las funciones financieras atribuidas a la ex Junta Reguladora de Vinos, para que ellas pasen al Banco de la Nación Argentina y arbitrar los procedimientos para el inmediato e integral cumplimiento de la legislación vitivinícola existente.

Art. 3º — El Banco Central de la República Argentina convendrá con los ministerios y secretarías de Estado a que respectivamente pertenezcan las entidades nombradas en el presente decreto ley, a fin de que se proceda a la transferencia de las partidas de presupuesto y a la distribución de los empleados pertenecientes a dichas entidades entre los bancos y entidades oficiales también nombrados en dicho artículo 1º.

Art. 4º — Hasta tanto no se dé cumplimiento orgánico e integral a todo lo dispuesto en el presente decreto ley, las entidades enumeradas en el artículo 1º continuarán desarrollando sus actividades conforme a sus respectivas leyes, sin perjuicio de que el Banco Central de la República Argentina siga ejerciendo la superintendencia asignada por el artículo 16 del decreto ley 8.503/46.

Art. 5º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

#### XV — (105-S)

##### DECRETO 15-354/46

#### Acción ejecutiva en los saldos deudores de cuentas corrientes bancarias

Buenos Aires, 28 de mayo de 1946.

*El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,*

DECRETA:

Artículo 1º — Las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimientos del lugar donde se ejercite la acción.

Art. 2º — Incorpórase la disposición precedente al Código de Comercio, la cual deberá insertarse como tercer apartado del artículo 793 de dicho código en la próxima edición oficial que se realice.

Art. 3º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL.

*Amaro Avalos. — Juan Pistarini. — José Humberto Sosa Molina. — Juan I. Cooke. — José M. Astigueta. — Abelardo Pantin. — F. Pedro Marotta. — Felipe Urdapilleta.*

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 1946.

*Oscar E. Albrieu. — Antonio J. Benítez. — José M. Argaña. — Hernán S. Fernández. — Alcides Esteban Montiel. — Benito J. Ottonello.*

En disidencia parcial:

*Arturo Frondizi. — Emilio Ravignani. — Silvano Santander.*

## I N D I C E

	Página
I — 8.503/46 Nacionalización del Banco Central de la República Argentina . . . . .	808
II — 11.554/46 Garantía de depósitos bancarios . . . . .	809
III — 14.957/46 Banco Central de la República Argentina . . . . .	810
IV — 15.561/46 Banco Central de la República Argentina. Modificación del directorio . . . . .	816
V — 14.959/46 Banco de la Nación Argentina . . . . .	816
VI — 14.960/46 Banco del Crédito Industrial Argentino . . . . .	819
VII — 14.961/46 Banco Hipotecario Nacional . . . . .	821
VIII — 14.962/46 Bancos particulares . . . . .	826
IX — 12.596/46 Control de Cambios . . . . .	828
X — 15.347/46 Preatotación de operaciones con garantía hipotecaria . . . . .	829
XI — 15.348/46 Prenda . . . . .	829
XII — 15.349/46 Sociedades de economía mixta . . . . .	834
XIII — 15.350/46 Instituto Argentino de Promoción del Intercambio . . . . .	835
XIV — 15.352/46 Distribución de bienes y documentación de entidades varias . . . . .	837
XV — 15.354/46 Acción ejecutiva en los saldos deudores de cuentas corrientes bancarias . . . . .	837

**Sr. Presidente (Guardo).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital, miembro informante de la mayoría de la comisión.

**Sr. Benítez.** — La comisión encargada del estudio de los decretos leyes ha considerado los relativos a la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, a la nueva carta orgánica, al régimen de los depósitos efectuados por terceros en las instituciones bancarias del país, a las disposiciones reguladoras del funcionamiento e inspección de los bancos, al control de cambios, a la redistribución de las funciones de diversas juntas y comisiones reguladoras y a la creación del Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, y, por el despacho contenido en el orden del día 173, aconseja su aprobación por esta Honorable Cámara.

A las razones expuestas en los informes que constituyen el antecedente inmediato de dichos decretos leyes —informes de extraordinario valor técnico, de agudísima crítica de sistemas, de clarísima exposición de fines y severa enunciación de soluciones— se suman, para acentuar la certeza de su bondad, las enseñanzas de su aplicación en el breve término corrido desde que comenzaron a aplicarse.

Esta aplicación ha convertido en hechos los argumentos, en resultados concretos los cálculos previos, en vida la esperanza. El gobierno de la

revolución invocó ciertos principios, como signos orientadores de su acción: el de nuestra soberanía, el de nuestra democracia, el de la justicia en la vida social.

Pero no era suficiente enunciarlos en el campo teórico, y tratar de mantenerlos en el campo político. Era necesario crear las condiciones, para imponerlas primero, y defenderlas después.

Para que nuestra soberanía, en efecto, sea una realidad, es indispensable que esté en nuestras manos, no sólo aparentemente el gobierno de los medios políticos, sino también el gobierno de nuestra economía, única forma de transformar en efectivo aquella apariencia.

Para que la democracia no sea una mera figura literaria, es indispensable que en lo interno la riqueza de nuestro país no esté dirigida por una clase, sino orientada por el gobierno, que representa y gestiona para todo el pueblo, y para que la justicia sea el ambiente de nuestra vida social es preciso que nuestra economía esté al servicio de todos, procurando un equilibrio en el espacio y en el tiempo para que se conjuguen y no se contraríen los intereses de unos y otros integrantes del grupo social.

A lograrlo tienden los decretos leyes cuya ratificación solicita la mayoría de vuestra comisión, en cuyo nombre informo.

Por primera vez en el país se articulan científicamente tales propósitos, originándose un poderoso sistema de instrumentos de planifica-

ción que permitirá orientar y disciplinar a las fuerzas económicas para que sirvan esa altísima finalidad; colocado muy por encima de cualquier interés privado, responde a conceptos primordiales de democracia económica.

Todos los hombres tienen un legítimo derecho a beneficiarse con una parte de los bienes creados mediante su esfuerzo, por un lado; y por otro, no puede ya reconocerse a los intereses de grupo, de clase o de círculo, el derecho de trabar o sofocar mediante un sistema económicamente creado a su servicio el proceso de acrecentar y desarrollar la masa de bienes y servicios de cuyo uso y consumo depende el mayor bienestar de la colectividad.

Promover y proteger el desenvolvimiento de ese proceso es una obligación primordial del Estado auténticamente democrático, porque el derecho primero en la colectividad es como en los individuos el de vivir y desarrollar dignamente sus potencias de progreso. Y tal derecho podría quedar desmembrado, si no totalmente aniquilado, si se admitiera sin trabarla la coacción del mundo de los económicamente poderosos.

En su mensaje del 29 de abril de 1938 al 75º Congreso de Estados Unidos de Norte América, el entonces presidente de la República, Franklin D. Roosevelt, decía a propósito de la obligación del gobierno de controlar las combinaciones económicas y financieras de los poderosos trusts y cartels que actúan en la producción estas extraordinarias palabras: «Los infaustos acontecimientos del exterior nos han vuelto a enseñar dos simples verdades con respecto a la libertad del pueblo democrático. La primera verdad expresa que la libertad de una democracia no se halla segura si el pueblo tolera el desarrollo del poder privado hasta un grado tal en que ese poder se convierte en más fuerte que el mismo Estado democrático. Esto es, en su esencia, fascismo, propiedad del gobierno por un grupo o por cualquier otro poder privado dominante. La segunda verdad expresa que la libertad y la democracia no se hallan seguras si su sistema comercial no provee ocupación y produce y distribuye los productos en forma tal que sustente un standard de vida aceptable. Y ambas lecciones nos han tocado directamente».

El reconocimiento de esas verdades, que lo son también para la República Argentina en la hora actual, confiere muy alto valor a la finalidad fundamental de estas medidas que los decretos leyes persiguen, y contra las cuales no hay objeciones atendibles que puedan serles opuestas, porque ellas están imperativamente ordenadas en nuestra Constitución, cuando manda promover el bienestar general.

La Argentina no hace sino tomar las previsiones que adoptan desde algún tiempo atrás todos los gobiernos que gestionan con eficacia

los intereses de sus pueblos: defiende su patrimonio, comienza a realizar un esfuerzo leal e inobjetable, orden sus recursos, crea órganos que formulen y ejecuten los planes de acción económica y reclama, como debe, la comprensión y el apoyo de los hombres y países de buena voluntad hacia esta honrada tentativa de organización de la riqueza humana y material de que dispone.

Reclama y entrega a manos exclusivamente nuestras el ejercicio de los altos poderes que la Constitución acuerda para fijar y realizar nuestra política monetaria, económica y financiera; en la convicción de que estas facultades, por ser integrantes del concepto de soberanía, no han podido colocarse, ni siquiera en parte, en manos extranjeras, como en el hecho lo consagraba la ley creadora del Banco Central de la República.

No vemos con recelo ni juzgamos con parcialidad la intervención —en valores materiales o humanos— del extranjero. ¡Qué hemos de verlo y juzgarlo así, si los brazos de los hombres que vinieron de afuera han abierto buena parte de los surcos de nuestra tierra y el capital foráneo ha afrontado en alta proporción nuestras primeras empresas financieras!

Pero una cosa es recibirlos con alegría e incorporarlos con leal espíritu de solidaridad a nuestra vida de Nación independiente, y otra, muy distinta, declinar en ellos atributos propios de nuestra soberanía, sobre todo si los ponemos en manos, no de quienes están aquí trabajando, incorporándose a nuestra Nación, sino de quienes se hallan afuera y sólo han enviado sus capitales para aprovecharse de nuestra soberanía y someterla a los intereses financieros internacionales.

En el dilema —sencillo, pero profundo, porque condensa la tragedia de nuestra soberanía o de nuestro subyugamiento— de ser gobernados, en todos o en algún aspecto de nuestra vida de Nación, por los intereses extranjeros o por los intereses nuestros, preferimos lo último, aun a costa de algún error técnico, de algún tropiezo.

Tendremos siempre tiempo de componer nuestros yerros en la marcha, de excusarnos con sentido fraterno nuestras recíprocas equivocaciones, continuando día a día en la lucha esperanzada que nos conduzca a integrar una unidad económica que acuerde a nuestra patria también en este aspecto un solo perfil.

Somos ya una sola mentalidad, un solo impulso generoso, un solo concepto político. El fervor por nuestra tierra enciende nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestra democracia. ¡Que también ilumine la realización de una ordenación económica, que igualmente reclama estar envuelta en el azul y blanco de nuestra bandera. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Eso es lo que queremos, con sencilla, pero hondísima inspiración patriótica. Reclamamos para ella, de nuestros contrarios, juicio imparcial, desapasionado, y la más viva comprensión fraterna.

Todos los países del mundo trabajan hoy con redoblado ardor para estimular su potencial económico. Se reconocen las ventajas sociales y políticas de la industrialización como medio de incrementar el intercambio, elevar el nivel de vida de los pueblos y aprovechar mejor sus recursos naturales y humanos. Y más todavía: se ha considerado —así lo declara la Carta Económica de las Américas— que es un factor importantísimo para evitar una nueva guerra, el cumplimiento de las aspiraciones fundamentales que aseguren a los pueblos su derecho natural a vivir decorosamente, trabajar y realizar el intercambio de sus productos en paz y con seguridad. Pero, para un esfuerzo de tal magnitud, el punto de comienzo no consiste en la enunciación de perspectivas brillantes, sino en un inteligente planteo de las etapas a recorrer y en una cuidadosa selección de los medios idóneos para alcanzar los fines propuestos.

El desenvolvimiento económico depende aún y continuará dependiendo dentro de un sistema político como el nuestro, de la eficiencia de la empresa privada, de la actividad particular. Pero esa eficiencia se vincula a diversos factores, uno de los cuales, el crédito, es de trascendente gravitación.

A través de él puede actuarse en sentido estimulante o depresivo sobre todos los negocios de la colectividad. Y es indudable que los bancos constituyen en nuestro medio los principales dispensadores del crédito y cumplen, por consiguiente, una función de extraordinaria gravitación, porque está en sus manos, según la política económica que sigan, el desarrollo o la declinación de las actividades económicas de la Nación.

Hasta los decretos leyes sometidos a la consideración de vuestra honorabilidad por el Poder Ejecutivo, el Estado, no obstante esta función trascendental del crédito dentro del desarrollo de la economía nacional, no habría traspasado ni menos cumplido una política general en la materia. Sólo se apreció un aspecto: el de provecho financiero de las inversiones, sin el menor cuidado de la repercusión económica de los créditos. Se consideró —con ingenuidad o mala fe— que el interés de los bancos proveedores de créditos coincidía siempre con el de la economía colectiva, olvidando que aquéllos están movidos por un interés particular, que sólo busca un beneficio también particular, y que el otro, por el contrario, es un interés colectivo, que constituye la contraparte natural del primero.

Consecuencia de tal consideración es la libertad completa que se acordó a las instituciones bancarias.

Ya se sabe, sin embargo, lo que significó para el país. En 1935 hubo que borrar esa creencia y purgar con millones de pesos —con los muchos millones de pesos que se sumieron en el mar sin fondo del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias— el pecado de ingenuidad cometido por quienes cerraban sus ojos a la realidad, escuchando el canto de sirena de los intereses financieros. Y hubo que tirar esos millones al fondo del mar, hubo que revaluar el oro para malgastar esos millones, y hubo que aprobar a toda marcha las leyes sobre bancos y monedas presentadas en 1935, al solo objeto de atenuar el tremendo colapso que produjo esa situación, hija de aquella creencia.

De esas leyes nació el Banco Central; pero su acción en materia de orientación creditoria iba a ser, como fué, muy poco notable. Baste recordar que, por una parte, los propios bancos de préstamos eran sus accionistas e influían, desde luego, en sus decisiones; y, por otra parte, se carecía de facultades para que los bancos obedeciesen sus indicaciones.

Esto explica por qué, como paso primero y fundamental de los planes de reactivación económica, se dictaron los decretos leyes que nacionalizaron el Banco Central, definieron el régimen de los depósitos y los requisitos para su inversión y, en general, ordenaron sobre bases más severas, todo el sistema bancario argentino.

Las previsiones del plan no se limitan, sin embargo, al solo campo de los bancos y el crédito, en su función de elementos de la producción. Una comprensiva inteligencia de los hechos y formas del comercio internacional ha aconsejado no descuidar el empleo, a menudo antieconómico, de las divisas disponibles. De ahí la disposición por la cual se atribuye al Banco Central las funciones de control de cambios, cuyo discreto manejo es de todo punto de vista indispensable para evitar que, por obra de una intencionada competencia, con vistas al ulterior dominio del mercado argentino, se ocasione el derrumbe de muchas actividades esenciales para la promoción y para evitar también la inmoderada dilapidación de esas divisas en el pago de bienes de consumo que el país necesita mucho menos que los bienes de capital.

El conjunto de las medidas que se vienen examinando constituye, desde otro punto de vista, un arma equilibradamente calculada para proteger a la economía de los contragolpes de eventuales crisis.

No sería sensato dejar de advertir que si bien el país está viviendo un momento de bonanza, no se halla enteramente a salvo de verse

mañana confrontado con dificultades serias, según sea el rumbo que tome el comercio internacional y la posición monetaria de los países a quienes la República Argentina está vinculada por un alto volumen de intercambio. Ha sabido la Nación, con incontables esfuerzos y sacrificios, sobreponerse a las serias repercusiones derivadas de la última guerra. Pero es un hecho notorio que el largo, devastador conflicto, ha promovido alteraciones, en escala hasta ahora sin precedentes, en la economía de casi todas las naciones. No se puede conjeturar razonablemente cómo puedan influir en el futuro esas alteraciones profundas —en sentido favorable o desfavorable— sobre las relaciones comerciales de esos países con la Argentina.

Entretanto, la experiencia aconseja fortalecer nuestra estructura económica, y aprovechar, en la mayor medida posible, los recursos humanos y materiales que constituyen el patrimonio argentino.

Pero todo este razonable propósito de buen gobierno podría verse entorpecido o frustrado por los eventuales efectos que, sobre nuestro país, tengan las medidas económicas que dicten los demás, o por el efecto de severos contrastes en nuestras cosechas, de disminución en el rendimiento de otros sectores de la producción, o de otros factores adversos e imprevisibles.

El economista, tanto como el hombre de Estado, no puede ignorar que el mal profundo del sistema capitalista bajo cuyo signo se desenvuelve nuestra economía consiste en la desesperante sucesión de ciclos con fases alternantes de prosperidad y depresión. Lo único que cabe decidir, frente a la alarmante periodicidad de estas fases, es si el Estado —cuya misión tutelar de bienestar colectivo no puede ponerse en tela de juicio— debe esperar a que la tormenta se desencadene para entrar en acción, o debe prepararse por anticipado para cuando la catástrofe se presente, obrando en forma tal que, previstos los riesgos a soportar, puedan atenuarse los efectos del siniestro eventual.

Hasta no hace mucho se aceptaba como exacta la primera postura. Cuando el abuso del crédito, los excesos en la competencia, las maniobras desenfrenadas de la especulación, los arreglos y combinaciones monopolistas y el auge financiero desembocaban en una fase depresiva, se reclamaba de los gobiernos medidas drásticas para conjurar la crisis: obras públicas en vasta escala, moratorias bancarias, devaluación de la moneda, subsidio a los desocupados, compra y destrucción de excedentes. Todo paliativo parecía útil para sacudir el marasmo económico. Una considerable pérdida de valores y un profundo malestar social han sido siempre la secuela lamentable de este equivocado modo de obrar.

Hoy no se concibe tal cosa en un Estado moderno, asentado sobre bases democráticas. Su

deber, por el contrario, consiste en prevenir, en colocar en primer plano la considerable fuerza de su intervención como factor anticíclico, en empeñarse en crear circunstancias adecuadas para actuar a tiempo y con tiempo, con ánimo de lograr un tipo de desenvolvimiento económico uniforme con las posibilidades y modalidades del país.

Los decretos leyes cuya aprobación solicitamos de vuestra honorabilidad constituyen un sistema coherente y técnicamente articulado con tal ajuste, que debe considerárselo expone de la madurez alcanzada por el pensamiento económico argentino. Por eso creemos inoportuno introducirle modificaciones —salvo una de detalle a que me referiré más adelante— que podrían entorpecer su eficacia.

Me referiré sucintamente a los más importantes de ellos

a) *Decreto ley 8.503, sobre nacionalización del Banco Central de la República Argentina.*

Como ya lo hice notar, las importantes leyes de 1935 sobre crédito y moneda, si bien significaron en su obra un indudable paso adelante, no dieron al Banco Central la estructura adecuada para cumplir con plenitud la alta función de director de nuestra política en materia de crédito y de moneda.

Tanto su constitución como su carácter —definido en un fallo de la Corte Suprema como el de una «empresa bancaria mixta y sui generis»— le conferían una naturaleza híbrida o heterogénea, no obstante ser el más importante instituto monetario y financiero del país, el custodio del valor de su moneda, el depositario de la reserva metálica, el asesor financiero del gobierno, el fiscalizador del desenvolvimiento y liquidez de todos los demás bancos y el orientador, en fin, de la política monetaria, a cuyo través se imponían normas y condiciones a la política económica del Estado.

Cuesta creer, cuando se examina la profunda significación económicosocial de las destacadísimas funciones del Banco Central, que ellas pudieran haber sido confiadas y delegadas a un instituto de índole tan particular, gobernado en los hechos por los intereses privados y no nacionales. No es raro, pues, que en más de una ocasión haya podido notarse un franco y peligroso divorcio entre la política económica del Estado y la política monetaria y bancaria llevada a cabo por el Banco Central, con todos los inconvenientes y obstáculos que de tal estado de cosas derivaban, analizados con sobria precisión y riguroso método en la exposición de motivos dada al expedirse el decreto de nacionalización 8.503/46.

Por otra parte, la experiencia recogida en la aplicación de la legislación de 1935 demostró falta de elasticidad en el mecanismo del redes-

cuento, ineficiencia en la regulación del volumen de los medios de pago, despreocupación por la situación y necesidades de los bancos oficiales e insuficiente protección del depositante y falta de aptitud para seguir de cerca la evolución de nuestro mecanismo productor y estimular nuestro pujante desarrollo industrial.

Si de la observación de sus resultados en el orden interno, pasamos al de su actuación en el plano de las relaciones internacionales, ninguna duda puede caber acerca de la necesidad de nacionalizar el Banco Central de la República Argentina.

En efecto, la planificación internacional en materia financiera, económica y monetaria, por cuyo medio propenden hoy todos los países a una más íntima vinculación de las economías nacionales, exige dentro de cada Estado una creciente centralización de las referidas funciones y de los organismos a quienes compete estudiar y llevar a buen término las medidas de orden económico y monetario que resulten de los compromisos y contactos internacionales que la Nación asuma o establezca, según el caso, tendiendo a su propio desarrollo y a la incrementación del intercambio.

Esa centralización de funciones y de organismos no existía en la legislación de 1935, pero ha sido plena y acertadamente lograda en las disposiciones que sistematizan el régimen de los decretos números 8.503/46, sobre nacionalización del Banco Central de la República Argentina, y 14.957/46, relativo al ejercicio de sus funciones como entidad autárquica nacional.

Las disposiciones de estos decretos leyes permitirán al Banco Central desarrollar, tanto en lo interno, como en lo internacional, una amplia, firme y provechosa política monetaria y financiera, que actúe como estímulo y resguardo eficaz de la actividad económica de la Nación.

Por eso, su nacionalización ha sido sin duda la decisión más trascendental del gobierno de la revolución, para asegurar el futuro económico del país, y para defender sus riquezas frente a las contingencias del mundo de la posguerra.

Por eso aconsejamos a vuestra honorabilidad la ratificación de los decretos leyes números 8.503, 14.957 y 15.561.

*b) Decreto ley 11.544, sobre régimen legal de los depósitos bancarios.*

Este decreto ley, por el cual la Nación Argentina garantiza todos los depósitos de terceros en los establecimientos bancarios del país, y somete a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina el empleo de esos depósitos, constituye la innovación de más crecida importancia y originalidad —quizá única en el mundo— entre las varias que integran la materia de la reforma bancaria sometida a

la consideración de vuestra honorabilidad. Esta comisión ha considerado atentamente las cuestiones realizadas en el referido informe del Poder Ejecutivo que lo precede, el que constituye, a su juicio, la mejor exposición de motivos que puede ofrecerse sobre él.

Luego de un examen sobre las causas que determinaron la congelación bancaria anterior a 1935, se examina en el referido informe el costo de la transformación que en ese año se introdujo en el sistema bancario y cuya condición indispensable fué, como es sabido, el justiprecio del oro y la creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, para desembarazar el sistema bancario argentino de las perturbaciones producidas por el hecho de que hasta entonces los bancos disponían a su solo arbitrio la inversión de los depósitos.

Desde 1935 quedó incorporado a nuestra legislación el principio de que la función de los bancos comportaba una evidente responsabilidad pública, responsabilidad que se consagra en la denominada ley de bancos, número 12.156, como un complemento indispensable para articular las atribuciones del Banco Central, que nació en esa misma fecha. Se tuvo en cuenta que, además de ser establecimientos de crédito y depósitos, los bancos desempeñan una función monetaria, porque cuando otorgan sus préstamos crean depósitos que al moverse activamente por los cheques que contra ellos se giran, desempeñan la misma función monetaria que los billetes y tienden a sobrepasarlos en importancia.

Por eso es que, como se declara en el aludido informe, recibir los fondos que la población deposita en los bancos y emplear esas sumas en conceder créditos y realizar inversiones diversas, recogiendo de ello importantes ganancias, es en verdad algo muy parecido a un privilegio que sólo puede ser admitido como una muy especialísima concesión de la autoridad pública, bajo severas condiciones de vigilancia y control ejercidas por el Estado como intérprete del interés general de la colectividad.

La insuficiencia de las leyes de 1935 para proteger adecuadamente a los depositantes quedó evidenciada por la circunstancia de que, a pesar de las prohibiciones establecidas en la vieja ley de bancos en materia de inversión, a pesar de las disposiciones sobre efectivo mínimo, y a pesar, finalmente, de la fiscalización atribuida a la Inspección de Bancos, la protección individual de los ahorristas en caso de liquidación solamente consistía en un privilegio limitado a la suma de cinco mil pesos, privilegio de rango inferior a los establecidos en las leyes comerciales. Vale decir que, o no se estimó posible proteger a los depositantes de un modo más amplio y completo, o se subestimó la importancia social del ahorro y del depósito bancario común.

Por otra parte, era previsible, y así ocurrió en la realidad, que el Banco Central no alcanzaría

con las disposiciones de la vieja ley el importante objeto de regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios.

De otro lado, la decisión de otorgar la garantía de la Nación a todos los depositantes, y la correlativa exigencia de que en su virtud los depósitos no pueden ser invertidos sino contra autorizaciones del Banco Central, reconoce otra razón no menos importante que las analizadas aquí y es la que toma en cuenta la conocida influencia de la crisis sobre los bancos y el modo como ordinariamente estos establecimientos se comportan en los momentos de depresión económica. En efecto, una vieja experiencia mundial demuestra que en cuanto aparecen síntomas leves de perturbación, se origina en el público una corriente de temor traducida en un intenso y rápido drenaje de los depósitos bancarios. Hoy se estima, y con razón, que el correctivo clásico para estas emergencias —el redescuento de las carteras bancarias en los bancos centrales— no es sino un remedio de muy cortos alcances, incapaz de impedir, a poco que persistan los efectos depresivos, el planteo de esta terrible alternativa: la crisis plena, con su cortejo de liquidaciones ruinosas y la pavorosa consecuencia de la desocupación o el emisionismo franco que devalúa todo el dinero en manos del público y de los bancos y violenta a niveles extraordinarios los precios de todos los bienes.

Se ha estimado que rodear de plena seguridad legal a todos los depósitos bancarios comporta no sólo crear condiciones óptimas, desconocidas hasta ahora en el país y en el mundo, susceptibles de contribuir grandemente a reforzar la solidez de nuestro sistema bancario en momentos de crisis, sino, además, organizar un valioso instrumento de política monetaria que permitirá con admirable justeza regular de modo efectivo la cantidad de crédito y de medios de pago conforme al volumen real de los negocios.

La mecánica del sistema está perfectamente señalada en los capítulos de la exposición del Poder Ejecutivo, que versan sobre: «La liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario», «La regulación de la cantidad de crédito y de los medios de pago conforme al volumen real de los negocios», «La política del crédito bancario» y «Los bancos y el nuevo ordenamiento: la cuestión constitucional.»

La mayoría de la comisión hace suyos todos los términos de la referida exposición de motivos, como ampliación de este informe, y solicita, por consiguiente, su inclusión en el Diario de Sesiones.

#### c) Decreto ley 14.962 - Nueva ley de bancos.

La modificación de la antigua ley de bancos 12.156, es una consecuencia de la nueva fisono-

mía jurídica del Banco Central y del nuevo régimen a que están sometidos los depósitos bancarios.

El sencillo modo establecido en resguardo de los depositantes, ha vuelto innecesarias las escalas y proporciones limitativas que la anterior ley fijaba para la inversión de los depósitos. Los inconvenientes advertidos en la práctica, por su falta de elasticidad, han quedado salvados en el nuevo sistema.

La ley no modifica absolutamente las actividades propias y comunes de los bancos. Pero, en cuanto a las personas comprendidas en sus alcances, agrega la nueva facultad del Banco Central de trazar las normas a que debe ajustarse la constitución y funcionamiento de ciertas entidades, que sin ser bancos, reciben fondos de terceros y los invierten en préstamos. Soluciona, también, el conocido punto relativo a los bancos extranjeros que en algunos casos no mantienen en el país sus capitales de constitución. Y fortalece, finalmente, las funciones de control, inspección y liquidación de los bancos, siguiendo muy de cerca el sistema establecido por la ley 12.156. Las escasas variantes que se introducen en esta materia están todas ellas fundadas en la experiencia, recordada, de la fiscalización cumplida en el último decenio. Se ha cuidado, especialmente, el detalle de hacer más estricta la confidencialidad de las informaciones que se recogen en esos establecimientos.

Como los bancos, por vía del redescuento de sus carteras, se convierten en deudores del Banco Central, en resguardo del interés de este último, se ha establecido la prohibición para aquéllos (artículo 5º) de emitir debentures, cambiar el destino de los fondos que les entrega el Banco Central, otorgar fianzas o contraer compromisos que puedan afectar apreciablemente su patrimonio, acordar a algunos de sus acreedores privilegios o preferencias sobre todo o parte de su activo y utilizar créditos en otros bancos o en las instituciones autorizadas a recibir depósitos, según las disposiciones del artículo 20 del mismo decreto ley.

#### d) Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

El decreto ley 15.350 del 28 de mayo de 1946, por el que se crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, como entidad autárquica, con funciones técnicas y eminentemente comerciales, coordina dentro de una nueva estructura la acción de fomento de los negocios de importación y exportación que se venía cumpliendo, hasta ahora, por variados medios y a través de diversos organismos.

Si se aspira a que el intercambio produzca el máximo provecho para los intereses económicos del país, debe actuarse en beneficio, no sólo de

algunos, sino de todos los sectores económicos de la producción. Pero esta finalidad sólo puede ser lograda mediante la actuación directa del Estado por medio de un instituto único que centralice las funciones específicas de las diversas juntas y comisiones que han venido creándose en el último decenio y a las cuales, por razones de coordinación funcional y de bien entendida economía administrativa, se resolvió someter a la superintendencia del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con las disposiciones del decreto de nacionalización número 8.503/46, artículo 16.

Con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el país incorpora a su organización económica una entidad comercial de fomento, regulación y previsión, que permitirá alcanzar una serie de objetivos de capital importancia. Su actividad resultará de particular interés para asegurar la más ordenada y económica reposición de capitales consumidos durante la guerra, tanto en maquinarias como en reservas, y para proveer a la industria argentina los equipos y materias primas necesarios, a fin de obtener su máximo y más perfecto rendimiento. De no menor interés resultará contar con un órgano que, prescindiendo de las finalidades puramente lucrativas, que están en la base de las empresas comerciales privadas, tenga facultad y medios financieros y técnicos que le permitan almacenar, para su oportuno transporte y realización, los productos naturales de nuestro suelo y los artículos elaborados por nuestra actividad industrial, evitando que su comercialización apresurada provoque descensos perjudiciales en el nivel de precios, o sea materia de especulaciones que dañan siempre la economía de productor modesto.

**Sr. Zara.** — ¿Podríamos saber qué utilidades ha obtenido el Instituto de Promoción del Intercambio con la comercialización de los cereales?

**Sr. Benítez.** — Ya le vamos a informar sobre la intervención que ha tenido el instituto y los beneficios obtenidos desde la fecha en que comenzó a funcionar hasta la actualidad.

**Sr. Zara.** — Ya que actúa sin fines lucrativos, sería interesante saber cuánto ha ganado o perdido.

**Sr. Benítez.** — Actúa sin fines lucrativos; actúa con fines de provecho general, que no son fines lucrativos, salvo que en opinión del señor diputado sea un fin lucrativo el interés de la colectividad.

**Sr. Zara.** — No se ha tratado del interés de la colectividad; el interés ha sido del fisco.

**Sr. Benítez.** — No; de la colectividad. El fisco no existe como entidad separada de la Nación. El Estado es el órgano de la Nación. Cuando el Estado obtiene provecho, no lo obtiene para sí, sino para la República.

**Sr. Zara.** — Hasta ahora no hemos podido saber en qué se han invertido los fondos obtenidos en 1945.

**Sr. Benítez.** — Si el señor miembro de la minoría interpela al ministro de Hacienda, éste podrá informarle cómo han sido invertidos los fondos.

**Sr. Ravignani.** — Nos manda a una situación ilusoria.

**Sr. Zara.** — Es ilusoria, porque el señor ministro ha estado aquí, y no nos ha informado.

**Sr. Benítez.** — El señor ministro dió las informaciones que se le solicitaron. Creo que si se le solicitan más informes, los suministrará.

**Sr. Santander.** — Lo único que prometió el señor ministro es que la diferencia de esas sumas iban a retornar a manos de los productores; pero hasta ahora no ha sido así.

**Sr. Benítez.** — No beneficiará a determinados productores, pues el interés de la República es uno y no puede dividirse en secciones.

El provecho que ocasionalmente pudiera lograr por las alternativas de los períodos de crisis y de depresión, uno de los factores de la economía, se distribuye entre todos o se conserva para el momento en que toda la economía deba soportar las consecuencias de una época de depresión.

**Sr. Ravignani.** — Eso es muy elástico y vago.

**Sr. Benítez.** — El gobierno de la Nación, mientras cumple estos propósitos, va concretando día a día los principios que al señor diputado se le ocurren vagos o elásticos.

**Sr. Zara.** — Ya vamos a ver el proceso de la economía argentina en beneficio exclusivo del fisco.

**Sr. Benítez.** — No tengo duda de que el señor diputado, que es muy inteligente, sabrá verlo en beneficio del país.

**Sr. Zara.** — Es cuestión de razones, no de inteligencia, Nosotros vamos a dar razones.

**Sr. Benítez.** — Continúo, señor presidente. Como consecuencia de la guerra, los más importantes países del mundo han sufrido graves daños en su economía interna y presentan una notable disminución en los índices de producción. La República Argentina es una de las pocas naciones que ha escapado a esta consecuencia y no ha sufrido deterioros irreparables en su mecanismo productor.

Ha ocurrido que numerosos artículos de primera necesidad, que casi no tenían mercado en el mundo por las dificultades que la guerra suponía para su transporte y distribución, están solicitados desde todos los ángulos. No hay nación casi que no haya destacado o esté por destacar una misión a nuestro país, que persiga asegurarse su provisión en alta proporción y por un largo período. La presión de estas demandas sobre nuestras limitadas existencias, se traduce en una insostenible elevación de los

precios. A poco de continuar este proceso, no sólo quedaríamos privados en absoluto de nuestros márgenes exportables, sino aun de lo que es indispensable para la vida de nuestro pueblo. Y todavía esto a precios prohibitivos. Es la causa más inmediata y más trascendental en el proceso de la inflación.

El único remedio consiste en la nivelación de la oferta de bienes con la demanda de bienes; pero para lograrlo sería preciso el aumento instantáneo de nuestras importaciones. Ambas cosas son difíciles de conseguir de inmediato.

No habrá aumento de producción mientras no podamos obtener maquinarias e instalaciones para reponer nuestros gastados equipos industriales y para ampliarlos en una gran medida. Tampoco puede pensarse en aumentar nuestras importaciones mientras los países productores no vuelvan a alcanzar los niveles de producción que tenían en los momentos de preguerra; y es cosa obvia, de puro evidente y conocida, que están aún muy lejos, pero muy lejos, de llegar a esa meta.

Así, pues, el remedio indudable contra la inflación no se halla por ahora a nuestro alcance, sin perjuicio de las medidas que están siendo adoptadas para promover mejores condiciones para el futuro inmediato. Pero sí está a nuestro alcance el impedir con otras medidas reguladoras, las complicaciones anormales del proceso y sobre todo, aquellas que más inciden en el costo de las subsistencias de primera necesidad y que más desorganizan las condiciones de nuestro mercado interno.

Esta función reguladora de alta finalidad económica, es la función propia y principalísima del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. La comisión aconseja, sin embargo, la modificación del artículo 9º en el sentido de aumentar en uno el número de directores, incorporando uno en representación del Ministerio de Agricultura de la Nación.

Dije ya al comienzo que los decretos leyes, cuya ratificación solicitamos de vuestra honrabilidad, integran en cuanto un sistema o instrumento de gobierno económico. Su unidad y, por consiguiente, su eficacia, sufrirían si se introducen en él alteraciones que trastornarían su eficacia. Por eso, —en la convicción de la noble inspiración con que han sido concebidos y de la eficiencia técnica con que han sido realizados— impetramos de esta Honorable Cámara su ratificación en bloque con la única modificación a que me he referido. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Guardo).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. Santander.** — Creo que estos decretos leyes —como lo ha sostenido el señor miembro informante de la mayoría de la comisión— constituyen los actos más trascendentales del

gobierno de la revolución. Y veo, señor presidente que en esto, porque así conviene al cambio de la arquitectura económica bancaria y fiscal, el gobierno actual lo sigue al gobierno defacto. Esto en cierto modo, acusa un progreso que yo tengo el deber de mencionar, pues hasta ahora, todos han abjurado de la labor del gobierno defacto.

El Poder Ejecutivo anterior al promover estas reformas al régimen monetario y económico, parte de una premisa falsa: sobreestima con exageración la gravitación económica y financiera de nuestro país en el mundo, para colocarlo al mismo nivel de los países que han alcanzado un gran desarrollo industrial, económico y financiero. No nos situamos dentro de nuestra realidad histórica, y de ahí que lleguemos a toda clase de desatinos teóricos y prácticos. En los mismos vicios ha caído el miembro informante de la mayoría, y he de rebatirlo a través de mi exposición.

Si el complejo de inferioridad es un sentimiento deplorable que debe ser superado, el extremo opuesto, esto es, la valorización exagerada de la propia potencialidad, podrá servir para halagar el orgullo nacional, pero su peligrosidad es evidente, porque nos crea un falso panorama.

Considero que debemos recobrar el equilibrio y el sentido real de nuestra dimensión, especialmente cuando se encaran soluciones que comprometen la vida de la Nación en sus múltiples aspectos. Se ha llegado a esa deformidad con motivo de las reformas que se han introducido en el andamiaje económico del país y financiero del Estado.

Para llegar a la justificación de esta premisa, se ha utilizado un procedimiento muy conocido cuando se intenta destruir alguna cosa. Se ha procedido de una sistemática campaña de desprestigio contra el Banco Central, ya sea contra los funcionarios que tenían la responsabilidad de su dirección o ya denunciando una presunta o real ineficiencia de sus funciones.

En torno a la creación y acción desarrollada por el Banco Central, se han hecho reparos de toda índole, presentándolo poco menos que como una entidad creada ex profeso para conspirar contra los intereses del país y hasta de su propia soberanía. El señor miembro informante de la comisión ha ratificado estos conceptos.

Para demostrar la imparcialidad de nuestro juicio, debemos decir que esta institución no ha estado ligada al partido que represento, ni a ninguno de sus hombres representativos. Más todavía: cuando se hizo la reforma del año 1935, teóricamente la Unión Cívica Radical combatió todo ese plan.

Sin embargo, poco tiempo después de producirse el último conflicto bélico todos hemos debido admitir su eficacia en la preservación del sistema bancario y crediticio. Sin esta ins-

titución nos hubiéramos encontrado desguarnecidos como nos encontramos en la otra guerra. La institución habrá tenido o no defectos de organización, habrá necesitado o no reajustes en su funcionamiento para adaptarla a las nuevas exigencias; pero deberá admitirse que solamente a través de la misma el actual Poder Ejecutivo puede ejercer hoy el monopolio del crédito llegando a su total nacionalización. Con ello se reconoce implícitamente su utilidad.

Para justificar la nacionalización se invocan muchas razones, entre ellas, la necesidad y conveniencia de una mayor producción, crear condiciones económicas y monetarias, una política monetaria coherente con la economía. Además, se señala que el sistema actual lo dificulta, porque es mixto y sui generis y porque para garantizar su autonomía no es suficiente la intervención del interés privado, porque la soberanía nacional debe ser preservada a través de ese establecimiento oficial.

Sobre las nuevas orientaciones económico-monetarias impresas al Banco Central, en el curso de mi exposición indicaré cuáles son, a mi juicio, las verdaderas razones a que obedecen. Sólo me limitaré a expresar ahora que, a juzgar por esta argumentación, resultaría que todos los países que no poseen bancos oficiales no cuidan su propia soberanía, y se silencia que nosotros hemos contado con bancos oficiales: éste, de tipo sui generis, y el Banco de la Nación Argentina, prestigiosa institución que muchas veces ha salvado a la economía del país.

**Sr. Díaz de Vivar.** — ¿Me permite, señor diputado?

Quería preguntar al señor diputado si advierte una diferencia entre los países de economía colonial y los países que han realizado una economía de tipo imperialista. Hay una diferencia fundamental.

**Sr. Santander.** — Existe, en efecto; pero me permito recordarle que el reciente cambio producido precisamente en Inglaterra, al nacionalizarse el banco, está diciendo con toda claridad que a medida que se avanza, como cosa natural, se puede llegar a establecer innovaciones como éstas. Ya se ha recorrido un tramo que puede ser aleccionador. En cambio, nosotros recién comenzamos. Le voy a demostrar al señor diputado, si tiene la paciencia de escucharme, que no existía ningún peligro de orden interno o externo para dar a la nacionalización una expresión extremadamente dramática, como lo han hecho los señores diputados.

**Sr. Díaz de Vivar.** — Yo me permito disentir fundamentalmente.

**Sr. Santander.** — Lo lamento. Uno de los argumentos efectistas que se han hecho es que en el antiguo Banco Central tenían predominio en su dirección los bancos extranjeros, y no es así.

El artículo 12 de la ley de su creación contemplaba una medida de seguridad para que así

no ocurriera. Sobre doce directores dos eran extranjeros, y en ningún caso podían ser más de tres. Aun más: por el artículo 13 los representantes de bancos extranjeros no podían ser reelectos de un período a otro.

**Sr. Benítez.** — Nuestros bancos en la Argentina son todos sociedades anónimas y están dirigidos por capitales extranjeros. Son estos capitales los que imponen las directivas. Aun nuestro Banco de la Provincia está dirigido por capitales norteamericanos, cuyas decisiones en el Banco Central no estaban dictadas por nuestro interés, sino por el de los accionistas, que eran extranjeros.

**Sr. Santander.** — Estamos hablando del Banco Central y no de capitales extranjeros.

**Sr. Benítez.** — Yo he afirmado que en el hecho estaban regidos por intereses particulares extranjeros. Me ratifico en esa afirmación, porque los accionistas de todos los bancos son particulares y en su mayoría extranjeros. Son esos accionistas los que en verdad manejan a su voluntad a las sociedades anónimas. Aunque sus mandatarios fueran argentinos, en el hecho la voluntad era de los particulares extranjeros.

**Sr. Santander.** — Extendiendo ese concepto toda la economía del país estaría en la misma condición.

La nacionalización del Banco Central hubiera sido una medida intrascendente si se hubiera limitado a privarlo del carácter mixto que revestía, para convertirlo en una dependencia del Estado.

El problema de nacionalizar o no al Banco Central no ofrece, como he dicho, las características dramáticas que se han querido dar entre nosotros. Esto parece un juego de palabras. Es el mismo caso de la extinción de la deuda externa, con las particularidades naturales de uno y otro asunto.

Se usa y abusa del verbo nacionalizar, porque tiene, evidentemente, un gran poder de seducción popular; pero en el caso del Banco Central no hay tal nacionalización, sino, pura y simplemente, una subordinación al gobierno nacional. Sería el complemento de la voluptuosidad de mando que se observa en todas las actividades del país, con un agravante: esta vez se trata del monopolio de toda la economía.

Un estudio de la materia, que no es extranjero; que es un ilustre catedrático de la Universidad de Córdoba, con toda exactitud define lo que ha acontecido entre nosotros. Dice el doctor Carranza Pérez, en una conferencia que diera sobre algunos aspectos del nuevo ordenamiento bancario en la República, lo siguiente: «Lo que se ha hecho es estatizar el instituto, convirtiéndolo en una repartición del Estado. Pero a la inversa de lo acaecido en Inglaterra y Francia, donde el Banco Central ha quedado sujeto a las directivas del Ministerio de Hacienda —con los controles naturales, aun legislativos, agre-

go yo—, en nuestro país se lo ha convertido en un superorganismo dotado de grandes poderes, y con jurisdicción sobre una gran cantidad de instituciones y juntas, suplantando en cierto modo a los ministerios de Hacienda y Agricultura.» Tan exacta es esta definición, que el propio miembro informante se preocupa de la falta de representación del Ministerio de Agricultura y ha de proponer que se le acuerde en el directorio del Banco Central, cuando se discute en particular.

Como complemento de este juicio tan exacto, he de repetir palabras de un prominente estadista francés, André Phillip, que vienen también al caso: «Diciendo nacionalización —afirma— yo no quiero decir estatización. Nada más peligroso que una banca central sometida al Ministerio de Finanzas». Aquí ni siquiera está sometida al Ministerio de Finanzas. «Es indispensable —agrega—, que esta institución permanezca absolutamente independiente del gobierno— aquí se la subordina totalmente al gobierno—, pues son frecuentes los antagonismos de intereses entre ambos». Y añade que la gestión de la banca central debe ser confiada a un consejo nacional económico que represente el conjunto de las fuerzas del país.

La nacionalización del Banco Central en sí, carece de importancia, y no tiene la trascendencia revolucionaria que se le ha querido dar, pues el control del Estado en la materia, siempre se ha ejercido de acuerdo a la ley orgánica de bancos.

La política monetaria la fijaba el gobierno por medio de instrumentos legales que son susceptibles de mejorar o de derogar. Si el sistema creado no produjo ninguna perturbación y no se cernía ninguna amenaza sobre las consecuencias de esa política ¿por qué este cambio y esta transformación?

Pero el hecho alarmante es que, correlativamente a su nacionalización, se han introducido reformas de tales proyecciones para el futuro económico del país, que escapan a toda previsión.

No debemos llamarnos a engaño: la nacionalización del Banco Central lleva implícita la facultad discrecional de conferir a los funcionarios encargados de su dirección el control del monopolio del crédito sin limitación alguna, para movilizar los depósitos bancarios, intervenir como gestor industrial y comercial y dirigir prácticamente toda la economía nacional.

Esto será la antesala y la despensa del «plan», que tanto entusiasmo a los señores diputados, y cuyos imitadores, según se ha afirmado clamorosamente, ya hemos encontrado hasta en la vieja Inglaterra.

Los proyectos de industrialización del país, sin métodos orgánicos, disimula otros propósitos: a su alrededor se mueven sectores industriales, una nueva y poderosa plutocracia, interesados en una política proteccionista de algunas ramas improvisadas surgidas durante la guerra; planes de defensa nacional y sobre todo, tener la bolsa lista para todos los apremios financieros del Estado. En suma, se intenta cohonestar el monopolio del crédito de parte del Banco Central también con el argumento de que debemos prepararnos para momentos difíciles. Lo ha repetido el señor diputado miembro informante.

¿No habíamos quedado en que estábamos llegando al máximo de esplendor y de nuestro poderío como consecuencia de esta revolución reparadora?

Esta orientación política de nuestra economía, por lo demás, no es novedosa. La han precedido países que han creado un régimen de autarquía económica levantando barreras aduaneras infranqueables. Esto es, el dogma también en lo económico. Pero se hace una mala imitación; allá esa política era impuesta por necesidades evidentes y porque se llevaba una finalidad. Además de la situación de represión creada como consecuencia de la última guerra y del tratado de Versalles: el desemboque en la guerra de revancha. Pero entre nosotros, en un período de prosperidad, aunque sea fugaz y transitorio y aunque se anuncie ya el período deflacionista, tal política no sólo desarticula todo el andamiaje institucional, sino que nos asomamos hacia un abismo.

Ni aun en Alemania ni en Italia se llegó al discrecionalismo que señala y documentan las reformas que estamos criticando. Allá existía un diálogo —bien porque así convenía a los propósitos que se perseguían— entre el Estado, la industria y banca privada. Aquí sólo oiremos un monólogo: la voz del Banco Central, absorbente y todopoderoso. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

La reordenación de nuestro régimen bancario y crediticio, realmente sui generis, no descansa sobre la acción vigilante de los poderes públicos, mucho menos del Congreso de la Nación, sino sobre un funcionario de confianza del presidente de la República. Podrá privar de crédito a quien quiera y acordarlo a quien desee, para fomentar actividades absurdas y establecer tasas discriminatorias. Dice el artículo 2º que «podrá distribuir el cambio disponible entre las importaciones y otras remesas y dentro de las primeras fijar el orden de prelación entre los grandes grupos de artículos para el otorgamiento de las divisas de acuerdo con el criterio expuesto en los considerandos del presente decreto».

El concepto y la forma de este artículo merecen una crítica enérgica de nuestra parte. Lo primero, porque es entrar dentro del discrecionalismo, y lo segundo, porque seguramente si esta ley se sanciona, será la única en el mundo en que se establece esta definición: que el artículo 2º interprete el pensamiento de los considerandos del decreto.

Otros distinguidos miembros de este cuerpo han de ocuparse de esta misma cuestión. Por ello no me extenderé en mayores consideraciones.

Con ello no sólo se abjura de todo lo que somos y representamos, sino que se viola nuestro sistema constitucional.

¿Dónde queda la libertad de comerciar que la Constitución no permite alterar o destruir por leyes reglamentarias?

Y hay algo más: no podemos perder de vista que hemos suscrito la Carta Económica de las Américas, que condena los excesos del nacionalismo económico.

Hemos calificado de sui generis a estas innovaciones, porque tenemos a nuestro alcance el sistema de control establecido en Francia al crearse el Consejo Nacional de Crédito, integrado por treinta y ocho miembros, en el que están representadas todas las actividades de la nación, teniendo a su cargo la dirección del control del crédito. Ya hice una ligera referencia sobre la nacionalización del Banco de Inglaterra.

En cambio, entre nosotros, siguiendo el principio de los «comandos», se prescinde de todo cuanto signifique un control efectivo. Y podríamos señalar otros países como Bélgica, Suecia y Suiza, donde el control democrático y parlamentario en esta clase de instrumentos de gobierno es una realidad y no una ficción.

La ley 12.155, de creación del Banco Central, tenía algunas exigencias que sirvieron para que esa institución se substraiera a toda influencia extraña. El artículo 10 establecía que el presidente y el vicepresidente «deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro cargo remunerado o no».

Por el artículo 15 se determinaba quiénes no podían ser miembros del directorio del banco, quedando inhabilitados para ello los empleados o funcionarios de cualquier repartición, sea nacional, provincial o municipal; los insolventes y deudores morosos de cualquiera de los bancos accionistas y las personas que hubiesen sido condenadas por delitos comunes.

Con las modificaciones introducidas en este capítulo, sólo queda subsistente la última prohibición, esto es, la que se refiere a los condenados por delitos comunes, quienes no podrán formar parte del directorio del banco; pero si

se sanciona esta ley, de acuerdo con el nuevo régimen, podrán ser directores los insolventes y los deudores morosos.

Esto significará que las funciones del presidente de la institución, por las atribuciones que se le confieren, serán las de un director supremo de la economía nacional, y el cargo podrá ser desempeñado por cualquier industrial, dueño de empresas numerosas, o no, que podrá llegar a gozar del privilegio para sus industrias, de no estar sujetas a la fiscalización del Estado.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de hacer por simple decreto los nombramientos a propuesta de un directorio integrado por personas de múltiples actividades; y como ha ocurrido recientemente, también podrá por simple decreto ser removido o declarado cesante cualquier miembro del directorio. Esto demuestra que está totalmente en manos del presidente de la República la forma como deben actuar los miembros del Banco Central.

De este modo, al amparo de estos verdaderos privilegios se podrá hacer una nueva plutocracia tan voraz e inescrupulosa como cualquier otra.

Pero para nuestra satisfacción nos quedará el consuelo de que por el artículo 14 del despacho el presidente y el vicepresidente de la institución deben ser argentinos nativos.

A propósito de la naturaleza de esta reforma quiero hacer un comentario a una expresión del Comité de Estudios de la Resistencia de Francia, que creo encuadra perfectamente dentro lo que estamos considerando. «Se pregunta uno si la coacción ejercida sobre la colectividad por esta nueva oligarquía —alude a los técnicos nombrados por el Estado o a los industriales designados por los profesionales organizados— no sería más pesada aun que la del capitalismo. Los abusos del monopolio privado han sido, en efecto, condenados por la amenaza siempre latente de una forma defensiva de la competencia, la desconfianza del Estado, la oposición de las masas populares y la presión ejercida por la existencia de un vasto sector libre que crea el clima general de la economía. Todas esas fuerzas moderadas desaparecen en la hipótesis de la previsión organizada convertida en institución y beneficiaria de un régimen de monopolio extendido al conjunto de las actividades.»

¿Quién no vislumbra estos peligros en nuestro país?

A propósito del inflacionismo, que no es una enfermedad nacional sino una consecuencia de fenómenos complejos de la economía y de las finanzas, el señor presidente de la Nación hace afirmaciones que tengo la obligación de recoger, no en defensa del antiguo Banco Central de la República, que no estamos defendiendo, sino en homenaje a la verdad.

«El Banco Central —ha dicho el señor presidente— promovía la inflación, contra la cual

aparentaba luchar, violando el artículo 40 de su ley orgánica, y emitiendo billetes sin limitación, contra divisas bloqueadas en el exterior, de cuyo oro no se podía disponer en el momento de su emisión. En otras palabras —agrega—, se confabulaba contra la Nación y se actuaba visiblemente en favor de intereses foráneos e internacionales. Por eso su nacionalización ha sido, sin lugar a dudas, la medida financiera más trascendental de estos últimos cincuenta años.»

Aun cuando fuera exacta la afirmación sobre la emisión de billetes sin control —emisiones lanzadas con el respaldo de divisas bloqueadas en el exterior— la verdad es que no se atentaba contra los intereses nacionales en favor de intereses foráneos. Y la razón es sencilla: las consecuencias del emisionismo sólo se harían sentir, y se hacen sentir en toda la complejidad de nuestra vida nacional, como ya se sienten, pero no como consecuencia de esta afirmación del presidente de la República sobre el Banco Central, sino bajo el influjo de la política que se viene practicando desde el año 1943.

En realidad, el proceso inflacionista que soporta el país, a pesar de las previsiones verbalistas del ministro Ameghino durante la vicepresidencia del actual presidente de la República, ha continuado su ritmo antes y después de la reforma bancaria. Así, por ejemplo, tenemos que desde el 31 de marzo, después de la nacionalización, hasta el 15 de noviembre de este año, se ha observado un aumento en el circulante en las siguientes proporciones: la circulación monetaria ha aumentado en 371.000.000 de pesos y los depósitos bancarios en 1.455.000.000. En el primer caso corresponde un aumento de 88.000.000 de pesos mensuales y en el segundo de 125.000.000.

Como hemos podido observar, las enérgicas condenaciones del señor presidente de la República contra la presunta política inflacionista del Banco Central, se vuelven por pasiva, y agregaría recogiendo una expresión conocida, se ha tirado la pelota contra el arco. (*Risas.*)

Por otro lado, veamos cuáles son las perspectivas de nuestra moneda según los planes del primer magistrado. «Los valores consignados para el año 1951 —ha dicho— han sido calculados en pesos moneda nacional de igual valor adquisitivo al que tenían en 1943, año del cual se ha partido por ser el último del que se poseen datos discriminatorios; es decir, que las diferencias con respecto a 1943 representan el aumento del volumen físico de la producción, o sea, la cantidad de artículos elaborados. Por supuesto —y esto cabe subrayarlo— que los valores a alcanzar en 1951 estarán influidos por el proceso de desvaloración de la moneda, pero como lo que realmente interesa y expresa el trabajo y bienestar de los habitantes es el vo-

lumen físico de la producción y del consumo, valen las cifras establecidas.»

Esta declaración, señor presidente, sugiere varias reflexiones. Si bien es exacto que lo que cuenta es el volumen de la producción —concepto deificado por otro lado, por el ex dictador alemán—, no alcanzamos a comprender por qué se agita la muletilla de nuestra abundancia de oro, con la cual se pretende deslumbrar a los espíritus simples e ingenuos. España, hasta no hace mucho tiempo, era una de las naciones que poseía más oro, y, sin embargo, la situación general de España era realmente desastrosa. El oro deslumbra pero no crea.

Por otra parte, es alentar mucho optimismo acerca del aumento de nuestra producción, cuando su nivel actual acusa una notable disminución. Las estadísticas son aleccionadoras a este respecto y realmente no acusan un saldo favorable a la política social del régimen imperante.

Además, esta perspectiva de desvaloración de nuestra moneda, que el presidente no niega y anticipa, hace totalmente inocuo el argumento de que el Banco Central promovía la inflación, cuando todo el ordenamiento bancario descansa en esa política, aunque con la ilusoria contrapartida de un aumento de la producción.

La política inflacionista que prohija el Poder Ejecutivo y que viene galopando desde 1943, se vincula estrechamente con este nuevo ordenamiento bancario.

Por el decreto 11.554, el Estado se constituye en garante de los depósitos efectuados por terceros en las instituciones bancarias del país. Ha dicho el señor miembro informante que éste es un sistema único en el mundo, y es exacto.

Los bancos, de acuerdo con el nuevo régimen, se transforman en simples mandatarios del Banco Central. Y aquí empieza el monólogo.

¿Acaso la nueva estructuración estudia la política crediticia desde el punto de vista de interés nacional? —cuando digo interés nacional me refiero a la Capital Federal y a las provincias que también integran la República—. Absolutamente. Si eso se hubiera hecho, necesariamente debió llamar la atención lo que sugieren los guarismos.

Los bancos que operan en la Capital Federal, de cada cien pesos de depósitos invierten 69,70, en tanto que los bancos que actúan en el interior del país, por cada cien pesos invierten 84,20. Esto quiere decir que la economía del interior del país, tan sufriendo, nutre con sus depósitos, en apreciable proporción, a la Capital Federal.

Si se hiciera una adecuada apreciación habría que reintegrar a la economía del interior del país, según estimación del ingeniero Cristia, en forma de préstamos, 467.300.000, que representaría un aumento del 29,6 por ciento. Sobre esto nada dice la reforma. Sólo nacionaliza los

depósitos, sin contemplar el enfoque equitativo del problema. En esto, como en otras cosas, no existe el interior del país para los que gobiernan la República.

No podrán disponer de los depósitos sin permiso del Banco Central, decía hace un momento. Se establecen tasas diferenciales en redescuento, pudiendo discriminar por actividades, por personas, como mejor le plazca.

Antes de la reforma los depositantes, como confiaban en las seguridades que ofrecía el régimen bancario, no hacían distinguos entre bancos oficiales y particulares, y más bien se inclinaban para sus operaciones por estos últimos. Tengo a este respecto las estadísticas de los depósitos correspondientes a las fechas anteriores y posteriores a la nacionalización, que demuestran lo que acabo de afirmar.

En la exposición de motivos justificando la nacionalización de los depósitos se expresa lo siguiente: «En cuanto al uso que el Banco Central pueda hacer de esos depósitos, debe descartarse toda idea de que sirvan para atender ningún género de necesidades fiscales. La simple admisión de tal posibilidad quitaría todo mérito a estas proposiciones.»

Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con los redescuentos de los bancos particulares, autorizados por el Banco Central, después de la nacionalización de los depósitos? Al retirarse de la circulación 1.526.000.000 de cédulas hipotecarias que producían un interés del 4 %, se emitieron bonos hipotecarios por un monto de 2.000.000.000 de pesos y con un tipo de interés del 2 ½ %. El público sólo absorbió 300.000.000 y como el Banco Central no podía cargar con los 1.700.000.000 restantes, invitó a los bancos particulares a tomar el excedente. Naturalmente se hizo la operación y los bancos particulares hicieron su ganancia haciendo el redescuento respectivo en el Banco Central.

¿Qué conclusiones debemos sacar de todo esto? En primer término, el circulante anticipado por el Banco Central, fué cubierto por el redescuento que hizo a los bancos particulares, y es que necesariamente se tiene que respaldar en los depósitos bancarios.

Como se ve, se ha llegado a lo que preveía el Banco Central; se ha recurrido a los depósitos para cubrir necesidades fiscales. Pero hay más, señor presidente. ¿De dónde proceden los 50.000.000 de pesos acordados a la Corporación de Transportes? ¿De dónde los 95.000.000 para el rescate de las acciones del Banco de la Provincia? ¿De dónde los fondos necesarios para cubrir la reciente conversión y empréstito de 1.000.000.000 de pesos, los 700.000.000 para el otorgamiento del crédito a España? ¿De dónde los fondos para el cumplimiento de los decretos leyes secretos, cuyas cifras no deben ser muy pequeñas, para silenciar la operación que se re-

laciona con la adquisición de la Unión Telefónica, cuyos fondos no sabemos exactamente de dónde han salido?

Aun cuando la palabra oficial diga lo contrario, por la naturaleza técnica de estas operaciones, nos creemos en el deber de expresar que se está haciendo uso inmoderado del ahorro del pueblo argentino.

El Banco Hipotecario Nacional es una meritoria institución a la que tanto debe el progreso del país y que también ha debido pagar su tributo a la reforma bancaria. El pequeño ahorro veía con confianza a esta institución, no sólo por las seguridades que ofrecían sus inversiones, sino porque aseguraba una renta modesta del 4 % en su papel. Con la nueva reestructuración del crédito se ha visto inesperadamente cercenada su pequeña renta al reducirse el tipo de interés al 2 ½ por ciento.

Mientras el Banco Hipotecario continúa percibiendo de sus deudores el 4 %, lo que significa una ganancia anual de 28.000.000 de pesos, sólo paga por los nuevos bonos el interés del 2 ½ %, aunque a decir verdad, por la forma en que se ha visto obligado a hacer el canje de los otros bonos, lo cierto es que el nuevo tipo de interés es mayor al 2 ½ por ciento.

En 1937 se acordaron 90.634 hipotecas y en 1942, 100.698 por un valor respectivamente de 1.556 y 1.586.100.000. En la discriminación por montos, las cantidades que no sobrepasan los 5.000 pesos representan el mayor número de operaciones, lo que significa que si se modifica el tipo de interés, como corresponde, a quien se beneficiará será a los pequeños propietarios, mucho más si tenemos en cuenta que el tipo de interés medio, en las transacciones, incluido el Banco Hipotecario, para las cantidades menores de 5.000 pesos, es del 7,47 por ciento y para las cantidades hasta 1.000.000 de pesos, el 6,47 por ciento.

Para reforzar nuestra argumentación no está de más que repita las palabras del directorio fundador, pronunciadas en 1887: «Este banco, por su carácter nacional, como banco del Estado, llamado a llevar sus operaciones y desenvolver su acción benéfica en todo el territorio de la República, no es ni puede ser un banco de especulación ni una fuente de renta, sino un elemento de estímulo y fomento de la riqueza del país.»

El país espera que las promesas sobre el abaratamiento del tipo de interés hipotecario se cumplan, equiparando el tipo de interés, al nuevo bono.

A la Comisión de Valores que existía anteriormente y que funcionaba con carácter más bien consultivo, se le han acordado funciones de control y vigilancia; pero sus decisiones cobran el carácter de sanciones definitivas. Así regulará el monto de acciones y obligaciones

que las sociedades privadas deseen cotizar en la Bolsa, y en última instancia acordará o no la autorización, respectiva. Esto quiere decir, dentro de la mano que aprieta, que una empresa industrial o comercial que no actúe según las directivas o simpatías políticas de los nuevos ordenamientos, estará expuesta a todo género de contingencias.

La Comisión de Valores no tenía anteriormente fuerza compulsiva. Sin embargo, el Banco Provincial de Santa Fe, llenando todos los requisitos de la ley, solicitó autorización para emitir 50.000.000 en cédulas de crédito hipotecario. La comisión sólo autorizó 5.000.000. Si esto ocurría antes y con una institución de crédito oficial, ¿qué no ocurrirá ahora con las facultades discrecionales que se le acuerdan?

Es que la Comisión de Valores, lo que en verdad cuida, es que el mercado bursátil no se abarrote, para que pueda el gobierno colocar cómodamente sus papeles.

Por lo demás, las provincias y las municipalidades quedarán sujetas al arbitrio de la Comisión de Valores. Con eso la autonomía financiera de las provincias habrá desaparecido, lesionando el principio federal de nuestra organización institucional. Es sensible comprobar que en la reunión realizada hace pocos días por los ministros de Hacienda de provincias, no se haya levantado la voz del federalismo argentino, para defender las autonomías provinciales en el aspecto financiero, que es la manera de defender también la soberanía en su aspecto político.

**Sr. Benítez.** — El ministro de Hacienda de Corrientes estuvo conforme.

**Sr. Santander.** — Las provincias argentinas han de levantarse contra el poder central, no por una mera cuestión política, sino por cuestiones fundamentales como éstas, defendiendo los viejos principios que han hecho la Nación y contribuido a su grandeza.

**Sr. Díaz de Vivar.** — ¿Si me permite el señor diputado...?

Quiero hacerle notar que la Unión Cívica Radical estuvo representada en esa reunión.

**Sr. Santander.** — El señor diputado lo recuerda. El ministro de Hacienda de Corrientes definió perfectamente cuál era el concepto del federalismo. Fué la única voz que se hizo oír.

**Sr. Díaz de Vivar.** — En lo fundamental se ha solidarizado el ministro de Hacienda de Corrientes con la política económica del gobierno central.

**Sr. Santander.** — Dejó constancia expresa de su punto de vista a ese respecto y fué desgraciadamente la única voz que se alzó en defensa del federalismo. Hubiera querido que todos los ministros de Hacienda hubieran hecho lo mismo. Es la mejor forma de defender al país.

**Sr. Ravignani.** — El federalismo financiero ha desaparecido. Y sino que lo digan las provincias que ya no recaudan los impuestos que les pertenecen.

**Sr. Rumbo.** — No hay federalismo absoluto.

**Sr. Benítez.** — No pueden subsistir catorce economías. La economía argentina es una sola.

**Sr. Santander.** — A todas las instituciones bancarias, comerciales y entidades autárquicas se les ha asignado funciones de fomento industrial, comercial, de colonización e inmigración. Esto constituye una verdadera anarquía, especialmente si nos referimos a propósito de nuestra capacidad industrial y agraria; pero he aquí que el Estado va a convertirse, por intermedio del Banco Central y organismos sucedáneos, en gestor industrial y comercial, en el exterior, desde luego expuesto a sufrir las alternativas favorables y desfavorables del negocio, a pesar de la sutileza de las expresiones del señor miembro informante. Anteriormente el Estado ha acudido en auxilio de las empresas desfallecientes en momentos de depresión, o del agro empobrecidos especialmente también durante los periodos críticos, descargaba sobre la colectividad las pérdidas de aquéllas, y el Parlamento y el país conocían cuál era la situación. Ahora será el Estado, como gestor industrial y comercial, quien descargará sobre la comunidad las pérdidas que produzcan sus operaciones. Pero hasta ahora estamos en esta materia en la luna de Valencia. Así, señor presidente, el decreto 14.961, relativo al Banco Hipotecario Nacional, en su artículo 16 establece que la Nación resarcirá al banco, al cierre de cada ejercicio, de las pérdidas que arrojen los apercaciones de fomento.

**Sr. Benítez.** — Son disposiciones comunes en nuestro régimen bancario.

**Sr. Santander.** — El artículo 17 del decreto relativo al Banco de la Nación establece la misma disposición. Igualmente el artículo 16 del decreto relacionado con el Banco Industrial contiene una disposición análoga. Pero dentro de la anarquía de las disposiciones que establecen facultades concurrentes de cada una de estas instituciones, está también la de fomentar la inmigración.

Ante tal anarquía, habría que preguntarle al Poder Ejecutivo cuál es su plan con respecto al futuro sobre la inmigración en nuestro país. Antes de que el Congreso se pronuncie sobre el «plan» del Poder Ejecutivo y sobre la forma en que ha de financiar esos gastos y la orientación que se ha de dar, la información periódica nos enteraría que ya ha salido un enviado del Poder Ejecutivo a fin de reclutar inmigrantes en Italia y otros países del continente europeo.

Existe alguna inquietud por este hecho que comentan los diarios. En primer término, porque se sobrepasan las futuras decisiones del Congreso en la materia, y en segundo lugar,

porque, con todo el respeto que puede merecer un hombre que viste sotana, se ha dado esa facultad a un representante de la Iglesia, que puede ser democrático y estar confundido con los principios que sustenta nuestra Constitución nacional, que puede estar identificado con el espíritu del pueblo argentino, pero yo tengo alguna preocupación y creo mi deber decir a la Honorable Cámara que existen algunos sectores reaccionarios dentro de la militancia católica oficial, que a lo mejor por simpatía, por afecto y aun con un concepto exagerado de humanidad, este hombre puede convertirse en algo así como el centro de atracción de todos los desplazados que, en esos países, fueron cómplices de crímenes horrendos, para traernos sus ideas y sus pasiones, que no están ni pueden estar de acuerdo con la tradición y el espíritu del pueblo argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Díaz de Vivar.** — ¿Me permite, señor diputado?

**Sr. Presidente** (Guardo). — Sírvase dirigirse a la Presidencia el señor diputado.

**Sr. Santander.** — Le permito, señor diputado.

**Sr. Díaz de Vivar.** — Señor presidente: las palabras del señor diputado me recuerdan un episodio ocurrido en la Cámara de Diputados de Francia. Presidía la sesión Eduardo Herriot, hombre de insospechada filiación democrática. Un diputado de la derecha, cuyo nombre no recuerdo en este instante, aunque me parece que fué Xavier Vallat hacía una acotación porque por primera vez en la historia de Francia llegaba a la presidencia del consejo un ministro de raza semita. Se refería al señor León Blum. El señor Herriot, contestó desde la presidencia de la Cámara que a él, en su carácter, hombre democrático, no le importaba la confesión a que pertenecía el primer ministro de Francia.

Devolviendo por pasivas, al señor diputado Santander, las palabras del presidente Herriot, le diré qué me parece arriesgado inferir la posición espiritual de un hombre o su fe democrática, de la circunstancia de que vista sotana o lleve la espada de general de la Nación. El espíritu reaccionario puede anidarse tanto en un civil, como en un militar, como en un hombre de la Iglesia, y a la inversa, el espíritu democrático puede estar igualmente en el corazón de un soldado, de un sacerdote o de un civil. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Santander.** — Yo no he dicho nada de sentido contrario a lo dicho por el señor diputado. He anotado un hecho, lo he comentado y he expresado una verdad. He señalado una preocupación justificada.

Continúo. El Estado no necesitará ya del Instituto Movilizador, tan vapuleado por el señor diputado, porque quien hará las veces de éste, será, precisamente, el Banco Central, con la

diferencia de que todo permanecerá como secreto de Estado.

A las operaciones ruinosas que realicen el Banco de la Nación, el Banco Hipotecario y el Banco Industrial —y que el país no conocerá nunca—, habrá que agregar las pérdidas que experimenta con su política el Banco Central en el mercado de valores, pues, como se sabe, por razones de prestigio ha venido forzando las cotizaciones de algunos papeles, como aquellos del tres y medio por ciento, cuando se realizó la conversión anterior a la últimamente efectuada. Ignorará asimismo los beneficios o pérdidas que se produzcan en las operaciones de compraventa de la cosecha, como decía el señor diputado Zara, y sobre todo el monto de las pérdidas por el auxilio a empresas mixtas y a ciertas empresas particulares, para cubrir los gastos originados por la aplicación de algunos gastos de carácter social. Existe ya el tercer presupuesto oculto, que ignora el Congreso y que desconoce el país.

El Instituto Movilizador pasará a mejor vida. Ya no será el blanco de los ataques. Lo será el Banco Central; y todas las pérdidas las cargará el pueblo de la República, con el agravante de ignorar a quiénes beneficiará.

Como el mejor complemento al régimen del monopolio del crédito conferido al Banco Central de acuerdo con el nuevo ordenamiento bancario, se ha establecido el monopolio del comercio exterior e interior, por intermedio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.

Anteriormente existía un organismo denominado Comité de Exportación y Estímulo Comercial e Industrial creado en 1941. Pero sus funciones eran simplemente las de asesorar al Ministerio de Agricultura en lo referente al desenvolvimiento industrial y comercial del país, y a la expansión de nuestro comercio exterior.

El decreto de creación de este nuevo organismo expresa que su acción ha de beneficiar a todos los sectores económicos del país; que prescindirá de los propósitos de lucro que constituyen las bases de las organizaciones comerciales privadas; que en modo alguno monopolizará las actividades privadas, sino que deberá complementarlas adecuadamente y para beneficio de ellas. Empero, la verdad es que en el breve lapso de vida que cuenta, está demostrando todo lo contrario. Diría más: el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio se ha convertido en la vaca lechera del gobierno central, porque de él está extrayendo los recursos que necesite para todas sus fantasías. Por lo pronto adquirirá el trigo y el lino a un precio que apenas cubre el costo de producción; y mientras abonará por el primero diecisiete pesos el quintal, y treinta pesos por el segundo, en el mercado internacional se cotiza el trigo a treinta pesos y el lino a noventa y dos pesos.

Los agricultores argentinos todavía están esperando la diferencia de las ganancias que ha obtenido el Estado en las cosechas pasadas.

Además, por decreto reciente, se lo autoriza a adquirir en exclusividad para la exportación, los siguientes productos: tanino, caseína, queso, manteca, papa, cebolla, sebo, etcétera. Esto viene a desautorizar el propósito declarado en los considerandos del decreto de creación, de que la nueva institución no tiene fines de lucro y que en modo alguno monopolizará actividades privadas.

La composición de este organismo prácticamente estará en manos del presidente del Banco Central, ya que será su presidente nato aunque entre otras cosas el instituto aconsejara al Banco Central la fijación de los tipos de cambio para las exportaciones e importaciones.

Son de tal vastedad las actividades y atribuciones que tiene este organismo, que también promoverá la inmigración y selección de técnicos. Todo esto es la culminación y el coronamiento de un andamiaje destinado a concentrar en manos del Estado todas las actividades privadas vinculadas al comercio, a la industria y a la agricultura. No sólo se destruirá la iniciativa privada sino que a su sombra está floreciendo ya una poderosa oligarquía industrial y financiera que controlará la vida económica de la Nación. Será la nueva oligarquía de la conciencia en marcha.

Hacemos esta afirmación por el hecho de que al frente de estos organismos se encuentran hombres vinculados estrechamente a algunos sectores de la industria y el comercio. Y aunque fueren santos, señor presidente, los intereses, desde que existe el mundo, son los que lo mueven para marchar hacia adelante o hacia atrás. Y vienen como a medida las palabras que voy a pronunciar y que pertenecen a Baudín: «Se pregunta uno todavía: en caso de dirección monetaria, ¿quién sería el dirigente? Muchos contestarán: El Estado. Pero el Estado son los hombres y nada humano les es ajeno. ¿Podemos razonablemente esperar que olvidarán sus intereses personales y sus pasiones?» Y el Estado, esta vez, es una institución en cuyo presidente se suma una cantidad de facultades realmente extraordinarias.

No ha sido nuestro propósito hacer una disquisición teórica para embanderarnos en una corriente determinada al plantear nuestra disidencia con los proyectos que considera la Honorable Cámara. Hemos querido precisar algunos conceptos para definir nuestra conducta y deslindar responsabilidades, dentro eso sí, de una doctrina: la que fluye de nuestra Constitución.

No obstante todas las protestas de adhesión a los propósitos del gobierno representativo que formulan las actuales autoridades, lo cierto es

que las reformas al régimen bancario, a la organización del crédito y a nuestro régimen económico, tal como han sido concebidas, constituyen su más absoluta desautorización. Y algo más: iniciamos la marcha cuando otros regresan.

—Suenan la campanilla indicadora que ha expirado el término reglamentario para hacer uso de la palabra.

Recientemente se ha dado la información que en Canadá, lo mismo que en Estados Unidos y en Brasil, desde el primero de este mes se levantarán todas las medidas de control, de restricción que tenían esos países y que trataban el desenvolvimiento de las actividades privadas.

Más aún: una información que suministra «La Prensa», en un telegrama de Nueva York, dice que en Rusia, que tiene un régimen comunista como saben los señores diputados, en este aspecto de respetar en parte la actividad privada han tomado resoluciones que han asombrado al mundo capitalista...

**Sr. Presidente** (Guardo). — Ha vencido el término reglamentario, señor diputado.

**Sr. Santander.** — Dos palabras y termino, señor presidente.

Contamos con una Constitución que coincide en sus postulados esenciales con los principios establecidos en las conferencias interamericanas que no sólo debemos respetar en sus formas y substancia, sino que ha permitido a la Nación Argentina alcanzar una gravitación económica de indudable jerarquía.

Estamos frente a la amenaza de que toda nuestra tradición fecunda para nuestro progreso sea destruida por la influencia de principios que si bien son adaptables a una economía muy evolucionada, pueden conducirnos a nosotros a una subversión del régimen económicosocial que dislocaría la estructura jurídica y política de la Nación.

No se puede prescindir de la colaboración de las naciones, mirando el proceso de la civilización con espíritu crítico y aun mirándolo desde el punto de vista del más puro interés nacional.

Ya dentro del panorama interno de cada nación, el control y las medidas coercitivas que ahogan toda iniciativa y anulan toda emulación creadora, necesariamente relajan el mecanismo económico y disminuyen las fuentes potenciales de riqueza.

Dentro de los regímenes democráticos, claro está, no se pueden contemplar los problemas de Estado con el criterio del siglo pasado, en que rayó a gran altura el liberalismo económico. Pero ello no obsta para que algunas de sus premisas fundamentales perduren a través del tiempo y de todas las contingencias.

Nadie se atrevería a negar que al Estado le competen hoy las funciones de estimular y vigilar las actividades económicas, pero ellas no pueden trascender de ciertos límites prudenciales.

La Nación tiene a este respecto una larga experiencia, que debemos tener presente. Sería negar la evidencia si no afirmáramos que nuestra grandeza actual descansa, precisamente, en que a través del tiempo se observaron esos principios. Negarlos hoy con experiencias de cuyos resultados no podemos anticipar un juicio sereno y desapasionado, es arrojarnos en brazos del azar y de la incertidumbre. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Klix López.** — Entiendo que no cabe hacer en estas circunstancias la defensa científica de los planes financieros llevados a cabo, o por ejecutar, del Poder Ejecutivo.

Se trata de disposiciones de nuevo cuño, cuya esencia y formas revolucionarias, mal pueden adaptarse al criterio con que los eruditos en materia financiera, desarrollan sus aptitudes o conceptos aprendidos en una escuela que ya ha sido superada y a través de varios años de experiencia económicofinanciera, durante los cuales, esa disciplina o ciencia, no era un instrumento de gobierno, sino que se había convertido en una trampa diabólica en cuyas redes quedaban prisioneras todas las iniciativas que fueran en beneficio del pueblo.

La reforma de la ley de bancos es, en realidad, como denominación, un tanto impropia, porque no sólo tratamos de leyes que se refieren a la cuestión bancaria, sino que hay otras que no son propiamente tales como, por ejemplo, la que crea el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio.

Mis palabras van dirigidas especialmente a los señores diputados de la oposición, pues tengo verdadero interés en que nos acompañen con su voto, a la sanción de estos instrumentos legales que tienden al mejor aprovechamiento de nuestras riquezas y a la estabilización de nuestro sistema financiero.

Todos los legisladores aquí presentes somos la resultante legal de una revolución. Los sufragios del pueblo, tanto de unos como de los otros —me refiero a los sectores de la Cámara—, son honrados e indiscutibles. De no ser por la revolución, quien sabe cuáles serían las caras reguladas que nos estarían reemplazando.

Acabamos de asistir a una revolución y a una conflagración mundial, que no tuvo parangón en la historia. Han desaparecido países, y veinte millones de hombres han pagado con sus vidas la locura de una desorganización económica, la

falsa economía basada en la especulación que agota al individuo y enerva las fuerzas de cualquier nación.

Hay países que han ido a la guerra para obtener un puerto y han perdido varias provincias; hay otros que lo hicieron por defender sus mercados a fin de colocar el producto de sus usinas y han perdido sus usinas y los yacimientos minerales que las alimentaban.

La dolorosa experiencia recogida nos ha decidido a realizar también un esfuerzo de guerra, de guerra contra el hambre, contra la miseria, la desnutrición, la desocupación, la aridez de las provincias pobres, que sólo necesitan un canal para constituirse en verdaderos emporios de producción.

La experiencia que el mundo nos regala, ya que no hemos sido cobayos en esos tristes experimentos, nos enseña a fomentar nuestra riqueza con el máximo de esfuerzo, haciéndola multiplicar para que se extienda por todos los ámbitos del mundo el producto del trabajo argentino. Para eso, es condición indispensable que nos emancipemos de los viejos moldes de la economía liberal, que en su exagerado individualismo ponían en una situación desigual al débil contra el fuerte; en otras palabras, que impedía una racional distribución de la riqueza y una verdadera justicia social.

Sabemos que vivimos en un mundo de economía capitalista. Tratemos de aprovechar todo lo bueno de él y desechar todo lo malo. En este sistema de organización, existe una característica permanente: períodos de prosperidad seguidos de períodos de depresión. Cuando se asiste al período de prosperidad, la gente quiere libertad amplia para comerciar. En cambio, cuando asoman los primeros síntomas de la depresión, todo el mundo acude al Estado. Como no hay compradores para las cosechas, que las compre el gobierno, que es, al fin y a la postre, quien paga los platos rotos.

**Sr. Ravignani.** — El gobierno acude al agricultor.

**Sr. Klix López.** — Ya le voy a contestar.

Hace tiempo que los países de organización democrática han superado la etapa del Estado gendarme, del *laissez faire, laissez passer*. Apareció la tendencia de no permanecer inactivo en las épocas de prosperidad, preparándose para las épocas de depresión, esto es, aprovechar los males y los bienes que nos brinda el sistema capitalista.

Debemos recordar que cuando nuestro trigo no se podía transportar por causa de la guerra, las cosechas comenzaron por lógica consecuencia a declinar. Ninguno de nuestros poderosos cerealistas compraba absolutamente nada de trigo y a los agricultores no se les podía acon-

sejar que consumieran el producto de su trabajo, que se comieran su trigo, porque entonces, aparte de los quebrantos que se les ocasionaría, iba a ocurrir el fenómeno de la despoblación del agro y la superpoblación de las ciudades. Ello insumió al gobierno cifras siderales, que oscilaron entre los 800 y los 1.000.000.000 de pesos, que se dispusieron de rentas generales, es decir, se cargaron sobre las anchas espaldas de la colectividad. En cambio, siempre que se obtuvieron ganancias de los cereales, ellas fueron exclusivamente al bolsillo de los exportadores.

Esta situación injusta no podía continuar; sobre todo, era necesario aprovechar la experiencia recogida y crear reservas que se denominan antidepresivas, para lo cual en períodos en que los cereales valen mucho, el gobierno se convierte en exportador, reservando las ganancias excesivas para formar el fondo anticíclico, el fondo de estabilización, que es la única forma real en el sistema capitalista, de desarrollar una política anticíclica, que permita, sin grandes esfuerzos, hacer frente al inevitable período de depresión. Estos son conceptos conocidos contenidos en cualquier texto de economía política. Con esto no innovamos nada. Lo que deseamos es evitar la catástrofe que representa la desorganización y la anarquía en materia financiera.

No creemos que hemos inventado la pólvora. Los errores del pasado nos indican que no debemos reincidir en ellos. Estamos usando de la experiencia de gobiernos anteriores, con la diferencia de que no esperamos a que el país se hunda en la miseria para pedir el auxilio de técnicos, foráneos o no, que equilibren, a costa del futuro de la Nación, la situación del día. No queremos salvavidas cuando nos estemos ahogando: queremos cruzar el río de la mejor manera posible, por el más sólido de los puentes.

El Estado no debe concurrir a salvar catástrofes, ni debe recurrirse a su intervención cuando los hechos están consumados. Debe procederse con un criterio científico a prever esos sucesos y a reducir esas catástrofes inevitables. De esa manera, se evitará el mal que ya los señores diputados de la oposición han manifestado que está próximo, es decir, el período de depresión, de normalización, de deflación. La política que en este sentido sigue el actual gobierno es sencilla y no se presta a tergiversaciones: aprovechar los momentos de prosperidad y formar las reservas con las cuales se pueda hacer frente a las épocas de depresión.

**Sr. Zara.** — ¿A cuánto ascienden las reservas del Poder Ejecutivo?

**Sr. Klix López.** — Voy a contestar con las palabras del señor diputado Benítez: cuando el señor ministro de Hacienda esté aquí, le in-

formará. Creo que en materia financiera se debe ser muy preciso.

**Sr. Zara.** — Para apoyar una política se necesita conocer los datos en que ella se funda.

**Sr. Klix López.** — En el pedido de informes, el señor ministro podrá responderle en forma exacta.

**Sr. Santander.** — Comprometemos el voto del señor diputado para la interpelación al señor ministro de Hacienda.

**Sr. Klix López.** — Los fenómenos de depresión no pueden evitarse, ni por uno ni por varios gobiernos. Alguien podrá decir que las reservas se hacen a costa de la diferencia de los precios de los cereales y que tal situación es injusta. Para contestar eso, a más de lo que ya se ha expresado, debo recordar que durante cerca de diez años de crisis agrícolas, los productores recibieron en buen dinero el precio de sus cereales y a una cotización superior a la que se obtenía en los mercados internacionales, dinero que, como he dicho, incidió sobre rentas generales y que se procuraba, en parte, del control de cambios, que es después —así lo considero desde mi punto de vista personal— análogo en ciertos aspectos a lo que es hoy el IAPI por su destino estabilizador.

De manera que, se sacrificó al país para salvar a los agricultores. Ese sacrificio no fué estéril, ni tampoco injusto, pues sin él, no hubiera sido posible consolidar la situación del hombre de campo. Además, ahora podemos pasar al otro período de desarrollo económico-financiero, a la industrialización.

**Sr. Peña Guzmán.** — Si me permite, señor diputado...

No he podido comprender cuál es la analogía que el señor diputado encuentra entre el control de cambios y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Son dos cosas completamente distintas, tan distintas que en estos proyectos están consideradas separadamente.

**Sr. Klix López.** — Sí, están separadamente; pero le voy a demostrar la analogía, en cuanto a los fines que llenó en su época, y no en su fase técnica.

**Sr. Zara.** — El control de cambios fué agregado al Instituto de Promoción del Intercambio.

**Sr. Klix López.** — Pero en otra forma.

Como decía, hoy podemos dedicarnos a otro período de nuestro desarrollo económico-financiero, a la industrialización del país, que lo pongan en consonancia con los tiempos que corren y que ha de ser la base de la riqueza futura de la Nación, en especial de los trabajadores del agro, quienes encontrarán siempre mercados para sus productos, y no se hallarán en la situación precaria que tuvo que remediar el gobierno.

Para alcanzar esa industrialización valoramos en toda su importancia la iniciativa de la industria privada, rica en moral y rica en energías.

De ese foco deben partir las chispas de la evolución integral del país. A ello tiende el actual sistema de política bancaria: a la justa distribución de los bienes y a su protección por todos los medios, entre otros el racional uso del crédito.

La promoción económica depende en gran parte de la eficiencia del crédito en relación a la empresa privada, pues el crédito, que crea medios de pago, tiene una importancia equivalente a la moneda. De ahí se sigue la importancia de los bancos y de su eficaz contralor y regulación.

Por muy conocidas, no me referiré a las causas que motivaron las crisis bancarias de los años 1929 y 35 y a las medidas que propuso el ministro Hueyo, que no se llevaron a la práctica, para hacer frente a la situación.

En 1935, como medida de emergencia, se creó el Instituto Movilizador. Se trata de un organismo que tiene para la técnica moderna muchos errores, como es natural, pero que en su tiempo —es mi criterio personal— cumplió su finalidad. Fué una institución creada para salvar una situación de emergencia producida por la falta de contralor de las operaciones que realizaban los bancos. Hoy sería ilógico que se dejara a los bancos disponer a tontas y locas de sus fondos, del crédito, y volver, tarde o temprano, a la situación aquella que obligó a crear el Instituto Movilizador.

El Banco Central, con su organización primitiva, no podrá llenar ni medianamente sus funciones. Entre sus fines principales estaba el de orientar y asesorar a los otros bancos respecto a la forma de regular el crédito; verbigracia, que se restringiera en aquellos casos en que se destinara a fines suntuarios y que se facilitaran los que tenían por fin el fomento de la industria.

Pero ocurría que el Banco Central sólo podía actuar frente a los otros bancos por recomendaciones, sin fuerza alguna para hacerlas cumplir, y con el agravante de que esos mismos bancos, a los cuales debía controlar y asesorar, eran los que gobernaban, es decir, que tenían mayoría de representación en su directorio.

Con el nuevo régimen tales aberraciones no podrán ocurrir, aparte de que el Banco Central tiene actualmente los medios para constreñir a los demás bancos a cumplir sus recomendaciones; mediante el contralor de los depósitos entregados a los otros bancos se puede con exactitud conocer cómo funciona el crédito y su destino.

Lo concreto de este asunto del Banco Central es que su existencia al principio discutida, hoy no puede serlo, porque de su directorio no forman parte más que argentinos; el capital foráneo, que era un motivo de crítica, hoy no figura en el gobierno de la institución.

A través de lo dicho, repito, sólo he expuesto mis ideas, sin referirme al sistema propiamente dicho, ya que esa tarea, que demandaría fatigosa labor, exige, tanto desde el punto de vista del orador como del que escucha, una versación que no todos poseen, por razón de la especialidad.

Para terminar, diré algunas palabras respecto del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, cuyos fines, entiendo que no han sido bien comprendidos. Se trata de una organización estatal que conserva el privilegio de comerciar con el exterior con determinadas mercaderías fijadas por el Poder Ejecutivo. Durante la guerra, todos los países controlaban los precios de las mercaderías de primera necesidad. Estados Unidos llegó a ejercer el control sobre más de dos mil setecientos artículos.

Otra forma de contralor de los precios, se hace fijando cuotas de importación y exportación. El Estado argentino ha adoptado el sistema más práctico, en consonancia con nuestra idiosincrasia y economía, interviniendo directamente en la compra y venta de determinadas mercaderías, lo que permitió combatir con éxito la especulación interna, y contener la inflación, congelando fondos apreciables que serán grandes reservas, en épocas de deflación y de depresión.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara don Héctor Sustaita Seeber.

Todas estas medidas fueron el resultado de amplios estudios efectuados en la certeza de que, terminada la guerra, sucedería un período de gran escasez internacional de ciertos artículos, especialmente alimentos y materias primas, y que esa escasez iba a provocar una elevación considerable de los precios. Los países necesitados pagarían cualquier precio para procurarse la mercadería de que carecieran. Se advirtió que sin la fijación de una cuota de exportación, sin un control de la exportación, los precios en el mercado interno habrían de alcanzar cifras siderales, la inflación se produciría en forma desmesurada con el perjuicio consiguiente para las clases proletarias que serían las más afectadas. Citaría un ejemplo, aunque esto es tan sencillo que todos lo comprenden. Si el girasol se pagara 90 pesos en el mercado interno, imaginense los señores diputados cuánto costaría el litro de aceite de girasol. La caseína, por ejemplo, alcanza hoy un elevadísimo precio en el mercado internacional. Si se permitiera exportarla libremente, ¿a qué altura estaría el precio del litro de leche, de la manteca y del queso? Pues toda la caseína iría hacia el extranjero.

En síntesis, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio es una institución que

tiene por fin la defensa directa de nuestra economía, en lo que al precio de determinadas mercaderías se refiere, evitando la especulación interna y externa.

Señor presidente, señores diputados: he hablado en este recinto en forma general; empero, si la discusión me da oportunidad, he de hacerlo nuevamente cuando se traten en particular ciertos decretos. He hablado con entera convicción y buena fe, entendiendo que va en esta forma del trámite comprometido el crédito y la confianza de la Nación, ante propios y extraños.

Acepto y hasta considero necesaria la crítica bien inspirada, toda vez que ella se incorpora y da sentido a la obra combatida, lo que no está en pugna con el voto favorable que he pedido a quienes la realizan; que diga en el peor de los casos, de su solidaridad con los errores, si ellos se cometen en nombre de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Sustaita Seeber). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

**Sr. Zara.** — Mi exposición, que haré en términos sencillos y claros, se referirá al aspecto general del sistema económico que se procura estructurar, entre otros medios, con los decretos leyes que estamos considerando. Algunos de sus aspectos técnicos ya han sido analizados en su medulosa exposición por mi colega, el señor diputado Santander. Los demás serán tratados por diferentes miembros de mi sector; me referiré especialmente a los decretos 12.506, del año 1946, sobre contralor de cambios, y 15.350, del mismo año, sobre creación del Instituto de Promoción del Intercambio.

No haría con tranquilidad mi exposición si omitiera decir desde el comienzo, que mi ánimo no está perturbado por la prevención metódica, ni inclinado a la crítica sistemática. Me guía, por el contrario, el cumplimiento razonado de deberes esenciales de fácil comprensión, como son los de defender para nuestro país, el mínimo de derechos que configura un régimen de libertad y procurar que en el proceso económico argentino se respeten las normas técnicas y jurídicas básicas, cuya vigencia permitirá alcanzar los objetivos comunes de bienestar y de progreso.

Deseo también expresar que los asuntos de esta naturaleza los abordamos con un sentido cabal y justiciero a la vez, de la realidad nacional e internacional. Por ello, sin colocarnos en las filas del negativismo o del nihilismo, como prueba de que somos permeables a la razón, diré que encontramos justificado que el presidente de la República sostenga que no puede levantarse el principio de la libertad absoluta en materia económica dentro de un mundo que se maneja con economías dirigidas o economías organizadas. Somos permeables a

las razones, tanto como deseáramos que lo fueran nuestros adversarios que, a veces, sin ninguna razón, se convierten en nuestros detractores.

Nuestra discrepancia, que es profunda, no radica en ese aspecto del asunto, sino en el límite máximo, en el límite razonable de la intervención del Estado, dentro de la economía privada, aspecto trascendente del que me he de ocupar más adelante.

Admitimos, señor diputado Klix López, que la época del liberalismo clásico de los fisiócratas, de Adam Smith, la época lejana del *laissez faire, laissez passer*, del individualismo absoluto ha quedado relegada al olvido y que, al igual que el derecho, la economía ha evolucionado hacia formas superiores, más humanas, de beneficio social y colectivo.

Esta verdad ya ni siquiera se discute. El análisis del desenvolvimiento económico de cualquier país lo confirma, si bien —esto es importante— con diferencias substanciales, que deseo y conviene señalar al fin de mi exposición, que tiende a impedir los riesgos del sistema extremo del Estado omnipotente.

Rusia ha adoptado el régimen de economía dirigida integral. Sus planes de gobierno de 1921, 1927 y 1932 y el general o definitivo, del cual éstos son sólo etapas previas, asignan al Estado el monopolio de todas las actividades referentes a la producción, la industria y el comercio. Ello se explica porque en ese país se ha abolido el derecho de propiedad después de la revolución de 1917 y la actividad individual no cuenta para nada, como tampoco cuenta el respeto a la personalidad humana.

Sobre ese régimen se ha dicho: «Rusia, con su sacrificio, ha librado al mundo de una ilusión pueril y de un mito estéril: ha demostrado que un gobierno nacido de una dictadura, es impotente para crear condiciones soportables de vida.» Estas palabras, pronunciadas por D'Annunzio en los albores del advenimiento fascista, lo fueron posiblemente sin pensar que serían de aplicación estricta al régimen que él estimuló, y en cuyo servicio empañó los prestigios de su talento.

Italia fascista y Alemania nazi ajustaron también sus axiomas gubernativos al concepto del Estado omnipotente, y a la subordinación de todos los derechos individuales a ese concepto; mantuvieron la propiedad privada y la acción individual, pero sujetas a las normas estrictas de una economía organizada, más que dirigida, en beneficio exclusivo del Estado todopoderoso.

Una prestigiosa revista extranjera de derecho público, comentando con buen humor el régimen soviético frente al régimen nacistafascista, decía que la diferencia era ésta: al propietario de una vaca, Rusia se la quita; Italia o Alemania se la dejaban, pero le quitaban toda la leche.

Las intervenciones del Estado, que acabamos de ver, marcan el extremo opuesto del liberalismo individualista, y configuran el estado totalitario, con su secuela de dolor y de destrucción de todos los bienes estimables de la vida.

Entre ellos existe el tipo de intervención intermedia, moderada y racional.

**Sr. Klix López.** — ¿Y la política del «New Deal», de Estados Unidos?

**Sr. Zara.** — Ya me referiré a eso, y daré las razones por las cuales desearía que la política económica argentina de esta época de paz, tuviese siquiera como límites, los que tuvo la economía norteamericana, en la época del «New Deal».

Este tipo de intervención moderada y racional a que me refería, que algunos denominan neocapitalismo, mantiene la estructuración económica individual o privada, con limitaciones indispensables en defensa de fines sociales o de interés colectivo. El corresponde a la mayor parte de los países de organización democrática, donde no se han eclipsado los conceptos para nosotros intangibles de respeto a la personalidad humana.

Han debido recurrir a tales limitaciones como consecuencia inevitable de las formas, que a través de los tiempos, fueron adquiriendo la producción, la industria y el comercio.

Roosevelt enfoca el problema con su certera visión de estadista, y sin una sola intermitencia, en su aguda sensibilidad democrática, definiendo la intervención estatal, para remediar, dice, la ausencia de la igualdad de oportunidad dentro de la actividad privada. Quiere decir que la intervención gubernamental la entiende para defenderla, para robustecerla, para estimularla, para prevenir deformaciones, para evitar excesos.

Hay que reconocer que en los tiempos actuales la intervención oficial, a este efecto es indispensable.

La libre concurrencia o competencia que configura el régimen de libertad comercial o industrial, sería imposible, aun en sus aspectos básicos, sin esa intervención, porque sería desnaturalizada, quizá impedida por las más diversas combinaciones del capitalismo centralizador, absorbente y voraz, entre ellas el dumping, los cartells, los pool, los trusts, los holdings, etcétera. Ello no quiere decir, sin embargo, que para remediar esos males, la intervención del Estado deba llegar a la absorción absoluta o monopolizada de todas las actividades productivas.

El ex presidente norteamericano proyectó para su país un reajuste de su economía, en su relación internacional y en su aspecto interno, en momentos de una aguda depresión económica, que era consecuencia mediata de la primera guerra europea. El Congreso de Estados Unidos, que

tuvo permanente intervención en el desarrollo de los planes económicos de ese país, aprobó el conjunto de medidas que constituyeron el reordenamiento económico que se conoce como «New Deal».

El principio de respeto a la personalidad humana, a los derechos individuales y a la iniciativa privada en su aspecto substancial quedó indemne.

Igual que Estados Unidos, repito, lo ha hecho la mayoría de los países regidos por instituciones democráticas y libres, y, por nuestra parte, colocados dentro de esa realidad internacional y nacional a que me referí, deseamos que la intervención del gobierno argentino, en los diferentes planos de la economía nacional, se mantenga dentro de los mismos fines y con los mismos alcances, porque de no ser así caeremos inevitablemente en la dictadura económica, con la consiguiente destrucción de las bases de nuestra organización, que queremos que sea y siga siendo libre y democrática.

Los decretos cuya aprobación se nos aconseja por la mayoría de la comisión, por sí solos y sobre todo, vinculados a los proyectos de fomento industrial, de aduana, etcétera, contenidos en el plan quinquenal, padecen de ese defecto esencial y gravísimo.

Mediante el manejo del control de cambios, el Estado no sólo fija el valor de la compra y venta de las divisas, sino que al ejercitar la facultad de otorgarlas o negarlas, controla todo el comercio de exportación e importación y, como consecuencia, el desenvolvimiento de nuestras industrias y de nuestro comercio interno.

Las facultades otorgadas al Instituto de Promoción del Intercambio, constituyen al Estado, como ya lo dije en otra oportunidad, en productor único, en industrial único y en comerciante único. Crean en su favor un monopolio irritantemente injusto y antieconómico, destructor de nuestra organización liberal y enervante de toda actividad privada.

Si se me objetara que ese monopolio no surge del texto gramatical del decreto, contestaría que por sobre él, surge de la realidad económica actual, exprimida por el gobierno —como ya dije en una breve interrupción al señor diputado Benítez— en su propio beneficio, especialmente con la monopolización del comercio de cereales cuyas utilidades se mantienen en el misterio y en cuya cuenta va a cargarse una exuberante prodigalidad.

**Sr. Ravignani.** — Y del aceite.

**Sr. Zara.** — Y del aceite también, señor diputado.

Las disposiciones del proyecto de fomento industrial, que se correlaciona directamente con estos decretos, acentúan esta orientación y facultan al Poder Ejecutivo para organizar y

controlar toda la actividad productiva argentina.

En estas condiciones, con esta planificación económica, para ajustarme a la terminología en boga, ¿qué lugar quedaría reservado a la iniciativa privada? ¿Qué garantía existiría de poder ejercitar los derechos que en materia de actividad comercial o industrial acuerda nuestra Constitución? ¿Qué estímulo podría impulsar a los particulares a crear o fomentar las industrias? ¿No estaríamos acaso, dentro de la socialización de los medios de producción y de cambio del sistema ruso, o dentro de la economía organizada de Italia o de Alemania? ¿No habríamos caído en la supresión lisa y llana de la actividad individual en materia económica? ¿No estaríamos frenando con ello el progreso del país?

La contestación a estos interrogantes, que es concorde en todos los espíritus, señala la dolorosa realidad de la etapa económica, estatizada que vive el país. Ella justifica además nuestra discrepancia con el despacho de la mayoría, que es una síntesis parcial de la orientación gubernativa en esta materia.

Por nuestra parte consideramos urgente que el país vuelva a los principios cuya vigencia alejaría la angustia y la inseguridad que esteriliza la iniciativa privada, cuya ausencia, en todos los tiempos, ha sido causa de estancamiento o de retroceso.

Recién llega a mi poder un interesante artículo perteneciente a un profesor de la Universidad de Pennsylvania, el doctor Raimundo T. Bye, donde encontramos conceptos como estos: «Para cumplir este propósito, el programa de planificación tendría que responder a dos requisitos básicos. En primer lugar debería conservar las características esenciales del actual sistema de precios. Esto significaría que la oferta y la demanda deben ser el Norte a seguir en la producción.»

«El otro requisito que un sistema de planificación democrática debe encarar, es que el organismo por medio del cual los planes deberían ser confeccionados y aplicados, sean genuinamente representativos. Esto significa que todo grupo interesado tuviese voz por medio de una representación electiva, en las resoluciones relativas a los planes para la industria.»

El propio presidente de la República, cuyo pensamiento orienta a la mayoría de este cuerpo, en el mensaje leído en este mismo recinto el 4 de junio pasado, ha reconocido que «nada perjudica tanto los cimientos de la vida económica, como los cambios bruscos de la legislación, porque impiden formular las previsiones que acrecientan los estímulos y espolean la libertad individual».

Esta verdad es más incontrovertible aún, si ese cambio está en abierta pugna con el senti-

miento colectivo, como sucede en nuestro caso, porque las normas jurídicas sólo pueden tener esa fuente o ese origen.

Hemos evolucionado también en este aspecto. Ya nadie podría concebir en un país evolucionado y libre que la ley pueda tener origen en la discrecionalidad de los príncipes, como nadie admitiría tampoco las teorías teocráticas del origen de la ley. El caso de Moisés descendiendo del Monte Sinaí con las tablas de la ley, el caso de Numa Pompilio, recibiendo la ley de Egeria, la ninfa de los bosques, sirven sólo para la historia del derecho, como un capítulo de agradable lectura. Las leyes se amasan en el seno de la colectividad y deben responder, en un momento determinado, a las ideas de la mayoría que orienta la vida de la comunidad.

En este caso no nos equivocamos al decir que todo este armazón económico, de acuerdo al cual se piensa conducir la vida de la Nación para que aumente los ingresos a las arcas fiscales, no cuenta con la adhesión de los argentinos.

El país tiene capitales suficientes como para emprender las más diversas empresas, cualquiera sea su envergadura, y sólo espera para hacerlo el clima de estabilidad, de confianza y de estímulo, cuya formación corresponde principalmente, casi en forma exclusiva, a los poderes públicos.

En vez de los malos ejemplos, debemos recoger las enseñanzas de las grandes democracias del mundo, que recién salidas de una guerra espantosa y agobiadora, vuelven a las buenas normas de restricción de la intervención del Estado.

Estados Unidos, que ha tenido contribución de sangre en la guerra y el mayor peso económico en su conducción, apenas salió de ella tomó las medidas necesarias para volver a las leyes naturales. Igual lo ha hecho Canadá, igual camino está siguiendo Nueva Zelanda, igual orientación se ha impuesto Inglaterra, países a los que citamos, pero cuyas enseñanzas no seguimos.

Yo desearía que nos orientáramos en esos ejemplos con la seguridad de que en vez de crear zozobras, abríramos en forma auspiciosa las puertas del porvenir argentino, en materia económica. (Aplausos.)

Si en vez de aprobar el despacho de la mayoría, fuéramos capaces de eso, en este momento excepcional de su economía, habríamos dado al país un impulso de décadas en su afán de salir de los límites rudimentarios de su economía rural; habríamos señalado una necesaria y leal adhesión a nuestro régimen constitucional; habríamos rectificado gruesos errores y habríamos reencauzado la economía argentina dentro de los carriles venturosos y promisorios de un progreso sólido y efectivo.

Desgraciadamente, los buenos propósitos, en ésta como en otras oportunidades, sólo quedarán señalados y sostenidos por el voto de la minoría radical. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Presidente** (Sustaita Seeber). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Mántaras.** — Después de los brillantes discursos pronunciados por diputados de nuestro sector, sobre todo el tan completo y exhaustivo del diputado Santander, casi no habría nada que decir sobre el particular, como no fuera referirse en concreto a ciertas disposiciones que contienen los decretos leyes que se pretende aprobar, que a simple vista significan una anomalía dentro del ordenamiento legal del país. Pero es que yo considero de tanta importancia el sistema económico que va a resultar de esta nueva ley bancaria, que he creído necesario expresar, aunque sea en breves palabras, los motivos que determinan mi voto en apoyo del dictamen de la minoría.

He escuchado al señor diputado por la Capital miembro informante de la mayoría; sus argumentos los había yo leído antes en las exposiciones de motivos que fundamentaron los decretos del gobierno defacto y voy a recoger solamente dos afirmaciones de él para contestarlas expresamente.

Dijo el señor diputado Benítez, refiriéndose a la política económica del ex presidente Roosevelt, que había querido intervenir en la economía privada porque se formaba de tal manera una fuerza poderosa por concentración económica en manos de particulares que competía con el gobierno, constituyendo así las características de un gobierno fascista. Yo le contesto que el ordenamiento legal que va a sancionar este cuerpo por el voto de la mayoría, confiere tal poder en manos del Banco Central que caracteriza típicamente una dictadura bancaria, que va de la mano casi siempre con una dictadura política.

Dijo también el señor diputado Benítez para justificar este control e intervención del Estado que no se vulneraban aquellos principios institucionales de los que nos hemos enorgullecido hasta ahora y que caracterizan a nuestra Constitución como una de las más liberales del mundo y que el Preámbulo contenía una disposición de carácter general que debía orientar toda la acción legislativa y gubernamental del Estado: la de promover el bienestar general. Efectivamente, ése es el objetivo principal del ordenamiento jurídico de nuestro Estado, pero el bienestar general debe estar condicionado a aquellos derechos y garantías que por ser substanciales con el régimen que ha establecido nuestra Constitución y porque forman parte del acervo histórico con que la nacionalidad se ha constituido, deben respetarse y no vulnerarse a través de disposiciones legales, por

más que al dictarlas se proclame como objetivo de las mismas, el bienestar general.

Al referirse también a las facultades que da este instrumento legal al Banco Central, el señor diputado Benítez dijo que era un arma que debía esgrimirse en momento de crisis, porque hasta ahora nos hemos encontrado indemnes sobre ese particular; que los fenómenos críticos se sucedían sin que el Estado tuviera en su poder un arma eficaz para prevenirlos.

Pero es que el ordenamiento que establecen los decretos que consideramos, no son medidas transitorias para aplicar en momentos de crisis con fines anticíclicos. El ordenamiento comprende disposiciones permanentes que van a crear nuevos tipos de economía en la Argentina. Va a desaparecer el tipo de libre iniciativa que hemos conocido hasta ahora y vamos a entrar en un nuevo régimen económico. Vamos a experimentar a costa del futuro del país. Esa es nuestra preocupación; ése es el motivo de nuestra disidencia. Tenemos ejemplos dolorosos que nos dan los acontecimientos pasados. Ninguna de estas medidas o innovaciones son novedades. Se han aplicado en las legislaciones de otros países, desgraciadamente para crear en todos una economía de poder, que llevó a la más trágica de las guerras que conoce la historia. Con esas medidas solamente supieron crear una economía para armarse, sin preocupar el presente de sus pueblos.

**Sr. Sorgentini.** — Hay que mencionar también los casos de Dreyfus y de Bunge y Born.

**Sr. Frondizi.** — Que continúan todavía con todo el poder económico.

**Sr. Díaz.** — Por la falta de apoyo de ustedes.

**Sr. Frondizi.** — No; porque el gobierno es amigo de Bunge y Born y de Bemberg.

**Sr. Sorgentini.** — ¿Le consta?

**Sr. Frondizi.** — Me consta. El gobierno no ha mandado el informe sobre el caso Bemberg que la Cámara ha pedido hace varios meses.

**Sr. Mántaras.** — Decía el señor diputado por Buenos Aires al referirse al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. . .

—El señor diputado Sorgentini pronuncia unas palabras que no se alcanza a percibir.

**Sr. Mántaras.** — Rogaría al señor presidente que me hiciera respetar en el uso de la palabra.

**Sr. Presidente** (Sustaita Seeber). — Señor diputado por Buenos Aires: el orador desea no ser interrumpido.

**Sr. Sorgentini.** — Disculpeme el señor presidente.

**Sr. Santander.** — No era una interrupción, sino un diálogo aparte.

**Sr. Mántaras.** — Decía el señor diputado Klix López que el Instituto de Promoción del Intercambio, al apropiarse de los saldos de ex-

portación, va a cumplir también una función económica interesante, porque va a tratar de evitar, en estos momentos de auge y de expansión económica, que continúe la espiral de la inflación, congelando los saldos.

Es el caso que esta congelación es solamente un medio para apropiarse de fondos o dineros por el gobierno, porque después vuelven a la circulación. Lo ha expresado el señor presidente hace varios días cuando ha manifestado que no va a recurrir a impuestos ni a empréstitos, porque la comercialización de productos por medio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio le facilitará los fondos necesarios. Quiere decir que no va a haber congelación ni reservas.

**Sr. Klix López.** — Pero eso va a ser en mínima parte.

**Sr. Mántaras.** — Será totalmente, no en mínima parte.

Al hacerse la publicidad con que se presentó al país este sistema, nuevo y original para la República, del ordenamiento bancario, se esgrimieron, como es natural, usando la técnica moderna de la propaganda, ciertos elementos que suenan muy bien a los oídos ciudadanos: se habló de la soberanía. ¿Cómo es posible que la facultad de emitir billetes, que es típicamente un acto de soberanía — más o menos son las palabras que escuché por radio en aquella oportunidad —, esté en manos de una institución bancaria a quien la Corte Suprema ha calificado de mixta y sui generis?

Pero es que la facultad de acuñar moneda en realidad no tiene nada que ver con la economía. La moneda es solamente un instrumento de cambio, y leyendo cualquier libro elemental de economía política podremos ver cómo se ha formado la moneda a través del tiempo, desde el bloque de sal hasta las cifras de la banca de nuestros días. Precisamente lo que menos significa en economía es la moneda que nace de la emisión de billetes por el Estado. Si uno examina las cifras del balance del Banco Central, podrá ver que el monto de los billetes emitidos es insignificante al lado de la otra moneda, la que gravita, la de los depósitos bancarios que, si no recuerdo mal, según una publicación de hace dos días, llegaba a la cifra de once mil millones de pesos más o menos.

**Sr. Cooke.** — ¿Me permite, señor diputado?

Junto con las facultades de emisión, el Banco Central tenía una serie de facultades que eran inherentes a la soberanía. Era responsable de los depósitos. Dirigía la política financiera...

**Sr. Mántaras.** — Ya le voy a decir al señor diputado. Todas las facultades que poseía el Banco Central por la ley anterior fueron establecidas por un acto de soberanía de la Nación, porque el Congreso se las acordó en uso de sus facultades constitucionales.

**Sr. Cooke.** — No, señor diputado; la delegación de la soberanía tiene sus límites. El concepto que emite el señor diputado es el de la ley de Partidas.

**Sr. Mántaras.** — Permítame continuar, señor diputado; después me va a contestar.

Decía que las facultades de emitir billetes o de emitir moneda no es nada más que un monopolio que ejerce el Estado, el cual estima necesario para su garantía, establecer la marca que significa la equivalencia o el título. Marca y equivalencia que están determinadas en este caso por la ley. No recuerdo el número del artículo del decreto que establece las facultades del Banco Central, donde al mismo tiempo se manifiesta la equivalencia del billete, en un peso determinado de oro, a que puede canjearse en ciertas circunstancias; pero a renglón seguido se especifica que una ley especial determinará la forma y el modo en que puede hacerse el canje de billetes por oro. Cualquiera de los señores diputados lea un billete de los que pueda tener en su bolsillo y verá que dice: «El Banco Central de la República Argentina pagará al portador y a la vista un peso moneda nacional.» Es decir, que cada uno de nosotros tiene un papel moneda de curso forzoso, en forma temporal, según la ley, aunque desgraciadamente en materia de economía lo temporal se convierte siempre en permanente.

Cada vez que escucho una disertación sobre el plan quinquenal presto atención para recoger razones serias y fundamentales que justifiquen esta expectativa que se va creando en el pueblo argentino, en el sentido de que con ese plan se va a salvar su situación futura. Creo que es una mala política porque se trata de una expectativa de la que pueden resultar defraudados. Entre las razones se enumera la de que el Banco Central era una institución calificada por la Corte Suprema como empresa mixta sui generis.

¿Qué importancia tiene este argumento y la calificación hecha por aquel tribunal, que se refiere a la forma jurídica de la sociedad? Era una empresa mixta y sui generis porque su naturaleza, constitución y forma no tenían precedentes: habían nacido en la ley de su creación. No había un patrón anterior al cual referirse para calificarlo.

Bien, señor presidente; yo no discuto la nacionalización del Banco Central. Creo que debe ser una institución del Estado. Estoy perfectamente de acuerdo. El Banco Central debe ser del Estado. Lo que discuto son las facultades.

Con el nuevo ordenamiento desaparecerán los bancos particulares. No tienen razón de ser. Esos bancos, por definición, son proveedores y hacedores de dinero. Proveedores de dinero porque al que solicita y reúne condiciones de garantía satisfactorias se le acuerda crédito y

hacedores de dinero porque con los depósitos que reciben procuran nuevo dinero y pueden seguir haciéndolo así indefinidamente. Por esta razón tiene indudablemente gran influencia en la economía del país el sistema crediticio y estoy de acuerdo en que se dicten leyes que establezcan en forma clara y terminante hasta qué límite los bancos comerciales pueden hacer uso de esta facultad de proveedores y hacedores de dinero.

La ley de creación del Banco Central establecía ya limitaciones, prescribiendo que debían tener determinada reserva para asegurar la liquidez. Esto no significa, en resumen, nada más que aquellos medios de que debe proveerse cualquier banco para que en un momento dado pueda poseer dinero, es decir, billetes de moneda legal con qué responder al requerimiento de las sumas que por los depósitos correspondan a los particulares.

Sin duda que debe aceptarse el control de la ley para asegurar esa liquidez y la responsabilidad de los bancos frente a terceros que hicieron fe en su solvencia al depositar el dinero; pero no estoy de acuerdo —y mi crítica alcanza también a la propaganda que se hace sobre el particular— en el apoderamiento por el Estado, ejerciendo el absoluto monopolio de los depósitos bancarios efectuados en los bancos comerciales.

Con fines de propaganda, se decía que estas medidas de gobierno tienen por finalidad garantizar a los terceros el importe de sus créditos e impedir que los bancos obtengan provecho con algo que constituye el patrimonio común de la Nación.

La garantía del Estado en este caso no es la causa, sino la consecuencia. Si el Estado se apodera de una cosa mía, lo menos que puede hacer es devolverla; pero la garantía del Estado debe tener otra significación: que me devuelva el dinero no solamente en cantidad, sino en la misma calidad del que deposité. ¿Qué me significa la garantía de una cantidad nominal, si el Estado con su política económica y financiera está día a día aumentando la espiral inflacionista en su afán de propender a su tipo de dinero barato que dispone para sí aprovechando la abundancia, lo que día a día influye en el alza de los precios y lógicamente hace perder el valor adquisitivo a la moneda?

No se hace nada con esa garantía nominal de cantidad. El pueblo hubiera estado absolutamente conforme si la garantía fuera no solamente de cantidad, sino de calidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Con este nuevo ordenamiento bancario los bancos particulares no tienen razón de ser. Sus operaciones se limitan a su capital y reservas exclusivamente. Dentro de la enorme cifra de millones que se mueven en las transacciones

económicas del país, dispondrán a su arbitrio de cantidades insignificantes que no llegan a 800 millones de pesos.

Queda el Estado con el monopolio absoluto del crédito bancario, porque los bancos particulares en adelante — y ya en el hecho por virtud del decreto — no serán más que meros intermediarios, serán mandatarios del Banco Central: acoradarán los créditos que el Banco Central les autorice. Y redescontarán la cartera así formada para disponer los fondos necesarios. El redescuento ha dejado de tener aquella función típica que tenía por la ley anterior, elemento de expansión en épocas de contracción. El redescuento no va a ser ahora nada más que un medio comercial que permitirá al Banco Central proveer de fondos, a diferentes tipos de interés, a los bancos, cobrando por ello la diferencia entre el tipo de descuento y la comisión que les reconozca. Pero en este control del crédito que establece en forma expresa la ley de bancos, existe una disposición que es menester criticar, porque demuestra la dictadura económica del Banco Central.

Los créditos no sólo se van a discriminar cuantitativamente, sino también cualitativamente. El Banco Central no sólo tendrá en cuenta la cantidad y las personas, sino que va a indagar para qué empresa o explotación se va a destinar el dinero. Pero hay algo más grave: establecerá diversos tipos de interés, según sea la naturaleza de los préstamos, y va a realizar determinadas discriminaciones de los bancos, los que deberán ajustarse a ciertas normas, con lo que desaparecerá en absoluto la competencia bancaria. Ya no habrá ningún interés en ser cliente de uno u otro banco, salvo por razones de comodidad o por estar más cerca a los mismos. El Banco Central será el amo absoluto del crédito bancario y de la economía del país, porque los decretos y leyes establecen que se incorporan al régimen y dirección del Banco Central no solamente la organización bancaria, sino también la economía de todo el país, las juntas reguladoras de la producción, el Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, etcétera; en fin, todos los organismos que influyen o intervienen en la economía quedan sometidos al Banco Central.

El gobierno, que por definición debe tener el propósito de orientar la economía del país, porque es una de las funciones esenciales del mismo, máxime en un régimen democrático, se desprende de una de las facultades substanciales, para entregarla a un organismo autónomo, como es el Banco Central, quien manejará la economía, el crédito y las finanzas del Estado a su arbitrio.

No voy a detenerme en las causas o motivos que, de acuerdo con los tratadistas, determinan la nacionalización de un banco. He leído un libro, *La Banca Moderna*, de J. R. Sayers, donde se

analiza la situación de Inglaterra con motivo de la socialización del banco de dicho país.

El mencionado autor llega a la conclusión de que cuando se nacionalizan los bancos comerciales —como ha ocurrido en nuestro país—, ya que al no poder realizar las operaciones bancarias habituales, desaparecen de hecho; decía Sayers que la socialización de los bancos se realiza en un país que quiere substituir su economía de tipo capitalista por una de tipo socialista. Esa no es la situación de la Argentina. Nosotros no queremos substituir nuestra organización jurídica por una organización de tipo estatal socialista.

Quiero referirme especialmente ahora a disposiciones concretas, sobre todo del decreto 12.596, sobre control de cambios, que establece la centralización de los mismos en el Banco Central, y sostener que la sanción de la Honorable Cámara, en virtud de que este decreto ha tenido primer tratamiento del Senado, como Cámara iniciadora, será inconstitucional. Este decreto, en su artículo 2º, al acordar al Banco Central la función de distribuir el cambio disponible entre las importaciones y otras remesas y, dentro de las primeras, fijar el orden de prelación por grandes grupos de artículos para el otorgamiento de las divisas, está creando aranceles aduaneros. Y la ley que legal y constitucionalmente lo establezca debe tener iniciación sólo en la Cámara de Diputados. Y dice a continuación el inciso a): «de acuerdo con el criterio expuesto en los considerandos del presente decreto».

Será la primera vez en el país que el artículo de una ley deberá aplicarse e interpretarse de acuerdo con un decreto. Me parece que la comisión deberá recoger esta observación.

Sería inconstitucional también la sanción por la forma en que está redactado, ya que la Cámara se desprendería de facultades propias para entregárselas, no ya al Poder Ejecutivo, sino a una institución autárquica. La Cámara entregaría al Banco Central la facultad de fijar arbitraria y discrecionalmente derechos aduaneros para ciertos grupos de artículos.

Ahora hará una referencia a la ley de prenda, en la que llama la atención el artículo 41 de la misma. Dice: «El que adquiera, a título oneroso, como libre, una cosa prendada, no contrae responsabilidad alguna respecto al acreedor prendario, sin perjuicio de las acciones penales contra el enajenante, que prescribe el artículo 44.»

Quiere decir, que por este artículo desaparece el derecho real de prenda; la prenda va a dejar, desde este momento, de tener eficacia en las actividades comerciales. Nadie acordará crédito de aquí en adelante con garantía de prenda.

Llamo sobre eso la atención de la Honorable Cámara, porque me imagino que las primeras instituciones que han de hacer advertencia seria

serán los bancos oficiales, a quienes, con fines de fomento, se les adjudica la facultad de acordar créditos para sociedades mixtas, etcétera.

Me parece que esa confusión viene de haber querido dar una nueva forma jurídica a la prenda. Todas éstas son maquinaciones propias de la expansión de crédito; fenómenos inflacionistas.

Quería referirme a las sociedades de economía mixta, pero otros colegas hablarán sobre el particular. Sólo diré que en la forma en que se define a estas sociedades de tipo mixto, no habrá explotación económica que no sea campo propicio para establecer una sociedad de este tipo.

En la forma en que está redactado el artículo, se modifica el Código de Comercio. Al introducirse este nuevo tipo de sociedad, no habrá actividad económica que pueda escapar a la acción del Estado. Este tipo de sociedad crea un privilegio para el particular que se asocia con el gobierno, y para los particulares o terceros contratantes con ella, no resulta ninguna garantía, porque la ley expresamente dice que estas sociedades no pueden quebrar. Sí, ya se sabe que el Estado no puede quebrar, y por eso la responsabilidad respecto a los terceros se limita, porque dentro del juego económico ya sabemos lo que significa la quiebra. La quiebra de sociedades de cierto tipo lleva implícita la quiebra de los particulares que la forman, los cuales responden por las deudas sociales no sólo con el importe de sus aportes, sino también con todos sus bienes personales.

Este nuevo tipo de sociedad va a crear una clase privilegiada: la de los socios del Estado. La economía libre será un oasis, porque nada podrá competir con estas sociedades, dado que el Estado, por lógica deducción, se presume llevó su *affectio societatis* al asociarse y propenderá a que la sociedad progrese y perdure, no permitiendo desde luego que fracase su negocio, a cuyo fin la ayudará con exenciones de impuestos, créditos, privilegios, etcétera.

Bien, señor presidente: el despacho en consideración tiende a crear en el país la intervención y dirección de la economía en general por intermedio de un organismo del Estado. Se encuentra el proyecto a consideración de este cuerpo, después de haberse sancionado la aprobación de tratados internacionales, donde la República se obliga a realizar actos particularmente adversos y contrarios a los que aquí se crean como legislación permanente, tratados internacionales en los cuales puso un empeño especial el Poder Ejecutivo, porque parecía que ellos serían una definición en materia de política internacional y, como consecuencia, en política interna.

En esos tratados, en el de México y sobre todo en la Carta Económica de las Américas, se establecen disposiciones que están en com-

pleta disparidad con las contenidas en los decretos leyes a consideración de la Honorable Cámara. Cuando allí se pide a las naciones contratantes que traten de eliminar gradualmente las trabas impuestas al comercio internacional, aquí se crean en forma permanente nuevas vallas.

El profesor Eugenio Stanley, en su libro *La economía del mundo en transición*, estudia este nuevo tipo de problema que crea la lucha entre el industrialismo y el nacionalismo que, según él, puede representarse como la resistencia opuesta por los estados soberanos a la constitución de un orden mundial basado esencialmente sobre la empresa privada, nacionalismo que ha conducido a la victoria a cualquier estadista capaz de utilizarlo en estos tiempos, según Toynlee. Ese nacionalismo fué el principio rector de la paz de 1918, disfrazado bajo el manto de la libre determinación de los pueblos, como lo expresa Condliffe en su libro *Reconstrucción del comercio mundial*, de donde recojo estos datos y cuyos inconvenientes señala el profesor Stanley de la siguiente manera: «Una política que impide al hombre moderno la utilización de los conocimientos adquiridos y le prohíbe aprovechar los recursos esenciales para su existencia actual en varias regiones del globo, acumula presión que ha de explotar de alguna forma. Las barreras económicas en los límites nacionales no sólo son incapaces de impedir los conflictos, sino que crean una base materialista para las guerras del futuro. Uno de los principios fundamentales de los interesados en el progreso económico y en la paz política debe ser reducir la significación económica de las fronteras políticas.»

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

Termino, señor presidente; nuestro país, joven, extenso y poco poblado, no puede ser considerado como aquellos de economía saturada, donde las iniciativas se ahogan en lo complejo del sistema colmado por razones demográficas y territoriales. Aquí las posibilidades continúan siendo accesibles para el espíritu de empresa, natural en el individuo, y el progreso de que nos orgullecemos, es producto de aquellas iniciativas.

En el afán de propender a un desarrollo inmediato, no hagamos nada que pueda ser a la postre más aparente que real y que se resienta, en razón del retraimiento de la iniciativa privada, el ritmo seguro y creciente de la grandeza y poderío económico que todos ambicionamos para la felicidad de todos los argentinos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Guardo). — En el plan de trabajo que estructuró la Honorable Cámara días pasados, no se estableció con precisión si la sesión se tiene que levantar a las 21 y 30 o a las 22 horas.

**Varios señores diputados.** — A las 21 y 30.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Si hay asentimiento general, se tendrá por resuelto que la sesión termina a las 21 y 30.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Guardo). — Queda levantada la sesión.

—Es la hora 21 y 30.